

Noviembre 20 y 21 de 1946

55ª REUNION — 11ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Silverio Pontieri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:			
Albrieu, Oscar E.	Díaz Colodrero, Justo	Mujica, Rodolfo	Valdez, Celestino
Alvarez, Juan Daniel	Díaz de Vivar, Joaquín	Noriega, Juan J.	Vanaaco, Julio A.
Alvarez, Néstor	Díaz, Manuel M.	Orozco, Modesto V.	Velloso Colombres, Manuel F.
Alvarez Pereyra, Manuel	Dri, Roberto	Osinalde, Rafael	Vergara, Amando
Alvarez Pérez, Vicente	Dufau, Juan Adolfo	Ottonello, Benito J.	Villafañe, José María
Alvarez Vocos, Enrique	Fajre, José Benito	Palacio, Ernesto	Visca, José Emilio
Allub, Rosendo	Fernández, Baltasar S.	Pasquini, José P. D.	Vischi, Albino
Antillo, Diógenes C.	Fernández, Hernán S.	Pastor, Reynaldo A.	Zanoni, Pedro P.
Aráoz, Ricardo E.	Ferrando, Manuel P.	Peña Guzmán, Solano	Zara, Edmundo Leopoldo
Arévalo Cabeza, Jabel	Ferrer, Modesto	Pérez, Pedro J.	Zlinny, Mario
Argañá, José M.	Fregossi, Luis J.	Pérez de la Torre, Horacio	
Arias, José	Frondizi, Arturo	Petruzzi, Miguel	AUSENTES, CON LICENCIA:
Ayala López Torres, Francisco	Galvagni, Saverio M.	Pirani, Antonio S.	Andreotti, Antonio
Ayerbe, Lázaro Balbino	Garaguso, Bernardino Hipólito	Pomar, Gregorio	Baulina, Angel V.
Balbin, Ricardo	Garay, Marcelino S.	Ponce, Angel L.	Beretta, Eduardo
Barreiro, Carmelo	García, Manuel	Pontieri, Silverio	Brugnerotto, Juan N. D.
Benítez, Antonio J.	García Quiroga, Alejandro	Pueyrredón, Horacio Honorio	Colom, Eduardo
Bertini, Amadeo	Giménez Vargas, Francisco	Raña, Eduardo Antonio	Cuminetti Correa, Alcides D.
Bonazzola, Romeo E.	Graña Etcheverry, Manuel	Ravignani, Emilio	Errecart, Juan A.
Bouillosa, Emilio M.	Guardo, Ricardo C.	Repetto, Agustín	Colom, Eduardo
Braga, Juan Carlos	Guillot, César Joaquín	Reyes, Cipriano	Cuminetti Correa, Alcides D.
Busaniche, Julio J.	Ianspolsky, Angel	Reynés, Leandro R.	Errecart, Juan A.
Calogno, Alfredo D.	Kees, Gaspar	Rodríguez de la Torre, Raúl	Gorlick, Carlos Gustavo
Cámara, Guillermo F.	Klix López, Guillermo	Rodríguez, Nerio M.	González Funes, Tomás
Cámpora, Héctor J.	Lareo, Ricardo	Rojas, Absalón	Jofré, Hernán R.
Camus, Eloy P.	Lasciar, Guillermo F.	Rojas, Nerio	Maineri, D. Jacinto
Candiotti, Alberto M.	Leclinas, José R.	Rouggier, Valerio S.	Marotta, José
Casas Nohlega, Armando	Letamendi, Balbino (h.)	Rubino, Sidney Nicolás	Pollzi, Juan
Clevo, Ernesto	Licaga, Félix J.	Rumbo, Eduardo I.	Ricagno, Roberto
Cooke, John William	López Serrot, Oscar	Sammartino, Ernesto E.	Rodríguez, Manuel
Córdova, J. Salvador	Mao Ray, Luis R.	San Millán, Ricardo Antonio	Rossi, José
Corvalán, Luciano R.	Málecsek, José Enrique	Santander, Silvano	Solanet, Emilio
Cufre, Orlando H.	Mántaras, Manuel J.	Saravia, Teodoro S.	Sorgentini, Mario Alberto
Curchod, Amado J.	Maristagni, Angel S.	Sarmiento, Manuel	Tejada, Ramón Washington
Decker, Rodolfo A.	Martínez Guerrero, Guillermo	Sarraute, José Roberto	
Degreef, Juan Ramón	Martínez Luque, Enrique	Sobral, Antonio	AUSENTES, CON AVISO:
De la Torre, Juan	Mendiola, F. Daniel	Sustaita Soeber, Héctor	Bagnasco, Vicente
Del Carril, Emilio Donato	Messina, Humberto	Tesorieri, José V.	Bustos Fierro, Raúl
Del Mazo, Gabriel	Montes de Oca, Carlos	Tommasi, Victorio M.	Casal, Raúl M.
Delloplane, Luis	Montiel, Alcides Esteban	Toro, Ricardo	Obeld, Leonardo
	Moreno, José Luis	Uranga, Raúl L.	
	Mosset Iturraspe, Mario	Urdapilleta, Oscar C.	

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Versiones taquigráficas.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley sobre jubilación del personal de Correos y Telecomunicaciones.

- II.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- III.—Comunicación oficial.

IV.—Despachos de comisión.

V.—Peticiones particulares.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado Mesina: creación, en la Secretaría de Salud Pública de la Nación, del Instituto de Higiene para profilaxis de las enfermedades venéreas.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado Sarmiento: Creación de una Escuela Teórico-

práctica de Agricultura e Industrias Afines, en San Pedro (Jujuy).

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Arévalo Cabeza: subsidios a la Federación de Maestros y Profesores Católicos.

IX.—Proyecto de ley del señor diputado Villafañe: pensión a doña Celia J. Izasa de Agüero Vera.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Veloso Colombres: aumento de subsidio a la filial de Rosario del Instituto del Cáncer.

XI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado San Millán y otros: pensión a doña María Esther Ayala Cross, viuda de Pujol, y a la señorita Rebeca Ayala Cross.

XII.—Proyectos de resolución y declaración en la mesa de la Honorable Cámara:

1.—Del señor diputado Díaz Colodrero y otros, sobre fijación de precios de la carne en el convenio con Gran Bretaña.

2.—Del señor diputado Pastor y otros: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cesantías en la administración nacional.

4.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Brugnerotto, Ricagno, Errecart, González Funes, Solanet, Tejada, Maineri, Rossi y Sargentini.

5.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Sammartino a propósito de proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso.

6.—Proyecto de resolución de los señores diputados Pastor y Díaz Colodrero: remisión por el Poder Ejecutivo de antecedentes de las conferencias realizadas con las misiones inglesas sobre negociaciones relativas a ferrocarriles. Por moción del señor diputado Decker se resuelve pasar a comisión el proyecto.

7.—Proyecto de declaración del señor diputado Pastor sobre inclusión en el período de sesiones extraordinarias, de un proyecto de ley que autorice la erección en la Capital de la República de un monumento a la memoria de Franklin Delano Roosevelt. Se resuelve tratar sobre tablas el proyecto de declaración, y es sancionado.

8.—Proyecto de resolución del señor diputado Rubino: pedido de informes al Poder Ejecutivo referentes a compras y ventas efectuadas por la Junta Reguladora de la Producción Agrícola.

9.—Moción del señor diputado Sarmiento, de preferencia para el proyecto de resolución, reproducido, sobre designación de una Comisión Es-

pecial encargada de estudiar medidas de protección de la población aborigen. Se aprueba.

10.—Indicaciones de los señores diputados Díaz y Lencinas, de pronto despacho del proyecto de ley, en revisión, y de proyectos de ley de señores diputados sobre modificación de la ley 10.650, de jubilaciones ferroviarias.

11.—Se resuelve el orden de consideración de asuntos.

12.—Consideración del despacho de la Comisión Especial revisora de decretos leyes, en el proyecto de ley sobre ratificación legislativa de decretos leyes relacionados con la creación y funcionamiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión y con la implantación de normas de legislación social.

13.—Apéndice:

Inserciones.

—En Buenos Aires, a los veinte días del mes de noviembre de 1946, siendo las 16:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Díaz. — Señor presidente: hago indicación de que se espere media hora a fin de obtener quórum.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Guardo). — Como hay asentimiento, se esperará.

—Se continúa llamando.

2

VERSIONES TAQUIGRAFICAS

—A las 16 y 25:

Sr. Presidente (Guardo). — Queda abierta la sesión con la presencia de 83 señores diputados.

Si no se observan las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones de los días 13, 14 y 15 de noviembre, se autenticarán y archivarán.

—Sin observación, se dan por aprobadas las versiones taquigráficas de los días 13, 14 y 15 de noviembre.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Guardo). — Por Secretaría se dará lectura de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1946.

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad llevando a su conocimiento el

al escalafón de los empleados y obreros de los Ferrocarriles del Estado.

—Resulta afirmativa de 81 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Pasa a ser entonces el tercer asunto; y como se corre el orden, quedarán en octavo lugar los demás asuntos del plan que ya había sido aprobado por la Cámara; se va a votar si se les acuerda preferencia en ese orden.

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 89 señores diputados.

Sr. Albricu. — Y a continuación las leyes impositivas...

Sr. Decker. — Cuando mocioné para que se trataran las leyes de bancos, agregué también las leyes impositivas.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia entendió que leyes bancarias y leyes impositivas figuraban unas a continuación de otras.

Sr. del Carril. — Pero son cosas distintas.

Sr. Presidente (Guardo). — Queda aprobado el plan.

Se va a pasar al orden del día.

12

COMISION ESPECIAL REVISORA DE DECRETOS LEYES

(Orden del día número 175) (1)

Honorable Cámara:

La Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes ha estudiado la documentación enviada por el Honorable Senado, relacionada con la creación y funcionamiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión; y con la implantación de normas de legislación social, dictadas a partir del 4 de junio de 1943 hasta el 3 de junio de 1946; y, por las razones que se aducen en el informe adjunto, y que ampliará verbalmente el señor miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Continuarán en vigor con fuerza de ley, a partir de la fecha en que fueron publicados, los decretos leyes que a continuación se transcriben:

(1) Véase el índice de los decretos leyes en la página 296 de esta edición del Diario de Sesiones.

I

DECRETO 15.074/43

Creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1943.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Créase la Secretaría de Trabajo y Previsión, dependiente de la presidencia de la Nación.

Art. 2º — A partir de esta fecha quedan incorporados a la Secretaría de Trabajo y Previsión los organismos que a continuación se indican y cuantos servicios, oficinas, secciones y demás dependencias de los mismos existan: Departamento Nacional del Trabajo, secciones de Higiene Industrial y Social y de Leyes de Previsión Social de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, sección de Accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, Comisión Nacional de Casas Baratas, Cámara de Alquileres, Comisión Asesora para la Vivienda Popular, Dirección de Inmigración, Tribunal Bancario, Comisión Honoraria de Reducción de Indios y Junta Nacional para Combatir la Desocupación.

Art. 3º — Pasan a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión los servicios y facultades de carácter conciliatorio y arbitral, así como las funciones de policía de trabajo, ejercidas por la Dirección General de Ferrocarriles y por la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes; los servicios de higiene industrial de la Inspección Técnica de Higiene de la Municipalidad de la Capital Federal, los servicios de inspección de asociaciones mutualistas actualmente incorporados a la Inspección de Justicia, los relacionados con el trabajo marítimo, fluvial y portuario a cargo de la Prefectura General Marítima y cuantos otros relacionados con la legislación, inspección, estadística y censos del trabajo tengan asignados dichos u otros organismos.

Art. 4º — El personal, material y demás elementos técnicos y administrativos de los organismos y servicios incorporados a que se refieren los dos artículos precedentes, excepto lo relativo a la Municipalidad de la Capital Federal, pasan a la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Art. 5º — Quedan transferidas a la Secretaría de Trabajo y Previsión las atribuciones y facultades otorgadas por la legislación vigente a los organismos y servicios incorporados y las que en orden a las mismas tenían otorgadas los ministerios de que dichos organismos dependían. Los decretos preparados por la Secretaría de Trabajo y Previsión, serán sometidos para ser refrendados por los ministerios que en cada caso corresponda.

La Secretaría de Trabajo y Previsión revisará los textos legales en vigor y propulsará las medidas que juzgue más oportunas para defender al trabajador y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, fomentar el acceso a la propiedad privada, acrecer la producción en todas sus manifestaciones y estimular la colaboración efectiva de todos los sectores sociales con objeto de robustecer los vínculos de solidaridad humana e incrementar el progreso de la economía nacional.

	Pág.		Pág.
CXIX. — 9.658/45		CXXI. — 10.837/46	
Derógase el artículo 77 de la ley 12.636 y los artículos 2º y 3º del decreto 27.833/44. Incorporación de la División de Tierras del Ministerio de Agricultura al Consejo Agrario Nacional. (S-1.094)	269	Autoriza la locación vitalicia de lotes fiscales. (S-1.136)	271
CXX. — 12.637/45		CXXII. — 2.823/46	
Atribución de facultades a la intervención del Consejo Agrario Nacional. (S-1.135)	270	Ampliación de crédito de la ley 12.815. (S-1.134)	271
		CXXIII. — 11.937/46	
		Salarios de encargados de casas de renta. (S-1.060)	272

INDICE POR ORDEN NUMERICO

Decreto Nº	Página	Decreto Nº	Página	Decreto Nº	Página	Decreto Nº	Página
168/44	38	10.586/44	31	15.589/45	120	26.214/44	84
491/45	132	10.644/44	224	15.590/45	40	26.774/44	131
678/45	226	10.837/46	271	15.591/45	224	27.797/44	59
963/46	161	10.991/44	48	15.592/45	112	28.011/44	99
1.740/45	50	11.157/45	32	16.130/46	195	28.036/45	214
2.362/45	100	11.516/45	130	16.162/46	198	28.131/44	214
2.823/46	271	11.598/43	161	16.163/46	231	28.169/44	162
3.122/46	261	11.616/45	39	16.312/44	161	29.176/44	113
3.750/46	192	11.937/46	272	16.490/45	130	29.294/44	181
4.114/45	98	12.366/45	69	16.674/43	48	29.669/44	240
4.148/46	261	12.637/45	270	17.470/44	162	29.830/44	67
4.531/45	231	12.963/45	239	17.923/44	80	30.279/45	61
5.103/45	242	13.082/45	133	17.999/44	48	30.545/45	47
6.289/43	152	13.096/46	45	18.627/45	98	30.550/45	223
6.363/46	240	13.460/46	46	18.659/45	249	30.730/44	97
6.395/46	100	13.462/45	133	19.921/44	49	31.307/44	97
6.648/45	153	13.839/46	55	21.877/44	31	31.665/44	122
7.394/45	181	13.937/46	134	22.174/44	84	32.378/44	85
7.487/46	37	14.103/44	239	22.212/45	182	32.412/45	160
7.646/43	152	14.534/44	92	22.541/44	97	32.471/44	181
7.662/43	153	14.535/44	202	22.372/45	187	32.932/44	85
8.187/46	87	14.538/44	153	23.407/44	67	33.302/45	250
8.539/44	79	14.548/44	223	23.852/45	51	33.339/45	259
8.873/44	31	14.549/44	95	23.914/45	188	33.914/45	112
8.986/45	59	14.682/46	144	24.095/45	249	34.206/44	86
9.024/45	239	14.954/46	62	24.097/45	240	34.207/44	86
9.316/46	120	15.074/43	29	24.252/44	49	34.331/45	246
9.505/45	60	15.089/45	39	24.458/45	70	34.584/45	191
9.658/45	269	15.090/45	214	24.499/45	40	35.762/44	86
9.694/44	33	15.355/46	70	24.772/45	112	35.763/44	32
10.135/44	47	15.356/46	73	25.776/44	50	35.765/44	223

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Argaña. — El miembro informante de una comisión se halla siempre frente a dos situaciones —las más generales—, respecto de lo que ha de ser materia de su informe. Son comúnmente las siguientes: deber hacerlo sobre un proyecto de escasa importancia, de escaso valor legislativo y de poco alcance social, lo que supone para el miembro informante tener excelentes cualidades dialécticas para defender ante la Cámara un proyecto de escaso valor intrínseco. En este caso, como miembro informante de la Comisión Especial de Decretos Leyes, me encuentro en una situación realmente privilegiada. Me corresponde informar un capítulo de legislación social y del trabajo, elaborado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que tiene extraordinario valor social y que, en la práctica, ha revelado el interés extraordinario que le asignan los trabajadores en general y en especial modo los trabajadores organizados, evidenciando así que esta novel institución del gobierno de la revolución había justificado, por los alcances y proyecciones de su labor, la valoración del movimiento revolucionario del 4 de junio.

La comisión especial me encargó de reunir los decretos relativos a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Informo a la Honorable Cámara en nombre de la mayoría de esa comisión. Desde luego, me habría sido muy satisfactorio hacerlo en nombre de la totalidad, pero razones de forma, más que de fondo, determinan sin duda, que haya también un informe de minoría. Y si bien no conozco los términos en que ésta va a fundamentar su disidencia parcial, entiendo que en lo conceptual y fundamental, que importa un beneficio para los trabajadores argentinos, habremos de coincidir.

De tal manera que, si bien hay una distancia con respecto al conjunto del despacho, ella no se referirá a lo fundamental que tienen estos decretos leyes contenidos en el orden del día 175, y relativos a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hay una serie de decretos con relación a su funcionamiento en sí mismo; y el resto de ellos está incluido en el informe, agrupados por materia de una cantidad de disposiciones creando y ampliando derechos y beneficios a los trabajadores, y en otra parte reglamentando leyes anteriores, con el propósito de extender los beneficios de la legislación del trabajo existente en el país. Pero en cuanto a la Secretaría de Trabajo, quizá sería conveniente detenernos un poco en lo que la mayoría de la comisión entiende que es de extraordinaria importancia.

Todos sabemos que para contemplar los problemas del trabajo, la primera organización que

hubo en el país fué la Dirección del Trabajo y luego el Departamento Nacional del Trabajo, creado por ley 8.999, del año 1912. Bien saben los señores diputados actuales y los que ocupan desde hace muchos años bancas en este recinto, y saben también muy especialmente los trabajadores argentinos que alguna vez han tenido necesidad de recurrir al Departamento Nacional del Trabajo, su absoluta ineficacia en lo que se refiere a la solución de los problemas obreros. Esa ineficacia en más de una oportunidad ha provocado en esta Cámara y en el Senado de la Nación interpelaciones muy fundadas, demostrando la inocuidad de aquella repartición para encarar y resolver con algún éxito los hondos y graves problemas, que día a día se han ido originando en el país como consecuencia de la evolución de la técnica de la industria argentina y del enorme desarrollo del comercio de la República. Estos dos factores de progreso general en el país —el desarrollo industrial y el comercial— no siguieron paralelos al adelanto de las instituciones llamadas a contemplar el posible equilibrio en las divisiones naturales de la clase capitalista y de la clase trabajadora, en la concentración de sus actividades y, en consecuencia, en los problemas de orden económico y social de la aglomeración de grandes masas de trabajadores.

El Departamento Nacional del Trabajo fué contemplado con pasividad por todos los gobiernos que se sucedieron desde el año 1912 hasta 1943, sin que las iniciativas habidas en ese período, sin que las interpelaciones ni las manifestaciones de todo orden habidas en el país, llevaran al ánimo de los gobernantes la imperiosa necesidad de modificar la estructura del Departamento Nacional del Trabajo para que sirviera las crecientes y agudizadas necesidades de una clase trabajadora cada vez más expoliada por la concentración de las industrias en nuestro país.

Todas las exhortaciones de los trabajadores organizados, las manifestaciones aisladas de muchas instituciones, las declaraciones aprobadas en congresos científicos o en reuniones de todo orden, tanto nacionales como continentales y de otras partes del mundo, no habían tenido ninguna consecuencia práctica en la modificación de la estructura del vetusto Departamento Nacional del Trabajo, cuya ineficacia había sido reiteradamente probada.

Fué necesario que en el país ocurriesen los acontecimientos del 4 de junio de 1943 para que, como una de las primeras consecuencias de ese movimiento revolucionario, se creara la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Es evidente que esta institución ha podido adolecer en sus comienzos —y podría aceptarse que aun hoy adolezca— de algunos defectos;

que no es una institución absolutamente perfecta, debido a la magnitud y gravedad de los problemas de carácter social que ha debido considerar y resolver, lo que ha determinado y exigido a los hombres de gobierno a superar las deficiencias de una experiencia todavía limitada.

Podría anotarse de paso, sin atribuirle gran importancia, que además de los inconvenientes de orden natural, propios de la creación de una institución que pasa del plano del pequeño e innocuo Departamento Nacional del Trabajo al de una organización como la Secretaría de Trabajo y Previsión, hubo algunos de otro orden. La Secretaría de Trabajo y Previsión es un órgano vivo, que recoge las palpitaciones de la masa popular y ausculta las necesidades, inquietudes y aspiraciones de los trabajadores del país, de modo que es lógico y razonable aceptar que se hayan presentado inconvenientes muy difíciles de salvar. Pero a los de orden institucional y a los provenientes de la enorme diferencia existente con la institución reemplazada, es público y notorio que se agregaron otros que conviene señalar, aunque más no sea que de paso, y sin atribuirles ninguna significación especial el diputado que habla ni la mayoría de la comisión. Me refiero al hecho conocido de factores de resistencia en el medio social argentino.

Los trabajadores en general, y en particular modo los organismos, se ubicaron bien frente a la importancia y a la conveniencia de tramitar y gestionar en la Secretaría de Trabajo y Previsión la solución de algunos problemas que tenían pendientes desde hacía muchos años. La nueva institución había demostrado la posibilidad de abordar esos problemas y dar soluciones eficaces a las necesidades que venían siendo postergadas a través del tiempo. De modo que los trabajadores organizados —y también aquellos que no lo estaban— comprendieron rápidamente la importancia que tenía para ellos llevar sus problemas a la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Pero así como la mayoría de los trabajadores argentinos, tanto los de la Capital Federal como los del resto de la República, comprendieron en seguida esas ventajas, hubo algunos núcleos, algunas organizaciones, que, enrolados en una campaña de orden exclusivamente político, le negaron a esta institución del nuevo gobierno la eficacia que pudiera tener, y les negaron asimismo todo valor a las conquistas que podrían obtenerse para los trabajadores del país, oponiéndose sistemáticamente a que la Secretaría de Trabajo y Previsión interviniera en los problemas que les afectaban.

Pero ocurrió un hecho que era previsible. Los trabajadores, en ninguna época del desarrollo capitalista ni de la historia del mundo, han

podido detenerse a considerar el origen puro o impuro, desde el punto de vista institucional, de los gobiernos que han manejado la cosa pública, para plantear y buscar la solución de sus problemas, siempre de exigencia perentoria.

Los trabajadores consideraron, en su mayoría, que no podían esperar una solución constitucional en el país para plantear sus necesidades e inquietudes. Los dirigentes fueron superados por la masa trabajadora; los dirigentes, que con falsas miras habían querido detener el impulso de las masas para acercarse a la Secretaría de Trabajo y Previsión, a fin de plantear los problemas, para los cuales obtuvieron resultados negativos, cuando recurrieron a los gobiernos anteriores.

Esas masas trabajadoras pasaron por encima de los dirigentes que habían ejercido una influencia perjudicial; llegaron hasta la Secretaría de Trabajo y Previsión, no obstante la resistencia de algunos dirigentes sindicales y de la organización capitalista, que con su enorme propaganda mediante la prensa, revistas, folletos, pasquines; la radio, el cine, el teatro, y todas las formas posibles de publicidad, criticaban de modo especial su creación, que algunos llamaron diabólica.

La enorme masa de trabajadores no compartió el punto de vista de que esa secretaría se creaba para anquilosar el espíritu de rebeldía y libertad de los trabajadores. Esa masa vió con más claridad que algunos señores, que creyeron ver en la Constitución un obstáculo, como si ella pudiera impedir el progreso general del país y el mejoramiento de la clase trabajadora. Si fuese un obstáculo, si hubiese envejecido, habría que pensar en remozarla. Pero no es así: los hechos han demostrado por encima de toda teoría y dialéctica, que la Constitución no es una valla para que se cumplan aquellos fines.

Los hechos han demostrado que en forma bien o mal intencionada, se ha estado faltando a la verdad; que no se ha dicho la verdad al pueblo. Pero el pueblo no se deja engañar demasiado, no va detrás de quimeras; contempla la realidad y deduce sus consecuencias.

Desde luego, no voy a cometer la torpeza de creer que la Secretaría de Trabajo ya ha solucionado todos los problemas que afectan a los trabajadores de nuestro país. La Secretaría de Trabajo y Previsión ha demostrado su eficacia hasta ahora, y aliento la esperanza de que lo siga haciendo en el futuro; exhorto a los que están al frente de su dirección para que sigan haciendo de esa institución el laboratorio vivo de la solución de los problemas que afectan a muchos trabajadores argentinos que todavía esperan que se ratifique, que se solidifique en forma permanente y definitiva, su elevación moral y material.

No ha cumplido todavía toda la tarea que le incumbe. Y este orden del día, con tener un magnífico capítulo de legislación social y del trabajo, no es toda la obra cumplida en el terreno económico, social, de la previsión, de la cultura proletaria, en todos los terrenos en los que le corresponde actuar a esta institución, no es toda la enorme labor ya realizada. La Secretaría de Trabajo y Previsión ha sido un enorme laboratorio de magníficas leyes y decretos de todo orden, que han mejorado sensiblemente las condiciones morales y materiales de los trabajadores en todo el país.

Este fenómeno corresponde ser señalado. Hasta el año 1943 era perceptible la elevación moral y material de los trabajadores de la Capital y de los grandes centros poblados. Pero algunas de las provincias argentinas, que en el terreno económico y social no parecían pertenecer a la unidad de la República, recién lo han sido en el verdadero sentido de la palabra, cuando los trabajadores sintieron la suficiente independencia personal, para poder ostentar con satisfacción, como el ejercicio de un legítimo derecho, la afiliación a la institución sindical que defendiera sus intereses colectivos. Niego que en la rica provincia de Tucumán, en la hermosa provincia de Salta y en casi todas las provincias del Norte, los trabajadores argentinos tuvieran independencia para sindicarse; por el contrario, corrían riesgo de ser perseguidos o apaleados por las policías bravas de aquellas provincias.

No ha desaparecido de nuestra organización el sistema capitalista. Hay una clase capitalista y hay una clase trabajadora; pero los trabajadores pueden ejercer ahora los derechos que les acuerda la Constitución. Yo diría que para muchos trabajadores argentinos recién después de 1943 se ha descubierto la Constitución nacional, que les acuerda derechos, garantías y algunas libertades. Si observamos la realidad nacional, comprenderemos por qué hay en todo el territorio de la República una mística, un verdadero estado de entusiasmo, que no se apaga, contrariamente a lo que se quiere demostrar, solamente con palabras, no ratificadas por los hechos; no se apaga este estado de mística alrededor del movimiento revolucionario del 4 de junio. Yo diría que la llama que alimenta al misticismo de los hombres del pueblo, de la clase trabajadora, está cada día más viva, porque se agranda la base de sustentación del progreso social de los trabajadores argentinos. (*Aplausos.*)

Se explica que los trabajadores se hayan sentido alentados y esperanzados por la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y frente a este hecho perfectamente lógico, perfectamente explicable, hemos podido llegar a esta otra comprobación.

Sabemos por experiencia cuál era la autoridad moral del vetusto Departamento Nacional del Trabajo frente a los representantes de las empresas o frente a algunos capitalistas. Cuando se presentaba alguna organización sindical o un grupo de trabajadores a reclamar la intervención del departamento para obtener una mejora, los funcionarios, dentro de las escasas atribuciones que les asignaba la ley de creación, se limitaban a labrar un acta y a citar al empresario que motivaba la reclamación, quien pocas veces concurría, pues generalmente lo hacía por intermedio de su abogado asesor o de un representante apoderado. Entonces, el representante escuchaba del funcionario del departamento la enunciaci3n de los motivos de la citaci3n y manifestaba invariablemente que no estaba autorizado para adoptar ninguna medida y que daría cuenta a su mandante o al directorio de la empresa. Luego, enviaban una nota manifestando que no podían aceptar, que las características de su industria, o el estado económico les impedían, a pesar de estar de acuerdo, la aceptaci3n de los reclamos.

Los antecedentes del Departamento del Trabajo y de la legislación del trabajo registran innumerables expresiones, siempre favorables a las demandas de los trabajadores. Nunca dijeron los capitalistas o los representantes legítimos o ilegítimos ante esta Honorable Cámara, que los trabajadores no tenían razón. Siempre decían: los trabajadores tienen razón; estamos de acuerdo con ellos, pero hay que estudiar detenidamente la cuesti3n; no se puede improvisar, porque las soluciones demasiado rápidas pueden perjudicar en vez de beneficiar a los trabajadores, y nosotros no queremos perjudicarlos. Esa era la eterna cantilena con que se recibían las demandas legítimas de los trabajadores, tanto en el Departamento del Trabajo, como en otros resortes oficiales del gobierno.

Hay dos maneras de no llevar a la práctica las demandas de los trabajadores: una consiste en oponerse valientemente y de frente, negando el derecho a reclamarlas o la raz3n en que se fundan; la otra consiste en expresar conformidad con las demandas, en reconocer verbalmente la justicia que asiste a los trabajadores y en prometer un estudio detenido de la cuesti3n a fin de no perjudicarlos, porque, ¡pobrecitos trabajadores!, es posible que se los perjudique con una ley no estudiada detenidamente.

Así es que algunas iniciativas presentadas a la Honorable Cámara debieron ser objeto de gestiones reiteradas durante 20 ó 25 años, de magníficos discursos y de repetidas promesas para lograr convertirse en realidad. Si analizamos los antecedentes de la legislación del trabajo que revisten alguna importancia, comprobamos

que se han necesitado quince, veinte o veinticinco años de reclamaciones de las organizaciones obreras, de reiteradas demandas, de publicaciones, de volantes, de manifiestos, de huelgas, para obtener la sanción o el reconocimiento de algunas mejoras. Después de una agitación extraordinaria en todo el escenario del país, con evidente perjuicio para la economía del mismo y para la situación de los trabajadores, después de tremendas luchas, recién a los 15 ó 20 años se han obtenido sanciones que no siempre satisfacían las inquietudes de los trabajadores, porque este Congreso ha sancionado, veinte años después de ser reclamadas, algunas leyes, cuando ya esa sanción legal, si bien significaba sentar el criterio jurídico respecto al problema, llegaba tarde, porque las organizaciones obreras, en su puja y en su lucha permanente contra la clase capitalista, ya habían obtenido conquistas muy superiores a las que les daba la ley.

Con respecto a la Secretaría de Trabajo y Previsión, algunos constitucionalistas y algunos juristas muy apegados a la forma escrita, han considerado que constituía un abuso del poder público y un avance en contra de las autonomías provinciales, porque las delegaciones regionales de esa secretaría planeaban en las provincias la aplicación lisa y llana de la legislación nacional. Y yo pregunto: ¿qué valor jurídico o constitucional puede tener el argumento, frente a una revolución que abroga el Congreso de la Nación, que abroga el Poder Ejecutivo, que anula a todos los gobiernos provinciales? ¿Acaso alguna disposición formal de las constituciones de provincias puede impedir el progreso para los trabajadores de esas provincias, que también son ciudadanos argentinos, con las mismas inquietudes, aspiraciones y necesidades de los trabajadores de la Capital Federal? Sería realmente paradójico que el gobierno de la revolución hubiera dicho: no existe más el Poder Ejecutivo de la Nación, no existe el Congreso de la Nación, expresión popular por excelencia, porque no respondía en su composición y en su origen a la pureza que debe tener la representación popular en nuestro país, pero vamos a respetar las autonomías provinciales, en cuanto ellas puedan ser un obstáculo para que los trabajadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja puedan gozar de un poco más de bienestar, juntamente con los hermanos de la Capital Federal o de los grandes centros poblados de la República. Ello habría significado una negación del sentido político y social de esta revolución, la negación de la revolución misma.

La revolución del 4 de junio adquirió un sentido social evidente y nítidamente conformado, cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión demostró que era capaz de dar a los trabajadores, en forma rápida, la solución de los

urgentes problemas que los afligen. Ya ha solucionado una cantidad de problemas que voy a esbozar someramente, porque el tiempo me impide hacer un análisis detenido de 123 decretos leyes, entre los cuales hay por lo menos veinte que merecerían dedicarles un par de horas para demostrar toda su importancia.

Cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión demuestra que es un laboratorio vivo, que siente y palpita al unísono con las necesidades del pueblo y soluciona rápidamente sus problemas, se desata toda una avalancha de críticas en contra de esta institución del Estado y dicen que eso es un avance a la justicia, al derecho, a las autonomías provinciales, que los delegados regionales son agentes electorales del gobierno. Y ello es porque tuvieron miedo, porque había previsto, como consecuencia de la influencia social que ello representaba y del poder económico que les daba a los trabajadores, las consecuencias de carácter político que sobrevenirían.

Pero yo me pregunto: ¿por qué los gobiernos anteriores a la revolución del 4 de junio no aplicaron los métodos de mejoramiento y elevación moral y material de los trabajadores, para lograr de cada trabajador un hombre entusiasta del gobierno? ¿Cuál es la situación que se crea a un gobierno como el anterior al 4 de junio, de 1943, huérfano de todo calor popular, huérfano de toda simpatía; gobierno que estaba prácticamente en el aire y que bastaba un soplo para derribarlo, como efectivamente ocurrió? En cambio, cuando los gobiernos revolucionarios o constitucionales son capaces de luchar por las necesidades de los trabajadores, de tenerlas en cuenta, son capaces de encarar soluciones y sobre todo de resolver sus problemas, esos gobiernos adquieren lógicamente la simpatía y el calor de la masa popular, porque el pueblo se siente interpretado en sus necesidades y aspiraciones.

¿Qué es lo que impedía a otros gobiernos que resolvieran con rapidez, con acierto, las necesidades del pueblo argentino? Eran siempre postergadas por un motivo o por otro, y muchas veces, para escarnio de las necesidades populares, eran objeto de un manoseo político, electoralista, que realmente indignaba a los hombres que veíamos cómo se hacía mofa de los trabajadores. Se explotaba las necesidades de la masa obrera poniéndola de manifiesto en los momentos que había que reclamar a los ciudadanos el voto por si acaso los ciudadanos volcaban sus simpatías hacia algunos candidatos oficialistas presidenciales o a diputados de la Nación o de las provincias; pero cuando esas promesas, reiteradamente incumplidas, no eran suficientes para volcar la simpatía de la masa popular, entonces no hacían falta los votos, y si los ciudadanos no daban sus votos para consagrar

gobiernantes con alguna legitimidad, ¿qué importaba a esos gobernantes la opinión pública, si prescindían de ella para ser gobernantes, si no les hacía falta? Les bastaba el fraude, el atropello y la venalidad como recursos que se esgrimían el día de la elección, aunque insuficientes para callar la repulsa y las protestas de la masa popular.

Este orden del día contiene 123 decretos que irá analizando por materia. Sobre la Secretaría de Trabajo y Previsión hay doce decretos, que son los siguientes:

Decretos: 15.074/43, 8.873/44, 10.586/44, 21.877/44, 35.768/44, 11.157/45, 11.616/45, 15.089/45, 15.590/45, 24.499/45, 13.096/46, 13.460/46.

Accidentes de trabajo: 2 decretos.

Decretos: 10.135/44, 30.545/45.

Pagos de salarios en días feriados: 6 decretos.

Decretos: 16.674/43, 10.991/44, 17.999/44, 19.921/44, 24.252/44, 25.776/44.

Vacaciones pagas: 1 decreto.

Decreto 1.740/45.

Organización y funcionamiento de asociaciones profesionales obreras: 1 decreto.

Decreto 23.852/45.

Estatuto del personal administrativo de empresas periodísticas: 1 decreto.

Decreto 13.839/46.

Régimen de trabajo del personal de telegrafistas, y radiotelegrafistas: 5 decretos.

Decretos: 27.797/44, 8.896/45, 9.505/45, 30.279/45, 14.954/46.

Régimen de trabajo y salarios del personal bancario: 5 decretos

Decretos: 23.407/44, 29.830/44, 12.366/45, 24.458/45, 15.355/46.

Estatuto obrero del petróleo: 1 decreto.

Decreto 15.356/46.

Jubilaciones y pensiones civiles: 11 decretos.

Decretos: 8.539/44, 17.923/44, 22.174/44, 26.214/44, 32.378/44, 32.932/44, 34.206/44, 34.207/44, 35.762/44, 7.487/46, 8.187/46.

Jubilación y régimen de previsión para ferroviarios: 9 decretos.

Decretos: 168/44, 9.694/44, 14.534/44, 14.549/44, 22.541/44, 30.730/44, 31.307/44, 4.114/45, 18.627/45.

Jubilación al personal de la marina mercante: 6 decretos.

Decretos: 28.011/44, 2.362/45, 6.395/45, 15.592/45, 24.772/45, 33.914/45.

Instituto Nacional de Previsión Social: 3 decretos.

Decretos: 29.176/44, 15.589/45, 9.316/46.

Jubilación empleados de comercio: 3 decretos.

Decretos: 31.665/44, 11.516/45, 16.490/45.

Jubilación de empleados de servicios públicos: 3 decretos.

Decretos: 26.774/44, 491/45, 13.082/45.

Jubilación de empleados bancarios: 1 decreto.

Decreto 13.462/45.

Jubilación a obreros de la industria: 1 decreto.

Decreto 13.937/46.

Ahorro postal (texto ordenado): 1 decreto.

Decreto 14.682/46.

Aprendizaje y trabajo de menores: 6 decretos.

Decretos: 6.289/43, 7.646/43, 7.662/43, 14.538/44, 32.412/45, 963/46.

Gratuidad de la actuación en juicios para empleados y obreros: 1 decreto.

Decreto 11.598/43.

Excepción a la retención de salarios y sueldos: 1 decreto.

Decreto 16.312/44.

Eliminación de contratistas vinculados a empresas ferroviarias: 1 decreto.

Decreto 17.470/44.

Estatuto del peón: 1 decreto.

Decreto 28.169/44.

Régimen de trabajo y salarios para el personal de hospitales y sanatorios particulares: 4 decretos.

Decretos: 29.294/44, 3.247/44, 7.394/45, 22.212/45.

Salarios mínimos para el personal de la industria alimenticia: 1 decreto.

Decreto 23.372/45.

Salarios y condiciones de trabajo para obreros molineros: 1 decreto.

Decreto 23.914/45.

Salarios mínimos para obreros fideceros y afines: 1 decreto.

Decreto 34.584/45.

Estatuto del tambero: 1 decreto.

Decreto 3.750/46.

Régimen de trabajo del personal aeronáutico: 1 decreto.

Decreto 16.130/46.

Régimen de trabajo en la industria aceitera: 1 decreto.

Decreto 16.162/46.

Jubilación de periodistas: 5 decretos.

Decretos: 14.535/44, 28.131/44, 15.090/45, 28.038/45, 30.550/45.

Suplemento de salario para hijos naturales reconocidos: 1 decreto.

Decreto 14.548/44.

Jubilación del personal de la policía marítima: 1 decreto.

Decreto 35.765/44.

Jubilación a ex legisladores y ex ministros nacionales: 1 decreto.

Decreto 15.591/45.

Condiciones de trabajo en la industria azucarera: 4 decretos.

Decretos: 10.644/44, 678/45, 4.531/45, 16.163/46.

Salarios y condiciones de trabajo de los obreros de los frigoríficos: 5 decretos.

Decretos: 14.108/44, 9.024/45, 12.963/45, 24.097/45, 6.363/46.

Salarios y condiciones de trabajo para obreros panaderos: 1 decreto.

Decreto 29.669/44.

Reglamentación de las profesiones de ciencias económicas, etcétera: 2 decretos.

Decretos: 5.103/45, 34.331/45.

Obligatoriedad del convenio de la industria de la construcción: 1 decreto.

Decreto 18.659/45.

Devolución de periódicos: 1 decreto.

Decreto 24.095/45.

Instituto Nacional de las Remuneraciones: 1 decreto.

Decreto 33.302/45.

Obligatoriedad del convenio de la industria del caucho: 1 decreto.

Decreto 33.339/45.

Aprobación del convenio de compañías de electricidad: 1 decreto.

Decreto 3.122/46.

Obligatoriedad de laudo gastronómico: 1 decreto.

Decreto 4.148/46.

Consejo Agrario Nacional (Disposiciones): 3 decretos.

Decretos: 9.658/45, 12.637/45, 10.837/46.

Ampliación de créditos de la ley 12.815: 1 decreto.

Decreto 12.823/46.

Salarios de encargados de casas de renta: 1 decreto.

Decreto 11.937/46.

Estos decretos, agrupados por materia y relacionados con la Secretaría de Trabajo y Previsión, se descomponen así:

Secretaría de Trabajo y Previsión . . .	12 decretos
Accidentes de trabajo	2 "
Régimen de trabajo y salarios	50 "
Jubilación y asistencia social	46 "
Justicia de Trabajo	1 "
Reglamentación de asociaciones profesionales	1 "
Ahorro postal	1 "
Consejo Agrario Nacional	3 "
Vacaciones pagas	1 "
Aprendizaje y trabajo de menores . . .	6 "
Total	123 decretos

Voy a citar muy someramente, por la premura del tiempo, algunos de los decretos de Trabajo y Previsión: el 15.074 del 27 de noviembre de 1943, sobre creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dependiente de la presidencia de la Nación; decreto 8.873, del 13 de abril de 1944, autorizando al secretario de Trabajo y Previsión para delegar en el director general de trabajo las funciones que acuerda la ley 11.570; el decreto 10.586, del 28 de abril de 1944, declarando exento de impuesto toda petición relacionada con las leyes de Trabajo y Previsión; el decreto 21.877, del 16 de agosto de 1944, estableciendo penalidades para las personas o entidades que obstruyan la acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Vale la pena detenerse breves instantes para hacer algunas consideraciones sobre la actitud de algunos capitalistas en esta materia.

No puede negarse la insolencia permanente, digamos así, de ciertos capitalistas y sus negativas reiteradas para atender en mínima parte la demanda de los trabajadores, factores de su riqueza individual y de la colectiva. Hubo señores capitalistas que han tenido la insolencia, diría yo, de no molestarse siquiera en concurrir al Departamento Nacional del Trabajo cuando se trataba de un problema obrero, para informarse del mismo o para discutir con sus trabajadores, a quienes han explotado constantemente acumulando riquezas que honradamente no les pertenecen; si bien el sistema vigente considera legítima la mayor ganancia, que es moral la

ganancia obtenida del esfuerzo del hombre al servicio de una empresa, de una industria, en el lenguaje humano y la situación del hombre dentro de la sociedad, podemos ahora avanzar un poco más y sostener que el fruto del trabajo obtenido por el hombre y no abonado suficientemente, es un abuso del poderoso, es un abuso del esfuerzo del trabajador en beneficio de pocos individuos amparados por todo el aparato del Estado, por toda la organización del Estado moderno. Ese individuo no tiene el derecho, no se puede arrogar el derecho de negarse a concurrir a una repartición que reclama su presencia para satisfacer los reclamos de los trabajadores, de los cuales no pueden prescindir para el funcionamiento de sus empresas. La Secretaría de Trabajo y Previsión se vió obligada a adoptar esta resolución para presionar a esos señores a que concurrieran a los estrados correspondientes a ventilar sus diferencias con los trabajadores.

Hablando de ciertas empresas capitalistas, afirmo que no hay diferencias entre nacionales y extranjeras. El capitalismo no tiene religión, ni siquiera patria. Rendimiento, ganancias: eso es lo que tienen. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*) Que sus ganancias sean mayores, es a lo que aspiran, no importa si por medio de la extorsión y a veces del crimen. El capitalismo tiene en su historia muchos crímenes en procura de ganancias o en busca de mercados que le permitieran obtener mayores utilidades. Estos capitalistas todavía hoy, en el año 1946, entienden que son señores de horea y cuchillo, y que pueden negarse a dirimir las diferencias que se suscitan con los trabajadores que emplean, hombres de la calle, que para ellos carecen de nacionalidad, de ciudadanía y de dignidad.

Entonces, ¿cómo no vamos a comprender que la clase trabajadora vive un momento psicológico especial con respecto a la revolución del 4 de junio, a la que apoya y alienta? Es necesario decir que si alguna vez, ese movimiento del 4 de junio en su evolución económica, social y democrática peligrara por obra de una fuerza de adentro o de afuera, centrífuga o centrípeta, estoy seguro que los trabajadores derramarán su sangre para defenderlo de cualquier asechanza. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

No vivimos una ilusión, sino una realidad, que queremos consubstanciada y definitiva, en un progreso ascensional no interrumpido, a cuyo impulso la clase trabajadora dará sentido jurídico, si es que los juristas no saben encontrar la fórmula para que las conquistas de los trabajadores sean definitivas dentro del derecho.

Hay hechos que son dolorosos y repugnantes para los hombres que hemos nacido y vivido en este suelo, y que manifestamos con satisfac-

ción y orgullo que somos un gran país en el continente americano.

Somos conscientes de que estamos en pleno progreso; que con un gran potencial de desarrollo interior, tenemos enormes posibilidades, lo que nos da la seguridad que habremos de tener la satisfacción, si no nosotros, nuestros descendientes, de ver a la República respetada por los de adentro y los de afuera. (Aplausos.)

Tenemos una limpia trayectoria que viene de nuestros antepasados y que nos presenta como un país que no tiene en su historia ninguna página mal escrita, ningún hecho que avergüence o sonroje a un ciudadano argentino, cuando pisa el suelo de los demás países hermanos de América.

Los hombres de trabajo seremos todo lo modestos que se quiera, pero reclamamos un mínimo de derechos, que exijéremos si es necesario. Esto no es una bravata, ni una amenaza, porque me siento incapaz de proferirla, pero sí afirmo que reclamamos imperiosamente un derecho inalienable en favor de la superación constante del pueblo argentino y de sus trabajadores.

Cuando la clase trabajadora se eleva moral y materialmente, eleva también al país, al cual no podemos disociar del progreso o de la miseria que vive el pueblo argentino.

Si el tiempo reglamentario me lo hubiera permitido, me habría detenido en ciertos aspectos muy importantes de algunos de estos decretos leyes del orden del día 175; en algunos aspectos de la lucha tremenda que hemos tenido que librar.

Hubo masas de trabajadores que, hasta enero de 1946, para defender una conquista, no habían tenido oportunidad de demostrar su valentía. El gremio numeroso de empleados de comercio, especialmente los de la Capital Federal, al tomar posesión de los establecimientos donde trabajaban, demostraron una honorabilidad, una honestidad e integridad moral, que es necesario destacarlas.

Muchos millares de hombres y mujeres, empleados de comercio que se mantenían dentro de sus establecimientos, donde había comestibles, bebidas y muchas cosas indispensables para su subsistencia, nada tocaron durante su encierro voluntario, nada que no les perteneciera legítimamente, demostrando una conciencia social y disciplina sindical que quisiera que todos los sectores sociales argentinos pudieran mostrar y yo reconocer.

Ante la negación de un derecho, soportaron hambre y sed en los días calurosos de enero de 1946, y se constituyeron en custodia de lo que estaba a su alcance.

Sr. López Serrot. — La misma honestidad de los universitarios argentinos, cuando se posesionaron de las facultades.

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Argaña. — Los trabajadores han tenido oportunidad de demostrar su alta jerarquía moral. Acepto que haya otros grupos sociales que puedan colocarse a igual altura, pero los hechos revelan que nadie ha llegado a mayor altura. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Estamos considerando un importante y magnífico capítulo de la legislación del trabajo del gobierno de la revolución del 4 de junio. La Honorable Cámara debe dar su voto favorable para el ordenamiento jurídico de esta legislación, sin pensar que haya artículos imperfectos, susceptibles de reformas ulteriores. Si se introdujeran ahora modificaciones substanciales, miles de trabajadores serían lesionados irremediablemente en sus intereses y no creo que la Honorable Cámara quiera cometer ese gravísimo error.

La Honorable Cámara debe dar sanción legal a cada uno de los decretos en las fechas en que fueron dictados, es decir, respetar la fecha originaria de cada uno de ellos, pues los derechos que establecen están pendientes desde el día en que fueron dictados por el gobierno de la revolución. Los empresarios y capitalistas que no los hayan cumplido están en mora, y serán pasibles de las penalidades que establecen los mismos, si no los cumplen en todas sus partes. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — El miembro informante de la mayoría se lamentaba de no haber podido producir su informe en nombre de toda la comisión. Como voy a informar en nombre de la minoría, deseo que la Honorable Cámara sepa que no hemos podido encomendar al señor diputado nuestra representación porque mantenemos diferencias de fondo y de forma con el despacho de la mayoría. Desde luego, tampoco estamos de acuerdo con el planteo político que se ha hecho en el informe escrito y que se ha repetido en el informe verbal, en cuanto se pretende identificar la acción política posterior al 4 de junio de 1943 con la legislación del trabajo en la República Argentina.

Ya veremos también que quizá las palabras del señor diputado Argaña no puedan ser suscritas por todos los miembros de la mayoría y tampoco puedan serlo por muchos hombres del gobierno. Porque el señor diputado Argaña ha hecho afirmaciones contra los capitalistas, y me imagino que los capitalistas de la mayoría y los capitalistas que existen entre los hombres del gobierno, no suscribirán tales conceptos.

Sabemos bien, señor presidente, que los problemas que contempla la legislación del trabajo no merecieron casi consideración pública, sino desde comienzos de este siglo. En la actualidad,

y desde hace muchos años, han adquirido un profundo significado nacional y humano, por lo que todos estemos obligados a contribuir con nuestro esfuerzo al esclarecimiento y progreso de la legislación obrera.

La lucha social en América aparece desde la primera hora, bajo distintas denominaciones: entre ricos y pobres, entre amos y esclavos, entre comerciantes y ganaderos, entre las categorías sociales opuestas que han existido. Pero no interesa ahora hacer una historia de todo ese largo proceso.

La Constitución nacional de 1853/60, que inició definitivamente el período de organización jurídica, consagró en lo fundamental el respeto a la ley, el respeto al orden de derecho. Nosotros creemos que la Constitución nacional, pese a que lleva casi un siglo de vigencia, no es obstáculo alguno para que se sancione la legislación del trabajo más adelantada, como tampoco es obstáculo para que se adopte una política económica que esté de acuerdo con las necesidades modernas. Pero queremos, eso sí, que quede expresa constancia de que no estamos dispuestos a aprobar ley alguna que vaya en contra de la Constitución nacional. Subscribimos aquellas viejas palabras de los constituyentes cuando dijeron que los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos.

Si la Constitución nacional nos impidiera sancionar las disposiciones de orden social o de orden económico que exige el país, lo que se debería hacer es promover su reforma. No ha de ser con nuestro voto que desde esta Cámara se han de sancionar leyes que atenten contra los principios constitucionales.

Esa Constitución, lógicamente, no pudo contemplar los problemas específicos de la clase trabajadora, por el momento histórico en que se sancionó; pero hay que reconocer que asegura las condiciones fundamentales para que todos los grupos sociales, incluso los trabajadores, hagan valer sus reivindicaciones: derecho de trabajo, derecho de asociación, libertad individual, derecho de la persona. El pensamiento y la acción revolucionarios caben perfectamente dentro de esa Constitución.

Tampoco el Código Civil, que se inspira en la orientación individualista que existía en el derecho político de la época, contempló los problemas específicos de la legislación obrera. Más aún: muchas de las disposiciones de ese Código, durante años fueron interpretadas en contra de las reclamaciones de los trabajadores argentinos. Pudo así decirse alguna vez que ese Código Civil era el código del patrón, del propietario y del acreedor.

Es evidente que faltó sentido de la realidad económica y social del país, para que el Parlamento argentino, sin atacar los principios cons-

titucionales que hacen a la esencia de nuestra organización democrática, sin atacar las disposiciones del Código Civil, que rige las relaciones normales entre los hombres, iniciara —como se inició años después— una legislación obrera.

Para explicar el nacimiento de la legislación del trabajo en la República Argentina debe conocerse la transformación nacional que se produce a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las normas jurídicas jamás se dan históricamente en un plano absolutamente ideal. Las normas jurídicas siempre se dictan y se interpretan en funciones de determinados intereses sociales, sean económicos, sean culturales. Si no se tuviera la transformación social operada, no se comprendería la legislación obrera ni se comprendería por qué aparece en determinado momento del desarrollo histórico, por qué nació entonces y por qué no nació antes o después.

Como no deseo detenerme en este aspecto, a fin de entrar directamente al asunto sometido a consideración de la Honorable Cámara, me limitaré a recordar el crecimiento material del país, que da un nuevo significado a la lucha social en la República.

Los grandes problemas que plantea entonces la antítesis entre capital y trabajo conducen a situaciones de violencia que todos conocen. En la etapa inicial de toda industria que se encuentra en un proceso de crecimiento, especialmente si tiene que competir con la industria extranjera, se busca la reducción del costo de producción. Y en ese momento en que la técnica estaba atrasada en el país, se recurrió al pago de salarios bajos y a las jornadas largas.

No voy a detenerme tampoco a hacer la historia de esa lucha social en la República Argentina, que alguna vez tendrá que escribirse para que las cosas sean puestas en el lugar que les corresponde; pero deseo, sí, recordar que en 1916 se produce un cambio políticosocial trascendental en la evolución de la historia argentina. En 1916 llega al gobierno de la Nación Hipólito Yrigoyen. No fué aquél un simple cambio político; fué un cambio que afectó las relaciones sociales y económicas argentinas.

No voy a entrar en una disputa para enaltecer el significado de ese acontecimiento en la vida nacional.

Tampoco me interesa reclamar para el radicalismo la primacía en la lucha por una legislación del trabajo. No venimos aquí a pedir aplausos para el radicalismo. En el gobierno y en el llano, cumplió siempre con su deber y ahora también ha de seguir cumpliéndolo. Pero sí interesa establecer el concepto que tiene el radicalismo de esta cuestión social.

Alem alguna vez dijo, refiriéndose a las elecciones: «Hay siempre en el aire dos programas vivos, los dos programas perpetuos: el del po-

secedor y el del desposeído.» Esto significa que desde el primer momento el radicalismo advirtió que en la entraña de la lucha política había también un problema económico y social. Fue por ello que encaró una firme política económica contra el monopolio de la tierra y contra el contralor que ejercían algunos sectores monopolistas. En 1916, Yrigoyen ya dijo que «la política económica es la piedra angular en que reposa la prosperidad bien entendida de los pueblos más adelantados». «No hay, pues —agregaba—, deber más imperativo a todo gobierno, que el de afrontar la construcción económica del Estado.» Comprendió y realizó desde el gobierno el concepto de que «la democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de bienestar siquiera».

En la cuestión social hay un problema no solamente de distribución, sino de aumento de capacidad de producción y de consumo. Pudo, entonces, decir con verdad Yrigoyen, orientando el enfoque de la cuestión social en la Argentina, que «debía hacerse una más amplia distribución de las riquezas, dando a las grandes masas una mayor capacidad de producción y de consumo».

También debo decir que el radicalismo no reduce unilateralmente la vida nacional a los aspectos materiales. Nosotros deseamos que se asegure el bienestar económico de las masas argentinas, pero deseamos también que se les asegure el desenvolvimiento cultural con escuelas y con universidades libres. Es que advertimos que del conjunto de los factores sociales —no de uno solo—, se llame salario o se llame cultura, depende el porvenir del hombre en el país. No aceptamos el concepto de que el obrero es una máquina de trabajo y de consumo de objetos materiales. Vemos en el obrero al hombre, y partimos del concepto de que el hombre es un ser libre. Nos interesan los problemas materiales de las clases trabajadoras argentinas, porque esos aspectos materiales son los que permitirán el desarrollo espiritual y moral de nuestras masas. Podríamos decir, señalando la relación entre los problemas de la subsistencia y los problemas de la existencia, como dijo un filósofo argentino: cuando cada mañana el hombre al levantarse no tenga que pensar en el problema de la subsistencia, podrá pensar libremente en el problema de la existencia.

No permitiremos que se nos confunda. Estamos dispuestos a reconocer todas las ventajas de orden material que exigen las masas argentinas, pero nosotros también señalamos la necesidad de que se respeten las fuerzas espirituales y las fuerzas morales. Y cuando decimos esto en la Cámara no venimos a improvisar un concepto político; venimos a repetir palabras que

ya escribió la Unión Cívica Radical en el manifiesto de 1905: «Triste condición —se dijo entonces— sería la de un país si su prosperidad hubiera de consistir en el fomento de sus intereses materiales. El progreso es preferentemente constituido por las fuerzas morales.»

Para que no se tergiverse este concepto, debo recordar que los radicales no escribieron estas palabras para oponerse a los reclamos de los trabajadores; estas palabras fueron escritas para señalar la política que seguía la oligarquía del «régimen» dentro de la República, cuando quería obligar al país a renunciar a las fuerzas morales, exhibiéndole la posibilidad de un gran desarrollo material.

No voy a detenerme a enunciar ni una sola de las leyes que se deben al esfuerzo del radicalismo; pero sí deseo negar en forma expresa que la legislación del trabajo haya sido descubierta en 1943 por el pronunciamiento militar del 4 de junio.

Afirmo que los decretos que están a consideración de esta Cámara no obedecen a un estudio a fondo, y afirmo, señor presidente, que la improvisación en cualquier terreno del derecho o de la economía es sumamente peligrosa. Una política social y económica equivocada puede producir como resultado el aumento de la concentración de las industrias y del poder de los monopolios, liquidando al productor libre.

Cuando se trate en esta Cámara el ordenamiento bancario, hemos de volver sobre este asunto para demostrar cómo la política económica que se está siguiendo en la República dará como resultado la desaparición de los productores libres, para llevar a una concentración económica sin precedente en la historia del país.

La legislación del trabajo evidentemente no era completa ni definitiva en el año 1943, pero afirmo también que la legislación del trabajo no es definitiva ni orgánica en 1946.

Insistimos en la necesidad de que la legislación del trabajo respete el régimen institucional argentino y contemple la realidad económica de las distintas ramas industriales. Pero, por sobre todas las cosas, necesito aclarar debidamente el alcance de la disidencia de los diputados de la Unión Cívica Radical en el despacho que estamos considerando.

No hemos subscrito el despacho en disidencia total, porque muchos de los principios que consagran estos decretos han sido sostenidos reiteradamente por la Unión Cívica Radical. Podría demostrar que gran parte de esos decretos han sido tomados de proyectos presentados antes de 1942 por diputados del radicalismo.

Muchos de esos proyectos —conviene decirlo aquí— no han sido aprobados en los últimos quince años porque el país ha padecido un régimen de fraude y de subversión institucional,

contra el cual estuvo en todo momento el radicalismo, no contando con el apoyo de otras fuerzas para terminar con ese régimen de la República.

Votaremos, pues, en general el despacho, pero hemos fijado nuestra disidencia parcial, porque no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que dicen estos decretos.

Nuestra disidencia en ese aspecto no es exclusivamente formal. Hay disidencias de fondo también; porque para nosotros las disidencias de orden institucional no son formales sino fundamentales.

Lo que corresponde hacer es considerar cada decreto separadamente; aplicar el procedimiento usado en el caso de la ley orgánica de los obreros de la carne y que se va a aplicar a la ley orgánica de los periodistas. La propia mayoría de la Cámara, cuando estudió esos dos decretos, tuvo que reconocer que contienen graves errores. Estoy seguro de que si los decretos que ahora tratamos se consideraran artículo por artículo, la mayoría tendría que aceptar que contienen gruesos errores y graves incongruencias.

Para ser leal, debo señalar que, aun cuando no estamos de acuerdo con el procedimiento adoptado por la mayoría de la comisión, mejora evidentemente el aplicado por el Senado. Ya llegará la hora en que se diga cómo el Senado nacional sancionó estos mil y tantos decretos sin estudio alguno, sin clasificación de ninguna índole, en montón, como si la legislación argentina que debe regir para el futuro pudiera sancionarse como un voto de confianza al gobierno.

Interesará a la Cámara saber cuál es el alcance de la disidencia parcial que traemos a su consideración. Debería tomar decreto por decreto para señalar los inconvenientes y errores que contienen; pero como el reglamento limita el tiempo de mi exposición, he de indicar solamente algunas de las discrepancias que considero de orden fundamental.

Estos decretos destruyen, sin necesidad, el régimen institucional argentino. Digo sin necesidad, porque la Constitución de la República admite la legislación obrera más avanzada, sin atacar sus postulados fundamentales.

Sé que hay grupos políticos dentro de la República que tienen interés en la destrucción del régimen institucional; sé que hay hombres que desde hace muchos años, cada vez que se presenta una coyuntura, procuran abolir el régimen de derechos y garantías y quieren destruir el régimen de las autonomías provinciales. No deseo empujear el debate dando nombres, pero digo desde aquí, con plena responsabilidad, que en 1943 y en 1946, esos mismos grupos sociales, procuran la abolición del régimen institucional argentino; ya lo hicieron en el año 1930, durante la dictadura de Uriburu, continuaron haciéndolo durante los

gobiernos fraudulentos posteriores y están todavía ahora tratando de destruir, por cualquier vía, ese régimen institucional argentino.

Insisto en que nosotros no nos prestaremos a manejos de este tipo, con los que se ataca el régimen institucional. Los que quieran proponer en el país una constitución en que desaparezcan los derechos, declaraciones y garantías, los que quieran proponer una constitución en que desaparezcan las autonomías provinciales, que asuman, ante el país y ante la historia, la responsabilidad de hacerlo, pero que no se escuden en la legislación obrera, que reclaman legítimamente los trabajadores, para utilizar a los obreros argentinos como fuerza de choque en esa maniobra de tipo totalitario. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Digo y repito, señor presidente: no es cierto que las instituciones fundamentales de la República se opongan a la justicia social. Digo más: que sin el respeto de esas instituciones fundamentales, no puede haber auténtica justicia social. Cuando las mejoras no provienen del pueblo; cuando no están cimentadas jurídicamente; cuando pueden estar a merced de un hombre o de un pequeño grupo de hombres, eso no ha sido, no es, ni será nunca justicia social. La justicia social sólo puede existir dentro del estado de derecho, porque dentro de la dictadura o de la tiranía lo único que se puede recibir es la dádiva del tirano o del dictador.

Para que no haya dudas en los planteamientos que estoy haciendo, debo decir que tampoco es cierto lo que hemos escuchado afirmar muchas veces: que debemos abandonar las reclamaciones de justicia social y justicia económica, para defender las instituciones argentinas. Las instituciones del régimen jurídico carecen de significado y quedan como fórmulas vacías, si las grandes masas del país no alcanzan un nivel material y cultural elevado. Esas instituciones representarían una falsedad si se las aplicara a pueblos que vivan en la miseria y en la ignorancia.

Me he referido al problema de las autonomías provinciales. Algún otro diputado de este sector volverá sobre el asunto, pero deseo, sin embargo, fijar algunos conceptos. No puedo ocultar que en muchos casos las autonomías provinciales fueron utilizadas como argumentos para oponerse a la legislación obrera en este Congreso. No puedo ocultar que muchas veces, cuando se proponía la sanción de una ley nacional que mejorara a la clase trabajadora, se decía que correspondía a la jurisdicción provincial, y cuando el proyecto de ley se llevaba a esa jurisdicción, se afirmaba que afectaba el régimen del Código Civil y que, por lo tanto, la legislatura provincial no tenía competencia.

Hay que salvar esos errores; pero ello no ha de conducirnos a cometer ahora desviación cons-

titucional de ninguna clase. Los diputados de la Unión Cívica Radical no vamos a votar disposiciones que ataquen al federalismo argentino.

Los radicales hemos dicho en muchas oportunidades que las autonomías no son para los gobiernos, sino que son de los pueblos y para los pueblos. Ese es el sentido creador que damos al federalismo argentino.

Sé que este tema del federalismo pertenece ya casi a la historia de la vida argentina, porque está desapareciendo en los aspectos económicos, políticos y culturales.

Nosotros no venimos a defenderlo aquí como una categoría histórica, sino que desde estas bancas venimos a decir —y me place ser yo quien lo diga, habiendo sido electo diputado por la Capital— que el federalismo, como el régimen del municipio en la República Argentina, tiene todavía un extraordinario papel creador que desempeñar.

Con estos conceptos, es evidente que no podemos votar algunas disposiciones como, por ejemplo, las de los artículos 12, 13 y 15 del decreto 15.074. Esas disposiciones dicen, entre otras cosas: «Los departamentos, direcciones u oficinas del trabajo, cualquiera que sea su nombre, y los organismos y servicios que de ellos dependan, existentes en las provincias, quedan convertidos en delegaciones regionales de Trabajo y Previsión. Las delegaciones regionales tendrán la composición, atribuciones y facultades que establezca el reglamento orgánico de la Secretaría de Trabajo y Previsión.»

El señor miembro informante de la mayoría ha dicho que una revolución que había volteado al Poder Ejecutivo podía terminar con el régimen administrativo del trabajo en las provincias. No discuto en nombre del derecho cuando se invoca a un supuesto gobierno revolucionario; pero aquí estamos hablando en el Parlamento de la República y no en nombre del pronunciamiento militar del 4 de junio.

Deseo saber si los señores diputados que han sido electos en distritos provinciales están conformes con votar disposiciones como éstas, que transforman, alteran y suprimen las autonomías provinciales.

No puedo dejar de manifestar mi extraordinaria sorpresa frente a la actitud de los senadores —que dentro del régimen institucional argentino son los representantes de esas autonomías— que han votado disposiciones como las que comento. Si se da aprobación a estas disposiciones, mañana ya no será necesario que los pueblos de las provincias elijan gobernador. También podrán ser nombrados delegados regionales para que manejen las provincias, política, económica, social y culturalmente.

Sobre estos aspectos de carácter constitucional han de insistir otros diputados de este sector, de modo que ahora deseo continuar señalando

algunas de las diferencias fundamentales que nos separan de los decretos comprendidos en este orden del día.

El señor miembro informante de la mayoría, repitiendo conceptos que se han escuchado en esta Honorable Cámara, ha dicho que si se pretendiera atacar desde adentro o desde afuera la orientación social democrática, ellos estarían dispuestos a defender el régimen institucional y social que se está estructurando.

Quizá sea útil que cada uno de los diputados de la mayoría repita ese concepto.

No deseo juzgar las intenciones de los señores diputados; ni siquiera me interesa juzgar las de los hombres que tienen la responsabilidad de la dirección política del gobierno; pero afirmo que el país está dando los primeros pasos hacia un ordenamiento de tipo corporativo que nos ha de conducir seguramente a la supresión total de las libertades y derechos argentinos, si el país no reacciona.

Yo sé que hay hombres que están conscientemente en favor de este proceso hacia el corporativismo argentino. Podría traer a colación las exposiciones doctrinarias hechas en el país en los últimos quince años, por hombres que están hoy del lado del gobierno o en el gobierno, sosteniendo la necesidad de abolir el régimen democrático argentino.

Como deseo ser absolutamente objetivo, señalo este hecho para que no se crea que este proceso hacia el corporativismo fué iniciado el 4 de junio de 1943; desde que el fenómeno del corporativismo tomó cuerpo en Europa, aparecieron en la República Argentina los teóricos y los prácticos de ese régimen. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, padeció el azote de un gobernador que fué a tomar lecciones de fascismo a Italia para intentar implantarlo en el país.

El hecho del 4 de junio de 1943, que muchos creyeron que pondría fin a esos intentos totalitarios dentro del país, lo único que hizo fué desplazar algunos hombres o sectores, pero manteniendo en definitiva una orientación contraria a los principios democráticos.

El primer paso de esa marcha hacia el corporativismo, dentro del país, es precisamente la destrucción del régimen institucional, a que me referí hace algunos momentos; es decirles a los trabajadores del país, que si quieren asegurarse determinadas garantías en el terreno social, deben renunciar a las libertades de la persona, deben dejar que su cultura se transforme en cultura dirigida. Desde esta Cámara y desde todos los centros interesados del país, se ha hablado mucho de economía dirigida, se ha hablado de regulación económica, pero hemos hablado quizá demasiado poco contra la cultura dirigida; contra la cultura dirigida que está ya en la escuela primaria, que está en la escuela se-

cundaria, que está ya, señor presidente, en la universidad y que está en el ámbito intelectual del país. Me bastaría, señor presidente, recordar, nada más que recordar, lo que acaba de ocurrir en la Comisión de Cultura, presidida por un diputado de este honorable cuerpo, y en la que se ha negado un premio a uno de los más altos valores culturales americanos, como es Ricardo Rojas. (Aplausos.)

Toda marcha hacia un ordenamiento corporativo exige la limitación del derecho de asociación. Hemos dicho ya en esta Cámara que la Unión Cívica Radical no se opone a que se legisle sobre el régimen de asociaciones profesionales. Pero, naturalmente, que la legislación sobre las asociaciones profesionales debe ser para asegurar el derecho de asociación y no para restringirlo o suprimirlo. Nosotros no aceptamos que el derecho de asociación de los trabajadores o de los no trabajadores dependa de una autorización de la Secretaría de Trabajo; no queremos que exista en el país sindicalismo regulado alguno, porque no queremos que se siga en materia de asociaciones profesionales la misma evolución seguida por el dictador Vargas en el Brasil, que se orientó sobre la base de la evolución operada en Portugal y en Italia.

Pero no bastaría todo esto, señor presidente. La marcha hacia el régimen corporativo exige también otra cosa de orden fundamental, que tiene relación con los trabajadores: la limitación del derecho de huelga. Y eso está en el régimen jurídico sancionado durante el poder defacto. El decreto 21.877, que está a consideración de la Honorable Cámara en este orden del día, tiene en su artículo 4º algunas previsiones interesantes. Si los obreros, se dice por ahí, no cumplen un convenio, se les considerará en desacato: se prevén multas, como para los patronos, de 20 a 100.000 pesos, o arresto de un día a un año. Y se agrega esto otro, que puede darnos la pista de lo que aparecerá en el decreto de seguridad del Estado: se establece la sanción de la ilegalidad de la actitud asumida por los obreros y la prohibición de realizar todo acto que tienda a mantener, propagar o difundir la actitud ilegal considerada.

Pero donde aparece clara y categóricamente la garra totalitaria, es en el decreto 536, de seguridad del Estado, que oportunamente será considerado por la Honorable Cámara. El artículo 34, determina que será castigado con prisión de seis meses a tres años el que promueva huelgas en las reparticiones públicas, semioficiales o particulares, que tengan a su cargo servicios públicos. Quedan notificados los obreros de la corporación, los de la Unión Telefónica, los de los ferrocarriles, los de la electricidad.

El artículo 35 establece prisión de un mes a dos años para el que por cualquier medio estimular en establecimientos particulares el man-

tenimiento de una huelga declarada ilegal por la autoridad. De donde resulta que el derecho de huelga, que es tan esencial para los trabajadores argentinos, aparece así definitivamente suprimido, desde el punto de vista jurídico, por la legislación del poder defacto dictada después del 4 de junio de 1943.

Podría seguir indicando otras disposiciones que marcan el paso hacia un ordenamiento de tipo corporativo, pero me basta recordar, como lo he hecho ya en esta Honorable Cámara, que en la casi totalidad de los casos en que los decretos establecen el nombramiento de delegados de los trabajadores para formar parte de comisiones paritarias o de consejos, esa designación se la reserva el Poder Ejecutivo, dando a las asociaciones gremiales en algunos casos el derecho de proponer sus representantes.

¿Qué significa eso, señor presidente? ¿Es que el gobierno no confía en las asociaciones gremiales? ¿Qué significa decir a los trabajadores que designen representantes para los organismos paritarios y después reservarse la designación última el propio Poder Ejecutivo? Nosotros hemos dicho ya en otras oportunidades que, en cada caso en que la legislación consagra el derecho de los obreros a tener representantes en cualquier organismo, esa representación debe provenir sola y exclusivamente de los propios trabajadores, sin interferencia de ninguna clase de los poderes oficiales, se trate de éste o de cualquier otro gobierno.

Casi todos los decretos que están a consideración de la Honorable Cámara en este momento podrían ser objeto de comentarios específicos. Cuando el asunto se trate en particular, hemos de hacer las observaciones concretas que correspondan. Pero no puedo dejar de recordar la exclusión de determinados sectores obreros que se hace en muchos de esos decretos.

Es así que, tanto en el decreto 1.740, sobre vacaciones anuales pagas, como en el decreto 33.302, de aguinaldo y aumento de salarios, se excluye, por ejemplo, a los obreros domésticos, sin razón alguna. Sabe también la Honorable Cámara, que el decreto 33.302 excluye, además, a los trabajadores de las empresas ferroviarias, sin razón alguna que lo justifique.

Cuando se trate en particular el decreto 33.302, volveremos a recordar a la Cámara el procedimiento desigual aplicado por el poder defacto a la industria nacional y a estos servicios públicos que son propiedad de capitales extranjeros. Yo desearía que el gobierno explicase por qué motivo a la industria que es propiedad de argentinos se le impone determinadas obligaciones, y en cambio, a las grandes empresas de servicios públicos, con una capacidad económica muy superior, se las excluye de la obligación de otorgar gran parte de los beneficios de esta legislación del trabajo.

Pero no es solamente eso. El despacho de la mayoría contiene un artículo 1º en el que se establece que «continuarán en vigor» con fuerza de ley, a partir de la fecha en que fueron publicados, los decretos leyes que se transcriben. ¿Y qué ocurre, señor presidente? Entre estos decretos que se pretende que continúen en vigor, hay algunos que, evidentemente, no pueden subsistir. Está, por ejemplo, el decreto 11.616 del año 1945, que delega facultades de autoridad del trabajo en personas determinadas y ocurre que una de las personas a quien se le da facultad para resolver los problemas del trabajo ejerce actualmente la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y otra en quien se autoriza la delegación acaba de ser exonerada por este gobierno, hace pocos días, en base a un sumario. Yo no sé cómo la Cámara va a votar que estos decretos continúen en vigor.

El caso de los decretos referentes al Congreso Agrario merece también la misma observación. La mayoría de la comisión aconseja mantener en vigor el decreto 9.658, que establece que el Consejo Agrario pasa a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero en el orden del día 173, los mismos miembros de la comisión aconsejan que continúe en vigor el decreto 14.959 que encarga al Banco de la Nación la aplicación de la ley 12.636, o sea, que establece que el Consejo Agrario pasa a depender del Banco de la Nación, el que a su vez está subordinado al Banco Central. ¿Cómo podemos sancionar así, sin discusión, esto que nos aconseja la mayoría de la comisión? El Consejo Agrario ha pasado a depender del Banco de la Nación, y cuando se discuta el ordenamiento bancario, que figura en otro orden del día, hemos de decir aquí las palabras que merecen esos decretos, porque no estamos de acuerdo en que se hayan anulado en la práctica las previsiones de la ley 12.636, que establecía la autonomía para este organismo, ni estamos de acuerdo con que los problemas agrarios del país se entreguen al manejo de burócratas que no los conocen.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Silverio Pontieri.

Estamos dispuestos ahora o en cualquier momento a que el Parlamento sancione disposiciones que hagan que la justicia social deje de ser una palabra, deje de ser una bandera de propaganda electoral, para concretarse en hechos positivos. Pero afirmamos que, a cambio de las ventajas que puedan obtener las masas trabajadoras, no estamos dispuestos a que se cercenen los dos derechos fundamentales que tienen los trabajadores: el derecho de huelga y la libertad sindical. Yo sé que la legislación del trabajo por sí sola no solucionará los grandes problemas económicos y sociales argentinos, como el

problema de la tierra y el problema de los monopolios privados, pero es evidente que atempera situaciones injustas y que permite encarar las cuestiones económicas y sociales en un terreno pacífico.

Creemos necesario un reordenamiento por la vía de un código del trabajo que impulse y que ordene toda esta dispersa legislación, contemplando los derechos de los obreros a un mínimo material, cultural y técnico, pero que también contemple la necesidad de desarrollar la industria nacional.

Queremos una política social y económica que defienda al productor y que defienda al consumidor, para que las mejoras de salarios que puedan obtenerse no sean neutralizadas por el aumento del costo de la vida.

La justicia social es una antigua aspiración de la clase obrera argentina y de los partidos democráticos. Esa justicia social no nació con este gobierno ni terminará con este gobierno. Para establecerla no hace falta recurrir al verbalismo anticapitalista. Ese es otro problema. Una cosa es la legislación del trabajo y otra cosa es el problema de fondo del capitalismo.

No puedo admitir en silencio que se sostenga que el poder defacto que ha estado en el país desde el 4 de junio de 1943, represente una forma de anticapitalismo. Afirmando que ese poder defacto ha significado, como significa este gobierno, una forma típica y específica de capitalismo.

No deseo tampoco que se haga demagogia anticapitalista, porque quiero recordar a la Honorable Cámara que los procedimientos demagógicos anticapitalistas fueron los que utilizaron en Europa los totalitarios, que representaron una forma, la más terrible, del capitalismo moderno.

Los obreros deben ocupar, junto a todos los demócratas del país, un puesto de vanguardia en el proceso civilizatorio argentino; deben luchar por sus conquistas materiales, pero yo estoy seguro que los trabajadores libres de la Argentina, que continuarán bregando por esas conquistas materiales, no están dispuestos a asegurárselas al precio de la entrega de las libertades esenciales que deben defender, ya no como obreros, sino como hombres.

Esta es la posición que tomamos en este debate.

No he querido contestar los argumentos políticos que ha hecho el señor miembro informante de la mayoría, porque no deseo que este problema tan profundo de la cuestión social y de las reclamaciones de los trabajadores se transforme en un problema de banderías de tipo político. Hemos querido afirmar de manera definitiva que estamos dispuestos a votar todo aquello que concrete en hechos una justicia social y económica, pero que también estamos

dispuestos a no renunciar a ninguno de los principios institucionales argentinos.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Pastor. — No tenía el propósito de participar en el debate en general; pero el rumbo tomado por los oradores — rumbo a traviesa — en cuanto a la historia y a la vida del país, me obliga a improvisar, entiéndase bien, la forma de la construcción de mi discurso, no así los conceptos fundamentales que nos permiten tomar una posición clara y definida frente a este primer cuerpo de legislación social, que va a sancionar la Cámara con este orden del día.

Es claro que no he pertenecido a la comisión que ha tenido a estudio el conjunto extraordinario de los decretos leyes que integran este despacho. Por eso no puedo participar de la gloria de los señores diputados de hablar en nombre de una acción desconocida para la vida del país; hablar en nombre de un espíritu que pareciera que por primera vez en la larga trayectoria de la vida institucional va a iluminar la conciencia, el pensamiento y la dignidad de las masas argentinas; gloria de la que se ha jactado entusiastamente el miembro informante.

La Cámara ha tenido esta tarde una magnífica lección. Es soberbio el contraste entre la exposición del señor miembro informante, que ha debido referirse —reconozco que en situación precaria— a este enorme despacho, y el magnífico discurso que acaba de pronunciar el señor diputado doctor Frondizi.

El señor miembro informante ha pronunciado una arenga de esas que hemos escuchado en las calles y en los caminos de la República durante toda la campaña que precedió a los comicios del 24 de febrero, arenga que sigue pronunciándose, cuyo eco traduce la prensa periodística cada vez que se agita el problema de la nueva justicia social y cada vez que se levantan en la tribuna los modernos Catones, para hacer creer al país que nunca hubo justicia social y que recién en esta hora crucial ha llegado el momento de que el pueblo pueda disfrutar de los beneficios de esa acción deslumbradora e insuperable.

Para llegar a esa conclusión, ha debido cantar un himno a la institución eje de todo el movimiento y de toda la realización: la Secretaría de Trabajo y Previsión. A fuer de ser veraz, reconozco que la Secretaría de Trabajo y Previsión ha hecho mucho por esta nueva idea; ha hecho bien, y ha hecho mucho mal también. Ha contribuido con su prédica demagógica a provocar una era de odios y de enconos entre las clases argentinas; a que se forme una conciencia, felizmente superficial, que repudia y empequeñece todo lo que representa capital, cultura, industria, iniciativa e inventiva en la República; y ha contribuido también a conformar una nue-

va conciencia de la masa obrera, haciéndole creer que es la única clase que en el país es intocable, y ante la cual debemos rendir tributo exagerado y prejuicial, como ocurre a veces en este recinto, en que los señores diputados que representan a los obreros y que se sienten obreros, creen que no pueden ser pasibles de críticas y de objeciones, como cualquiera de los otros diputados que se sientan en este recinto.

He dicho, señor presidente, que el discurso del miembro informante ha sufrido una grave desviación y ha levantado bandera de prédica política en la Cámara, que no ha conseguido su finalidad esencial de ilustrarnos sobre cada uno de estos proyectos o decretos generales que los inspiraron, dejándose llevar por su entusiasmo de afiliado a una facción política, olvidándose que en el Parlamento hay que legislar para todo el pueblo argentino y no para los que integran un solo sector político. Yo casi diría que el discurso del señor miembro informante es un resumen de aquel exótico e indescifrable axioma oriental que es difícil interpretar, porque nos dice que Dios escribe derecho con líneas torcidas.

He hecho también el elogio del discurso del señor diputado Frondizi, elegante en su forma, profundo en sus conceptos, meduloso en la sustancia y en los principios que sostiene; pero quiero dar una vez más prueba de mi integridad intelectual, lamentando en esta oportunidad que el señor diputado Frondizi no haya podido también dejar de hacer una incursión en ese campo vedado de la prédica política, y sobre todo, señor diputado de la bancada radical, que no haya podido quitarle el sello indefinible de la amnesia que aqueja su oratoria partidista, cuando olvida y pasa por alto aquellos períodos que ha vivido la Nación, en que la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de la vida política del país, la responsabilidad del desarrollo de todos los acontecimientos, que fueron dura y valientemente criticados desde las bancas de esta Cámara, incidió directa, inexcusablemente, sobre la acción del Partido Radical.

Yo no quiero con esto excusar la responsabilidad de mi partido en cuanto ha tenido también la gloria de gobernar al país. Casi creo que será conveniente que un día, revistiéndonos de una profunda sinceridad, hagamos un debate integral en esta Cámara sobre la vida del país, para demostrar al pueblo que de uno y otro sector político, de los viejos y tradicionales partidos de la República y de las nuevas fuerzas que se levantan, surge la misma inspiración patriótica para reconocer sus errores y declarar la necesidad de corregirlos en bien de la salud moral de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Al escuchar al señor diputado Frondizi, evocaba, sin quererlo, un pensamiento de Stephan Zweig, cuando nos hace una advertencia, des-

pués de enjundiosa página, concretando esta idea: es raro que la verdad y la política duerman en el mismo lecho. Por eso yo hablo en este tono aquí, porque creo que si esa rareza es necesaria para la vida del país, algún día debe tener su reflejo fiel en la obra y en el pensamiento de los diputados que actuamos en la vida política nacional.

En momentos en que escuchaba al señor miembro de la comisión en su inverosímil reafirmación unitaria, cuando evocaba la acción revolucionaria para poner por debajo de ella a la Constitución nacional, cuando consideraba que eran baladíos los principios federalistas que sustenta nuestra Constitución y sobre los cuales se ha levantado todo el andamiaje institucional, político y social de la República, yo pensaba que en momentos como éstos no hay derecho a agitar un pensamiento poniéndolo al servicio de determinada política, en contra de lo que es la conciencia, la razón y el sentimiento profundo de toda la República.

Entonces evocaba aquella sabia previsión de Ihering, porque pensaba que lo que estamos poniendo en duda en este momento, es la existencia de un derecho que fué conquistado con el sacrificio y la sangre de los pueblos del interior.

Ihering decía que desde el momento en que el derecho no está dispuesto a luchar, se sacrifica; así podemos aplicarle la sentencia del poeta: es la última palabra de la sabiduría, que, sólo merece la libertad y la vida, el que cada día sabe conquistarla.

Por eso yo afirmo que si los representantes de las provincias no somos capaces de reafirmar la autonomía de los Estados, si no somos capaces de oponernos a todas las transgresiones legales con que se la avasalla y destruye, no tenemos derecho a representar a esos pueblos en un congreso que debe legislar respetando un principio tan sagrado para los Estados del interior.

El federalismo argentino, señores diputados, no es cuestión de juristas. Acepto que haya leyes de carácter social que deben ser sancionadas para su aplicación en todo el país, porque la legislación del trabajo es algo que pertenece también al articulado del Código Civil. Pero quiero que hagamos una distinción que es indispensable para salvaguardar ese principio federalista que ha vivido el país, que lo ha defendido con sacrificio y con sangre en los campos de batalla y en la doctrina, y que lo ha impuesto por el pensamiento de sus próceres y de todos sus hombres, grandes y pequeños.

Una cosa es sancionar una ley de carácter nacional para ser aplicada en todo el territorio de la República, y otra cosa es imponer a las provincias que acepten las autoridades federales como órganos de aplicación. Una cosa es reconocer ese derecho sagrado, y otra es tener su

propia justicia, para hacer respetar y cumplir las leyes.

No caigamos en este género de confusiones, ni nos amparemos en la necesidad de uniformar una legislación social para hacerla gravitar por igual en todos los sectores del país, para atropellar al gobierno propio de las provincias, para imponer la organización de una justicia que tiene derecho a organizar cada provincia, y para imponer también la organización de un poder administrativo que se superpone y lesiona al poder propio administrativo de cada provincia.

Ya ve el señor miembro informante, que no es una cuestión de juristas, de constitucionalistas, casi como si dijera una cuestión de leguleyos. Es una cuestión de índole permanente, de sentimiento histórico de los nobles pueblos del interior. Todos ellos han contribuido en la lucha de la independencia, en las crueles guerras civiles; todos se trasladaron a los campos de Caseros para derrocar la deprimente dictadura de Rosas; todos mandaron sus representantes al Congreso del 53 para que quedara definitivamente consagrado el principio del federalismo como base invulnerable de la vida nacional.

¿Por qué ahora, so color de que deben dictarse determinadas leyes de carácter nacional, vamos a seguir los representantes de las provincias acatando y auspiciando esa política unitaria, ya consagrada en un sinnúmero de leyes nacionales cuya aplicación y resultados no lo ven muchos de los hombres del pueblo argentino, ha traído como consecuencia fatal el detenimiento del progreso argentino en muchas de las provincias mediterráneas?

¿Y por qué vamos a negarles a las provincias, con gesto despectivo, su capacidad de legislar también en materia social?

Es una injusticia la afirmación de que nuestro país está atrasado en legislación social y que ha sacrificado los intereses de la clase trabajadora en aras de los intereses del capitalismo y de la clase superior. Es una injusticia, porque muchas leyes de carácter social y obrero de la República Argentina, son anteriores a las leyes similares dictadas en los demás países; y es también una injusticia palpable desconocer que ha habido provincias que se adelantaron a la legislación nacional. Las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires...

Sr. Sarmiento. — Jujuy.

Sr. Pastor. — Entre Ríos, han tenido antes que la Nación su magnífica legislación social. Y muchas de las leyes que hoy se elaboran para imponerlas con carácter nacional, tienen sus similares en aquellas leyes de provincia, cuyos principios fundamentales han adoptado. La prueba está en este cuerpo de legislación que estamos tratando.

¿Y qué descubrimos a esta altura del siglo, señores diputados? Que la República jamás tuvo un Congreso capaz de resolver los graves problemas nacionales; que la República no tuvo gobernantes que la impulsaran por el camino del progreso material y moral, jurídico y educacional, económico y financiero.

Sr. Argaña. — ¿Me permite una breve interrupción?...

Dije y reitero que la legislación de fondo que en materia de trabajo tiene nuestro país fué el fruto de veinte o veinticinco años de actuación de la clase trabajadora.

Sr. Pastor. — ¿Puede negar el señor diputado que igual evolución necesitaron los mismos problemas en los demás países del mundo con experiencia milenaria, que no la tuvo nuestra joven república? ¿Y puede ser eso suficiente para negar el adelanto realizado por influjo de los grandes estadistas que ha tenido el país, algunos de los cuales han brillado, trascendiendo las fronteras de la patria? ¿No puede decirse, acaso, a pesar de todos los inconvenientes y de todas las fallas que el espíritu estudioso encuentra siempre apoyo en la acción de los hombres de gobierno, que el país prosperó y adelantó porque tuvo grandes conductores, grandes pensadores, hombres de magnífica ilustración, porque todos ellos estuvieron siempre, por encima de las pequeñas políticas, inspirados por un sentimiento de unión de patria y de anhelo de grandeza para la misma? Créame los señores diputados que en el fruto de la acción de esos congresos, que despectivamente se tildan de oligárquicos, encontrará el país por mucho tiempo las leyes más fundamentales, más perfectas, las más previsoras que tiene la patria. No vivimos hoy —y es bueno que vayan conformándose a esa idea— una época en que los hombres comulgan con hostias como ruedas de carretas. No en vano pasamos por la tierra, camino de la vida, quienes tenemos la obligación de profundizar un poco en el pasado de nuestro país y de desentrañar la evolución de cada uno de esos problemas, para hablar a nuestro pueblo con justicia y con verdad sobre lo mucho que se ha hecho, sobre lo mucho que queda por hacer y sobre lo mucho que pueden hacer los gobernantes dentro de las posibilidades que les deparan el tiempo, las circunstancias y los factores que gravitan en cada época de gobierno.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Ricardo C. Guardo.

El país no ha progresado en la forma asombrosa que lo ha hecho, por generación espontánea de los acontecimientos. No ha necesitado pedir prestada la acción de hombres que no tuvieran su ciudadanía, no ha ido a buscar en

los países extraños instituciones que no congeniaran amplia y absolutamente con su espíritu democrático y libertario. Todo lo ha hecho por el esfuerzo de sus hijos. Si nuestros estadistas conocieron las instituciones de países europeos o americanos, si estudiaron el espíritu de esas leyes, si trataron de trasplantar a nuestra tierra instituciones jurídicas y sociales, fué porque tuvieron visión y la capacidad de comprender que nuestro pueblo era lo suficientemente inteligente y tenía una aspiración suficientemente progresista como para asimilar esas instituciones y esas leyes, ese espíritu reinante en otros países. Pero tuvieron también la visión de hacer todo lo posible para que aquello que pudiera dañar el sentimiento nacional, destruir la conciencia nacional argentina o desfigurar el carácter de nuestra nacionalidad, no fuera trasplantado y tuviera arraigo de ninguna naturaleza en esta noble tierra.

He dicho que el país ha adelantado a pasos agigantados en una trayectoria extraordinaria y que es una utopía y un desconocimiento de nuestra propia patria querer afirmar y hacerle creer al pueblo argentino que recién hoy entra en el cielo del progreso, de su engrandecimiento moral, de la satisfacción de todas sus aspiraciones sociales. Pregunto a los señores diputados: ¿Qué es un medio siglo en la vida de un pueblo? Es menos que un día en la vida de un individuo. Y olvidan los señores diputados que en el año 83 el país tenía el trágico problema de sus poblaciones arrasadas, de su trabajo limitado al ámbito de las urbes, de la inseguridad absoluta para el tránsito en toda la República, porque las hordas salvajes barrían todo signo de civilización en el formidable duelo en que defendían su baluarte y se oponían a la civilización que quería conquistarlos para el libre trabajo y el progreso fecundo.

Olvidan los señores diputados que recién a principios de siglo fué posible substituir las pesadas y lentas carretas que cruzaban la República, dejando el tendal de cautivos, por la locomotora y el convoy ferroviario. Olvidan que el maravilloso invento del flúido eléctrico aplicado a la iluminación de las ciudades y al desarrollo de la industria, fué introducido en la República a los cinco años de haberse descubierto. Olvidan que a fines del siglo pasado el general Roca inauguraba emocionado el primer teléfono argentino en una línea tendida desde el despacho presidencial a su casa particular.

Olvidan que hoy, después de 50 años, en relación a su población y a la extensión de su territorio, la Argentina es el país que más ha progresado en todos estos adelantos; que tenemos mayor proporción de kilometraje ferroviario y mayor número de teléfonos; que tenemos las líneas de comunicación más perfectas que puede presentar un país civilizado, y que

tenemos una legislación, una potencialidad económica y una cultura de las que podemos enorgullecernos.

Olvidan los señores diputados que hace trece años, en 1933, era imposible recorrer la República Argentina en automóvil, porque no había un solo camino en todo el país, y porque los que nos lanzábamos alguna vez a esa aventura nos quedábamos encajados, pantano tras pantano, y empleábamos tres días para recorrer un kilometraje que hoy se hace en siete horas.

Sr. Vischi. — Muy poca capacidad hubiera demostrado la clase gobernante argentina si no hubiera hecho lo que ha hecho hasta ahora.

Sr. Pastor. — Olvida el señor diputado que esos hombres, más modestos y menos presuntuosos que el señor diputado...

Sr. Vischi. — Usted es más capaz.

Sr. Pastor. — ...como Moreno, Rivadavia, Urquiza, Mitre, Alberdi, Avellaneda, Sarmiento, Vélez Sársfield, esos hombres con su obra prepararon un engrandecimiento que no hubiera sido posible realizar si no los hubieran substituido en la acción hombres capaces de continuarla y de preparar esta prosperidad general que permite realizar esta legislación social.

Esa es la grandeza de nuestro país, ésa es la gloria de nuestra patria, ése es el orgullo de los argentinos, que no tenemos por qué sentirnos disminuidos en comparaciones que sólo surgen de los hechos inmediatos que el país está viviendo y que es posible que mañana sirvan de comparación dura y cruel para la marcha de progreso y de adelanto que viva el país en lo futuro.

Se puede discutir, señores diputados, la capacidad de los gobernantes, de los hombres políticos o no; se puede analizar y exhibir sus errores con más o menos crueldad; se puede hablar de oligarquía, olvidando que oligarquía es siempre la que está en el gobierno, porque oligarquía es el gobierno de los menos y de los más ricos, como ocurre ahora; se puede hablar de eso y mucho más, pero hay algo que no debemos olvidar jamás: es el culto y el respeto a los hombres que nos dieron patria, que nos dieron grandeza y que nos dieron libertad. *(Aplausos.)*

Sr. Díaz. — Y que no nos dieron fraude.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Señor presidente: como miembro de la comisión que con otros colegas de mi sector he firmado en disidencia parcial este despacho, voy a referirme brevemente a un aspecto que ya ha tocado el señor diputado Frondizi en su brillante exposición de fondo, respecto del orden del día que estamos considerando. De ahí, pues, que habré de circunscribirme a lo netamente institucional, porque debemos cuidar que el ordenamiento jurídico del país se mantenga severamente, dando cauce a las

nuevas manifestaciones legislativas de amplia reforma social, pero sin necesidad de tocar lo que constituye la garantía de orden para todos los argentinos.

En primer término, quiero referirme a dos artículos esenciales del decreto ley 15.074 de 1943, que crea el organismo de administración para la aplicación directa de toda esta legislación social de grave y trascendental importancia para la República, mucha de la cual, respecto a la clase trabajadora, estaba ya proyectada, y mucha también ha sido extraída de las carpetas de las comisiones de este Parlamento.

En el artículo 1º del referido decreto, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, dependiente de la presidencia de la Nación; y en el artículo 5º se establece: «Quedan transferidas a la Secretaría de Trabajo y Previsión las atribuciones y facultades otorgadas por la legislación vigente a los organismos y servicios incorporados y las que en orden a las mismas tenían otorgadas los ministerios de que dichos organismos dependían. Los decretos preparados por la Secretaría de Trabajo y Previsión serán sometidos para ser refrendados por los ministerios que en cada caso corresponda.»

Este aspecto, que lo voy a considerar no sólo en lo que respecta a este decreto, sino en lo que concierne a otro decreto también a consideración de la Honorable Cámara, por lo que después no haré sino repetir brevemente los conceptos, a mi juicio merece algún detenimiento, porque no contempla en realidad el ordenamiento jurídico de nuestro texto fundamental.

La Constitución argentina da la norma, que no puede torcer la posibilidad de satisfacer necesidades; lo que hay es que la norma jurídica es garantía para todos los habitantes de la República e impide la arbitrariedad de los gobernantes, que a veces, so pretexto de hacer bien, perjudican los intereses vitales de la Nación. Se ha dicho hace breves instantes que éstos son problemas nuevos y que sus soluciones realmente pertenecen a estos últimos momentos de la vida argentina.

Yo debo reivindicar un poco la preocupación de los Constituyentes argentinos en el sentido de que no sea todo una organización política del país, sino que han tenido en cuenta también los problemas sociales y económicos. Claro está que los hombres de 1853 no pudieron pensar concretamente en los problemas de 1943, pero dentro de sus concepciones previeron tan ampliamente el régimen jurídico, que yo afirmo que es posible encuadrarse dentro de ese régimen jurídico y realizar las más fundamentales reformas en materia económica y social.

No es la primera vez que en el Parlamento y en los cuerpos constituyentes argentinos, se ha considerado la situación del proletariado del país. Probablemente los señores diputados en

sus lecturas se han cuidado de ver el aspecto político de nuestras disensiones internas, que se han traducido a veces en sangrientas luchas civiles, pero también la historia nacional registra las luchas entre las clases sociales y entre los elementos que ejercían la función de mando y el proletariado argentino que vivía —reconozco— en una condición inferior, porque la emancipación no había llegado a fondo en la transformación social y económica.

Sr. Vischi. — Y en muchos sectores del país no ha llegado todavía; y tardará en llegar.

Sr. Ravignani. — No se puede improvisar todo...

Sr. Vischi. — Muy bien.

Sr. Ravignani. — ... pero es necesario hacer justicia, señor diputado.

Dentro de ese orden de ideas y con ese enfoque, diré dos palabras para hacer presente a los señores diputados que cuando a veces lucharon federales y unitarios, hombres del federalismo sostuvieron la reivindicación de las clases proletarias. Esto me permite empalmar con el concepto del federalismo que nosotros debemos respetar en la organización de la República.

Debe saber el señor diputado que me ha interrumpido, que una de las disensiones fundamentales de uno de los grandes dirigentes del federalismo argentino, el coronel Dorrego, cuando disintió a fondo con los unitarios sobre la forma de gobierno y el sistema electoral, protestó vivamente al querer introducir el voto calificado y cuando se dijo que los asalariados no podían votar. Le recomiendo al señor diputado que lea ese discurso que parece actual...

Sr. Vischi. — No necesito que el señor diputado me lo recomiende. Lo cierto es que el proletariado argentino tuvo voto libre recién en 1912. *(Aplausos.)*

Sr. Ravignani. — ... y en la consecución de ese voto libre he puesto mi acción cívica; de modo que sus palabras no pueden ser una censura...

Sr. Vischi. — No le discuto.

Sr. Ravignani. — ... con respecto al diputado que habla. *(Aplausos.)*

Sr. Vischi. — No le discuto eso; pero lo histórico es lo que yo afirmo.

Sr. Lencinas. — ¡Esa ha sido la obra del radicalismo!

Sr. Ravignani. — Para luchar por el voto libre, no he necesitado ejercer la función pública.

Sr. Vischi. — En los ingenios de Tucumán y en los quebrachales de Chaco, y en otras partes del territorio, no lo hubo ni aun con la ley Sáenz Peña.

Sr. Pastor. — Lo hubo mucho antes.

Sr. Presidente (Guardo). — Advierto a los concurrentes de las galerías que les está totalmente prohibida cualquier manifestación.

Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — Lo que quiero significar, y parece que el señor diputado no tiene sensibilidad para percibir, es que de los cuerpos constituyentes no han estado ausentes los problemas de la vida argentina cuando han querido dar una estructura institucional al país. Las instituciones que queremos defender están en función para asegurar la más amplia legislación social y obrera, para asegurar las reformas fundamentales y para eso no es necesario pasarse a nado la Constitución.

Afirmo que la creación de una secretaría dependiente del presidente de la República no contempla la organización constitucional argentina. Existen disposiciones intergiversables y no se puede dar visos de legalidad a leyes que —por más que se las estime— no lo permiten.

El artículo 74 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina, pero el artículo 87, a su vez, instituye ocho ministros secretarios que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y «refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia».

Este es el ordenamiento institucional del Poder Ejecutivo, y según él, no puede haber secretarías de Estado dependientes del presidente de la República, sino ministros secretarios a cargo del despacho de los negocios de la Nación.

No se opone, desde luego, la Constitución a que haya subsecretarías, pero deben actuar dentro de la organización administrativa y dentro de cada uno de los ministerios. Siendo así, la secretaría estructurada en este decreto ley viola la organización constitucional del país.

La Constitución, en su mencionado artículo 87, dispuso que una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los ministros, y en su consecuencia se dió la ley que estableció las facultades de los ministros. La primera, la ley 80, del año 1856, fué reformada para acomodarla al texto constitucional de 1898, que suprimió la enunciación de los ministros. La ley de 1898, como consecuencia de la reforma, estableció el orden y denominación de los ministerios, y éstos, por la ley 3.727, tienen asignada específicamente su función emergente de la Constitución.

La Constitución ha querido, por la reforma, dar más elasticidad al contenido administrativo de cada uno de sus ministerios, y no sería necesario forzar la Constitución para encuadrar la Secretaría de Trabajo y Previsión, como subsecretaría, dentro de un ministerio, sin perjuicio

de que se le atribuyan todas las facultades que el legislador crea deban serle asignadas.

En cuanto a los decretos mismos, pueden ser proyectados por los subsecretarios, pero quienes estructuran realmente los decretos dentro de la organización constitucional, no son los subsecretarios, sino los ministros. Yo quiero que los ministros queden en la elevada categoría de la organización del Poder Ejecutivo. De ahí no pueden ser disminuidos en forma alguna. En cambio, en este caso, son simples refrendadores de lo que haga la Secretaría de Trabajo y Previsión. No está dentro de la categoría constitucional, sino en segundo plano. Considero que esto altera en absoluto el orden institucional y le quita realmente fuerza de validez y de eficacia, tomando el término de la Constitución, a las decisiones, resoluciones y decretos que toma la Secretaría de Trabajo y Previsión. El presidente de la República tiene que discutir con cada uno de sus ministros y es por la vía de éstos que deben venir los decretos, y los ministros no refrendan a posteriori los decretos salidos de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto es una alteración del orden constitucional y respetar el mismo no es afectar en forma alguna la importantísima legislación obrera que el país necesita. De modo que nosotros no hacemos una cuestión leguleya; lo que queremos es el respeto del ordenamiento jurídico, sin afectar en absoluto los requerimientos de una política fundamental en materia económica y social, en materia de legislación obrera, que el país reclama.

Cuando se discutió la ley de los ministerios en 1898, precisamente al discutirse lo relativo al subsecretario, se dijo: «Las subsecretarías de Estado son una jerarquía importante que debe fomentarse y estimular. Son hombres de la administración.» Las subsecretarías de Estado son realmente auxiliares fundamentales de los ministros, pero quienes tienen la responsabilidad con el presidente son los ministros. Los subsecretarios de Estado son los de actuación permanente. Los ministros pasan rápidamente en sus cargos; los subsecretarios son los que siguen en la administración. Alivian a los ministros en su labor, pero no lo hacen hasta el punto de pasar adelante y dejar a los ministros atrás para que éstos refrenden los decretos.

Voy a tratar un aspecto importante, a efectos de considerar por qué debe ser subsecretario. Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que hacerse por vía de los órganos creados por la Constitución. Además de refrendar los actos del presidente de la República, el ministro es el único funcionario que mantiene relaciones con el Poder Legislativo, de modo que los decretos que se originan en el Poder Ejecutivo tienen que ser de los señores ministros porque éstos son los que proyectan, subs-

criben y sostienen ante el Congreso los proyectos de ley. Los ministros son los que redactan las memorias, los que proyectan los presupuestos y la inversión, los que juntamente con el presidente promulgan, publican y ejecutan las leyes; los ministros son los que resuelven por sí —por sí, repito— todo asunto administrativo en su departamento. Tal como viene este decreto ley para la ratificación del Congreso, con esta redacción, afirmo que está en flagrante contradicción con textos expresos de la Constitución.

Hay otro aspecto que quiero considerar en general, al que ya se han referido otros diputados y que sin duda será motivo de un debate ulterior. Es el relativo al federalismo.

En el decreto que crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, hay tres artículos que constituyen realmente un avance peligroso para las autonomías provinciales. Ya recordó el diputado Frondizi el artículo 12 sobre departamentos, direcciones y oficinas del trabajo; pero, según el artículo 13, estas delegaciones regionales tendrán la composición, atribuciones y facultades que establezca el reglamento orgánico de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Quiere decir que todas estas delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión dependen directamente, hasta en su organización y funcionamiento, de la entidad que actúa como secretaría ministerial.

Por último, en el artículo 15 del mismo decreto se establece que «los organismos provinciales que actualmente tienen asignadas funciones iguales o similares a las de previsión y ahorro, que se indican en el artículo 69 del presente decreto, conservando su actual estructura, atribuciones, organización y funcionamiento, pasarán a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión».

Tengo sobre mi banca un decreto provincial, que a mi juicio sienta la verdadera doctrina federalista y cuyos fundamentos merecen ser conocidos por la Cámara. Es del gobierno de la provincia de Entre Ríos, que pertenece a la misma orientación política de la mayoría de la Cámara, y lleva fecha 26 de junio de 1946. Dice lo siguiente: «Vista la gestión promovida por la delegación regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, solicitando la designación de la autoridad de aplicación de las leyes vigentes en materia de trabajo para hacer efectivo su cumplimiento en la provincia, y considerando: que tal facultad es privativa de la provincia y surge de los principios constitucionales de nuestra forma liberal de gobierno y a los efectos de lograr mayor eficacia en la aplicación de las disposiciones relacionadas con las actividades de la clase trabajadora, en resguardo de sus propios intereses, es indispensable armonizar los procedimientos de las autoridades de la Nación y de la provincia y que para lograr tales propósitos y

contando la repartición recurrente con personal especializado, estima conveniente el Poder Ejecutivo encomendar a ese personal en el momento actual el cumplimiento de las funciones determinadas en el decreto orgánico del departamento provincial del trabajo, de fecha 9 de enero de 1935», etcétera.

Como ven los señores diputados, ya han aparecido manifestaciones de autonomismo provincial fundado en disposiciones expresas de nuestra Constitución. Esto preanuncia a los señores diputados y a la clase trabajadora, que es necesario establecer severamente el ordenamiento jurídico dentro de nuestra Constitución, para lograr los derechos y las reivindicaciones que todos anhelamos.

Esta forma de avance sobre las autonomías provinciales, puede significar un semillero de cuestiones que enerven la legislación social y obrera. Debe, entonces, preverse inteligentemente, con ilustración, todo lo que puede acaecer en el país y dar una recia estructura jurídica, de manera que no se afecten las autonomías provinciales.

A menudo se ha creído que el federalismo es una simple definición política. Que no es nada más que el interés de alcanzar el gobierno en cada una de las provincias. Esto no es más que el aspecto formal. La esencia del federalismo argentino está en situaciones de índole económica, social, de tradición histórica, que es necesario respetar. Ya dijeron nuestros ilustres constituyentes por qué se adoptaba la forma federal. No fué copiando simplemente textos extranjeros, sino que, de acuerdo con el análisis profundo y detallado que de los antecedentes hiciera Alberdi, se estructuró nuestro federalismo; se funda en factores de índole económica de nuestro país, en factores de índole demográfica, en todos los elementos que constituyen la riqueza y el trabajo de la República.

El federalismo no es una formalidad constitucional, sino que tiene un substrato fundamental: el respeto de los derechos de las poblaciones de cada una de las provincias, de las modalidades, de la tónica especial de cada una de nuestras regiones, en donde es necesario contemplar las verdaderas necesidades de la masa trabajadora, cuando se trata de esta legislación obrera.

Está bien que se dicten leyes generales del país, para defensa de los trabajadores, pero tiene que haber departamentos de aplicación, estructuraciones administrativas, debe respetarse el régimen judicial para que el propósito legislativo que tenemos sea más eficazmente aplicado por los hombres y los organismos que en las provincias tienen la responsabilidad del gobierno.

Simplemente he marcado dos puntos de índole constitucional para llamar a la reflexión de los señores diputados. No dictemos formas legislativas que importen violaciones abiertas de la Constitución.

Cuando discutamos algunos de los decretos en especial, será ocasión de hacer resaltar algunas fallas que es necesario tener en cuenta sobre todo en el orden de la aplicación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Montiel. — He escuchado las exposiciones de impugnación, creo yo, de inconstitucionalidad, de los decretos leyes o de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Evidentemente, tenemos un concepto y criterio distinto en este problema como en otros tantos.

La legislación que beneficia a los trabajadores, y que tratamos de sancionar aprobando los decretos leyes de un gobierno defacto en momentos en que el país pasaba por un período de convulsión política, provocó en su oportunidad serias resistencias, resistencias aun no vencidas, como surge de este debate, aunque claramente no se lo exprese.

Se nos ha impugnado ya públicamente con los mismos argumentos, diría, con los mismos conceptos, movida por el mismo espíritu. Nosotros hemos defendido desde su iniciación la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque creíamos y seguimos creyendo, que es una necesidad para el país. Que llena un gran vacío. Debía terminarse con el engaño que se hacía a los trabajadores a través de los departamentos del trabajo de las provincias y de la Capital Federal, que no han llenado su cometido, ya que el solo objeto de estas instituciones, era el mantener un plantel de hombres que vivían del presupuesto, de espaldas a la realidad nacional, como norma invariable de conducta. No eran nada más que instituciones burocráticas inoperantes. Ni siquiera se pensó nunca en dotar a esas reparticiones de elementos con los conocimientos necesarios en la materia para que llenaran su cometido. Tanto es así, que en el Departamento del Trabajo se ubicaban todos los señores de familia bien, los mejores recomendados o con más influencia en el gobierno y con menos condiciones de realizar.

Sr. Santander. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Montiel. — Sí, señor diputado.

Sr. Santander. — Le voy a dar un dato que le ha de resultar interesante al señor diputado. Uno de los cerebros del viejo Departamento del Trabajo fué el actual secretario técnico de la Presidencia de la República, señor Figueroa.

Sr. Díaz. — Lo sabíamos.

Sr. Visca. — No es una novedad.

Sr. Santander. — Es una novedad, por lo que acaba de decir el señor diputado. No sé si será un niño bien de Cataluña. (*Risas.*)

Sr. Visca. — Conocía la referencia.

Sr. Montiel. — El señor diputado Santander me hace una aclaración, y yo podría hacer otra. Los trabajadores no vivimos engañados; no somos ni ciegos ni sordos, sabemos adónde vamos, qué es lo que queremos y también las dificultades que tendremos que vencer y que no dudo serán grandes. Pero tenemos confianza en nosotros mismos y en los trabajadores, para vencer esas dificultades que aseguro sabremos vencer. Nos hemos hecho en la lucha y no vamos a renunciar a la misma, en la consecución de nuestros derechos y de nuestras conquistas. La lucha es para nosotros lo mismo que el aire para la vida.

He dicho en otra oportunidad en la Cámara, que el régimen social que vive la República Argentina, es capitalista, crudamente capitalista, que vivimos dentro de un régimen jurídico institucional, que no se ha roto del todo, que no se ha desarticulado todo; en consecuencia, que está en potencia, y que la clase trabajadora argentina, a pesar de su poderío numérico, tal vez no esté en condiciones de reformar ese andamiaje jurídico, dentro del orden jurídico y con sentido jurídico, porque nuestros conocimientos no llegan hasta ahí. Siempre hemos luchado al margen —podríamos decir— de las leyes y de la Constitución misma, que tanto se invoca en esta Cámara, porque nunca ésta protegió realmente al trabajador. La legislación del trabajo que se ha hecho en este país, era simbólica; actuaba como un elemento de valor decorativo en el orden jurídico, porque en su aplicación ha sido siempre negada. (*¡Muy bien!*) No culpo a las leyes. Creo que hay leyes muy buenas. Pero los malos gobiernos, los malos funcionarios, el mal elemento humano, ha negado totalmente la legislación y el derecho a una clase social que necesitaba vivir dentro de la ley para no salirse de la normalidad y ser fuertemente reprimida, reprimida sin piedad.

Sr. Rojas (A.). — La ley de descanso dominical, pongamos por ejemplo, ¿se cumplía o no se cumplía? La ley de accidentes del trabajo, ¿se cumplía o no se cumplía?

Sr. Orozco. — A medias.

Sr. Rojas (A.). — La ley de despido, ¿se cumplía o no se cumplía?

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Rojas (A.). — Es que es todo una mistificación que no se puede tolerar.

Sr. Montiel. — Agradezco las interrupciones, porque las interrupciones son necesarias.

El señor diputado necesita saber si las leyes de descanso dominical y de accidentes del trabajo se cumplían o no. Si alguna ley ha ser-

vado de industria a abogados en la Argentina, ha sido la ley de accidentes del trabajo que les resultó muy lucrativa a los estudios jurídicos. (*Aplausos.*)

Sr. Rojas (A.). — Y a los dirigentes obreros también.

Sr. Montiel. — No le acepto, porque estoy hablando con toda corrección, y no aludo al señor diputado.

Sr. Rojas (A.). — Como alude a los abogados, yo le devuelvo el saque.

Sr. Montiel. — Es necesario que cuando el señor diputado afirma que a los dirigentes obreros también nos servía de industria la ley de accidentes del trabajo, tenga por lo menos la lealtad de concretar si hay acá alguno de ellos.

Sr. Rojas (A.). — Concrete el señor diputado qué abogados vivían de esas leyes. Ha habido una burocracia obrera, como ha habido una burocracia oficial.

Sr. Montiel. — Lamento que el señor diputado desconozca tan profundamente la cuestión obrera.

Sr. Rojas (A.). — Quizá desconozca más el señor diputado el régimen constitucional sobre el cual divaga cada vez que se presenta la oportunidad.

Sr. Montiel. — Puede ser, señor diputado, que yo lo desconozca en razón de que no he cursado la universidad. Pero como reconozco que entro en un campo desconocido, me suelo cuidar de entrar; en cambio el señor diputado, que desconoce lo otro, se mete a cada rato sin cuidarse de interferir en lo que no entiende. (*Risas y aplausos.*)

El señor diputado menciona la burocracia obrera. Los dirigentes políticos querían que los obreros y sus dirigentes estuviéramos permanentemente con la bolsa al hombro; y son precisamente los dirigentes políticos quienes usufructuaban el poder político y vivían tranquilamente de él, sirviendo al poder económico.

Sr. Rojas (A.). — Nunca he vivido de la política. Es la primera vez que actúo en funciones políticas.

Sr. Montiel. — Pero cuando un dirigente obrero, a fin de desempeñar sus funciones, hace abandono de su trabajo y tiene que cobrar de la organización un sueldo miserable, entonces lo califican de agitador profesional, de dirigente burócrata. Es la tesis capitalista de la inactividad obrera. Puedo afirmar que los dirigentes políticos de nuestro país han constituido para éste su peor burocracia, porque han vivido del presupuesto, sin trabajar, y lo que es peor, engañando a las masas trabajadoras.

Sr. Rojas (A.). — Eso es a lo que ustedes aspiran.

Sr. Montiel. — Quiere decir que nosotros estamos en mejores condiciones, porque no hemos vivido del presupuesto.

El señor diputado se ha referido a una cosa interesante, a la ley de accidentes de trabajo. La explotación que se ha hecho a los trabajadores con motivo de esa ley es inculcable. Si hiciéramos una estadística de las ganancias de los abogados con la ley de accidentes del trabajo, comprobaríamos que ellas superan a las indemnizaciones recibidas por los obreros. ¡Industria lucrativa!

Sr. Rojas (A.). — No es exacto.

Sr. Montiel. — En el Departamento Nacional del Trabajo, en la Capital Federal, había abogados y agentes de los mismos que repartían tarjetas entre los accidentados que concurrían para tramitar la indemnización. Nunca se cobraba la indemnización por accidente del trabajo, porque el abogado defensor del obrero resultaba muchas veces asesor de la compañía aseguradora. Así engañaban.

De manera que si alguna vez protestamos contra la aplicación de la ley es porque tenemos alguna experiencia acerca de la actuación de los malos funcionarios. Yo no he calificado mal a la ley. Creo que la ley 9.688 es una gran ley, de gran utilidad social. Pero también tenemos que estar a veces en contra del concepto tan jurídico que no contempla la realidad económica y social de la vida, donde ustedes nos querían llevar y donde en nombre de la legalidad y de la constitucionalidad nos han explotado.

De ahí que la clase trabajadora —y me remito a la experiencia— haya estado siempre un poco en contra de las leyes que le resultaron instrumentos perfectamente jurídicos al servicio de la explotación de los que viven de la venta de la fuerza de trabajo.

Sr. Pastor. — El señor diputado sabe que entre los ministros del actual Poder Ejecutivo hay algunos que eran abogados de los obreros, permanentemente.

Sr. Montiel. — En los últimos años, señor diputado Pastor, algunos sindicatos con recursos...

Sr. Pastor. — Hay de todo en la viña del Señor.

Sr. Montiel. — ...han conseguido abogados para defenderse, porque no es lógico que nosotros estemos peleando siempre con un palo y ustedes con una pistola. De ahí entonces que fuera necesario que nosotros también tuviéramos abogados para nuestra defensa.

Sr. Rumbo. — Como sucede en todo el mundo.

Sr. Montiel. — Exactamente. Creo que en todo el mundo existe eso y en todo el mundo se ha generalizado en estos últimos tiempos, que los hombres de leyes fueran asesores de los trabajadores. Hombres de leyes con mentalidad de trabajadores manuales. Y hemos llevado también de asesores a los abogados en las conferencias internacionales del trabajo a efecto de que

las ponencias y recomendaciones que salieran de esos organismos, estuvieran siempre encuadradas dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes. De manera que hemos progresado y no hemos renunciado a la ley ni a la Constitución, a pesar de que chocábamos a veces con ella. Yo he aclarado que no estoy en contra de la ley ni de la Constitución, sino en contra de los hombres que las aplicaron mal. Hemos visto, tanto en el orden social como en el orden penal, injusticias de la ley. Ley no significa justicia.

De manera que nosotros, que hemos estado mirando el manejo de la cosa pública y observando a la propia legislatura desde afuera, protestábamos, y hoy, que llegamos a ella, traemos una palabra, que no será muy autorizada, pero que es leal y representa una respetable experiencia con origen en el dolor. Que es honesta y que tratamos de decirla con la mayor certeza posible para que sirva a otros, encauzándola dentro de los moldes que ustedes dicen que deben ser constitucionales o legales.

Esta legislación que estamos discutiendo es constitucional y es legal. ¿Que ha de lesionar algunos intereses? ¿Que ha de haber algunos hombres y algunos sectores que la resistan, unos por conveniencias económicas y otros por principios políticos? Estamos de acuerdo. Eso es humano. Pero nosotros creemos que dentro de lo malo que se puede haber hecho, se hizo mucho bueno. Y acá podríamos aplicar el dicho de Sarmiento: hay que hacer, aunque se haga mal. Pero anteriormente se tenía tanto en hacer y se miraba tanto esos conceptos jurídicos, que no se hacía nada porque se servía al poder económico por la inacción.

Sr. Pastor. — Pero hay una cosa que el señor diputado, que está hablando serenamente, va a percibir. No hay necesidad de agraviar a determinadas clases ni a determinados sectores de hombres en el país, para defender a otros. Cuando el señor diputado habla de los hombres que trabajan, yo le preguntaría cuantos son los hombres en el país que están calificados como hombres de trabajo; si el hombre de la clase media, el que tiene una pequeña casita, un pequeño comercio, una pequeña industria, un automóvil para explotarlo, no es hombre de trabajo; y si cree que los hombres que organizan industrias en el país no hacen más que vivir de la especulación de los demás, que son hombres que no se sacrifican ni luchan por nada.

Sr. Vischi. — Trabajan, pero se llevan la parte del león.

Sr. Montiel. — Nosotros estamos hablando de los económicamente débiles, estamos hablando de una clase social que no ha tenido nunca participación en el gobierno, excluida del privilegio, que no ha dado opinión en las leyes que se han sancionado, que no han opinado, inclusive, cuando se dictó la Constitución. En la

sanción de la Constitución nosotros no intervinimos, no existíamos, hoy existimos y la criticamos honestamente.

Sr. Pastor. — Las clases sociales nuestras son movibles y es común ver que un industrial de hoy era un obrero de ayer, y que un obrero de ayer hoy es un hombre de la clase media.

Sr. Montiel. — Esa no es una novedad para nosotros, que la conocemos perfectamente. Pero yo no quiero ahondar mucho esta discusión, porque nos va a conducir a un terreno que no es precisamente al que debemos ir. El problema para ustedes como para nosotros, creo que es mucho más profundo, de mucha más envergadura. Por lo menos, los conceptos vertidos por el sector de la minoría dan esa sensación. Así, por ejemplo, decían que el gobierno a través de la Secretaría de Trabajo, utilizaba a los obreros como fuerza de choque a cambio de una legislación del trabajo. Me parece que eso es injusto. Si aceptáramos esa manifestación sin contestar, se daría la sensación de que la mayoría del país es inconsciente, es irresponsable, es materialista, no es idealista. Ha luchado y luchará por sus libertades y por sus conquistas; mas aún, por el acrecentamiento de unas y otras, tendiendo a la igualdad ciudadana.

Nosotros también creemos que no nos han de sugestionar y que no nos han de captar por una legislación social a cambio de un mendrugo más. No es así. La clase trabajadora de nuestro país tenía mucha sed de justicia. Vivíamos un mundo de injusticias irritantes.

Voy a manifestar lo poco o lo mucho que he visto a través de tres años en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Si tomáramos el movimiento social o gremial de los alrededores de la Capital Federal, tendríamos que hablar en el tono que ustedes están hablando y hasta aceptar algo; pero si nos internamos en el interior del país, desde luego no tenemos que aceptar, porque debemos tomar el problema en conjunto. De ahí que algunos señores diputados de la minoría no están acertados al calificar así tan groseramente, digo yo, cuando sostienen que el gobierno ha utilizado a la clase trabajadora como fuerza de choque a cambio de una legislación del trabajo que nosotros ahora queremos convertir en ley.

Era necesario esto y era necesario un poco de atropello. Esos patronos que se resistieron, que estaban acostumbrados a que la ley los protegiera siempre, a que la policía los amparara y a que los jueces les perdonaran todo, se encontraron de repente con que una cosa nueva había surgido. Los hombres de trabajo adquirían derechos y llamaban a los patronos a conversar con ellos, les planteaban sus problemas, los amenazaban con una huelga; los patronos pedían garantías al gobierno para que no hu-

biera huelgas y el gobierno no les mandaba la policía como antes.

Los patronos se sentían así heridos en sus intereses y manifestaban que no había garantías para los capitales o para las industrias. Y no es así. Es absolutamente falso. Hubo siempre garantía en alguna medida para todos. A los trabajadores no se les ha pedido excesos de ninguna naturaleza y por lo menos no habrá obreros que puedan decir: a mí, me aconsejaron hacer tal cosa en contra del patrono. Si alguna cosa se ha hecho, ha sido por cuenta del obrero, así como si algunos patronos alguna cosa hicieron, lo han hecho por cuenta de ellos. Siempre se trató de buscar un equilibrio, pero como el equilibrio no convenía y estaban los patronos mal acostumbrados porque siempre estaban parados en lo alto y el obrero en lo llano y después, de golpe, se les vino abajo la montaña y quedaron al mismo nivel y eso no podía ser a juicio de los patronos...

Sr. Pastor. — Muchas veces se rompió un equilibrio existente.

Sr. Montiel. — De ahí que nosotros nos sentimos demasiado orgullosos con esta legislación, con algunos procedimientos y con la creación de la Secretaría de Trabajo, porque nos ha sacado de un estado de servilismo para colocarnos como ciudadanos iguales a los demás. Cuando los trabajadores plantean un pliego de condiciones y hay que llamar a los patronos, éstos vienen, y en estos momentos los patronos vienen a medianoche a discutir con nosotros y vienen ellos personalmente, porque ya no creen ni en sus abogados, a veces. Esas molestias que se les están ocasionando y a las que no están acostumbrados, producen una resistencia que, por otra parte, motiva todas las cosas nuevas, y así, también en este caso los señores patronos e industriales lo encuentran mal. Vivieron demasiados años en impunidad irritante.

Tal vez no sea perfecta la legislación que estamos sancionando, inclusive para los trabajadores...

Sr. Uranga. — Me felicito que el señor diputado haya hablado de los trabajadores del interior del país. Quiero advertirle que suscribo muchas de las ideas que está exponiendo. Pero es extraordinario que, después del 4 de junio, este régimen de justicia social reivindicador haya olvidado a una enorme masa sufriente de este país, que no puede ni siquiera presentarse «de medianoche» al patrono. Es la masa que hace la grandeza económica del país: los colonos agricultores, para los cuales el Estado es el patrono inclemente, que le compra la cosecha al precio que se le ocurre para pagar déficit del presupuesto, con la diferencia que obtiene al revenderla en el mercado internacional, quedándose con la parte del león, en operaciones que le permiten después distribuir ese dinero en

enormes presupuestos, en el aumento de la burocracia y en el aumento de los sueldos de los militares.

No he escuchado ninguna palabra de amparo hacia esos trabajadores del campo.

Sr. Cámpora. — Con este gobierno, por primera vez, los trabajadores del campo sienten amparo.

Sr. Uranga. — Lo disimulan muy bien.

Sr. Cámpora. — Es la primera vez que los colonos están protegidos.

Sr. Pastor. — Antes, cuando se fijaba precio mínimo, era para los agricultores y no para explotarlos.

Sr. Cámpora. — Pregunte a la gente de campo.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Guardo). — Sirvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa con la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Montiel. — Creo que el señor diputado Uranga tiene razón. Así como el señor diputado ha suscrito las manifestaciones mías, yo suscribo las suyas. Sé que los trabajadores del campo están mal remunerados. Sé que hay muchas injusticias por corregir. Demasiadas, diría yo. Por eso he dicho que esta legislación no es ni la cuarta parte de lo que se necesita. No crean que con esto nos damos por satisfechos y que creamos que vivimos en la gloria. Una parte mínima de los trabajadores se beneficia con esta ley.

Hay una compañía que es extranjera —si mis informes no están equivocados—, que tiene el monopolio del tanino y el monopolio de los montes, de los quebrachales, que explota en nuestro país a miles de trabajadores y posee cincuenta y tantas leguas cuadradas en Santa Fe: La Forestal. Dentro de ese feudo —estoy hablando de un año y meses atrás—, los hombres que van a trabajar, en vez de tener capataces o encargados, tienen un contratista, que no es tal contratista, sino un testaferro de la compañía, que simula ser contratista. Esa gente que vive allí, debajo de los árboles, sin techo, sin casa, rodeados de insectos, no pueden vivir con unos miserables centavos, y tienen que trabajar volteando quebrachos y preparando los rollizos para hacer el tanino. La familia casi no existe. En esa época ni siquiera ganaban lo suficiente para el gasto diario de ellos, estando permanentemente en deuda con el patrono, es, hasta cierto punto, una moderna forma de la esclavitud. No podían salir del lugar en que estaban mientras no pagaran su deuda al patrono, pues había un destacamento policial que cuidaba de que ninguno se fuera del lugar. De vez en cuando —los criollos tenemos esa virtud— los trabajadores se

alzan, pelean, matan o mueren; en esos casos se les procesa por rebeldes, por peleadores, buscando fútiles motivos, y los hombres van presos porque peleaban por su libertad, pues al tener que salir del obraje, tenían que pasar por sobre la policía destacada en el lugar.

Ese es el régimen social que se vive aún en nuestro país. Voy a citar un ejemplo elocuente. Hay hombres que trabajan con los bueyes, para transportar los rollizos desde el monte. Los bueyes eran de la compañía, y ésta les cobraba por cada animal que se perdía o se moría, 90 pesos. Pero el contratista era el que vendía la carne, robaba los bueyes, los carneaba y le cobraba al pobre trabajador 90 pesos por cada animal. Cobraban por partida doble: por la carne y por los bueyes. Eso se hacía con conocimiento del gobierno muy democrático de Santa Fe y de hombres que proclamaban la libertad, la ley y la Constitución.

Sr. Rojas (A.). — En Santa Fe gobierna el Partido Laborista.

Sr. Díaz. — Eso era constitucional...

Sr. Montiel. — Eso podría hacerse dentro de la Constitución, pero no está escrito en el libro del señor diputado; esas cosas no las sabe, porque hay que ir allí para vivirlas y conocerlas y no hacer literatura aquí.

Yo he ido a La Forestal con el delegado regional de Santa Fe y nos recibieron en una casa magnífica. En esos días hacía un calor terrible, pero esa casa contaba con un salón grande, con un tejido fino de alambre alrededor, para que no entraran los mosquitos; había heladera, bebidas de toda clase que uno quería tomar, camas bien limpias con servicios de mucamos. Los funcionarios de antes —y no sé si puede haber alguno todavía, pero ya se ha corregido mucho— llegaban a esa casa denominada de visita y se quedaban dos o tres días, el tiempo que querían, tratándoseles como verdaderos «pachás». Transcurrido el tiempo que ellos creían conveniente, volvían a la ciudad, habiendo «controlado» a La Forestal desde la casa tomando refrescos.

Cuando nosotros solicitamos la presencia de los trabajadores de los obrajes y de la fábrica de tanino en esa casa, se escandalizaron. Posteriormente, cuando hubo una discusión con respecto a la situación de los obreros y negaron una cantidad de mejoras para éstos, yo les dije a los dueños que si ellos hubieran gastado menos dinero en todas esas comodidades para la gente que no hace nada y que no trabaja y lo hubiera invertido en favor de los obreros, ellos estarían mucho más contentos, habrían producido más y se hubiera evitado que anduvieran harapientos, debajo de los árboles, con sus hijitos, sin techo, sin tener dónde descansar. Sin embargo la gente de gobierno que iba a visitar a

La Forestal tenía todas las comodidades y no veía la miseria porque ella disgustaba.

Todo eso se ha corregido en parte. No se ha solucionado todo aún, pero los obreros de esa zona de Santa Fe en estos momentos están trabajando en muchas mejores condiciones y gozan de libertad, pues pueden salir en cualquier momento de los dominios de La Forestal, deban o no algún dinero a ésta. Eso se hace desde el 4 de junio.

Podríamos internarnos más y citar a Tucumán, feudo azucarero. Es histórico el problema azucarero de Tucumán, del Norte, de Salta, donde está ese famoso dominio de Patrón Costas, gran industrial que nos merece todo respeto...

Sr. Vischi. — Muy patriota.

Sr. Montiel. — ... en cuyo feudo azucarero veinte y tantas mil almas trabajan todo el año y luego de terminadas sus tareas los mandan con algunas chucherías, porque no llevan de vuelta ni un solo peso.

Había hombres que se encargaban de traer a los indios. Algunos diputados dicen que no se llaman indios, sino aborígenes; yo digo indios. Los iban a buscar al interior del país para venderlos por treinta o cuarenta pesos, repitiéndose la venta cada año. Después del 4 de junio, se creó en nuestro país una institución que llegó al Norte de la República para proteger al indio.

Hoy los indios son traídos de los confines de la República, pero hay obligación de devolverlos usando medios de transporte y no como antes, que los llevaban al ingenio El Tabacal, por ejemplo, y luego los largaban de a pie.

En el panorama de conjunto, es probable que estos principios de legislación social puedan herir en alguna parte a la Constitución, pero en cambio ha curado muchas heridas de los hombres. Prefiero que se lastime un poco la Constitución, pero que se curen los hombres en su falta de justicia, para retornar luego por sus viejos fueros. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Con toda lealtad, con todo conocimiento, digo que queda mucho por hacer en el campo, que falta mucha protección, y que no es culpa del gobierno sino del régimen, de la sociedad y de los malos patronos que esa protección no haya existido.

Los señores diputados encontrarán en Corrientes que hoy se está pagando a los peones de estancia dieciocho pesos por mes y tienen que dormir sobre un cojín. Cuando estos trabajadores salen al campo y el recado se moja, tienen que buscar en los galpones un cuero sucio para dormir sobre él.

¿Puede ser feliz un hombre con dieciocho pesos mensuales de sueldo? Desde ese punto de vista, ¿podemos estar hablando de federalismo, para que cada provincia haga lo que quiera? Yo diría feudalismo, no federalismo.

Sr. Uranga. — En ninguna parte del país se explota más al trabajador que en los territorios, que dependen del gobierno central.

Sr. Montiel. — No pongo en duda...

Sr. Uranga. — Las provincias han demostrado que lo más importante que se hizo en este país ha venido del interior a Buenos Aires, y no de Buenos Aires al interior.

Sr. Montiel. — Puedo demostrar al señor diputado que en el territorio de Misiones, donde la yerba mate se industrializa en el Alto Paraná, los contratistas de hombres compraban gente pagando cincuenta o sesenta pesos por cada obrero, a cambio de su libreta. Estos contratistas recorrían desde Posadas y Santo Tomé para abajo, juntaban quinientas o seiscientas libretas, y luego en un tren los llevaban al lugar de trabajo, ofreciéndoles un jornal de cinco a seis pesos por día. Cuando el obrero ya había trabajado un tiempo y creía que estaba pagado el adelanto que le habían hecho, en la proveeduría le hacían la cuenta y resultaba que estaba debiendo 100 ó 200 pesos. Eso se ha hecho en tiempo de gobiernos constitucionales, cuando la Constitución era más nueva y podía accionar mejor.

Sr. Rojas (A.). — Eso se hacía violando la Constitución.

Sr. Montiel. — La Constitución era una cortina de humo y detrás de ella se hacían muchas cosas. Se engañaba invocando su nombre.

Sr. Rojas (A.). — Estamos de acuerdo en acabar con esa explotación inicua, pero queremos que esta institución engrane en el ordenamiento constitucional.

Sr. Montiel. — Los trabajadores argentinos y los que estamos en esta Cámara, defendemos esta legislación y la votaremos favorablemente porque creemos que es útil y llena un gran vacío en la legislación social en nuestro país.

Creemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión puede ser —todavía no es— el organismo regulador de la sociedad en nuestro país, el organismo que encuentre el equilibrio entre el capital y el trabajo y el bien de la patria.

Y ante la defensa que se hace del federalismo contamos con un argumento muy sólido; nuestro país está adherido a la Oficina Internacional del Trabajo, que en sus conferencias hace recomendaciones para que los países las conviertan en leyes. Eso está tomando ya, no un estado nacional, sino un estado mundial. En nuestro país no puede haber obreros privilegiados aquí y otros que estén esclavizados más allá. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Balbin. — Señor presidente: Es natural que cuando un diputado enfoca un problema, lo haga desde su punto de vista; pero no es prudente, ni se acomoda a la técnica, que a un sector se le haga pensar de determinada manera o se lo coloque en falsa posición.

Si no mediara el Diario de Sesiones, si no se hubiera asistido a este debate desde el comien-

zo, y sólo nos atuviéramos a las palabras del señor diputado Montiel, ¿quién sabe lo que se supondría, sobre lo que se ha dicho desde este sector! Pero por suerte, nuestra posición está perfectamente documentada, y bien rubricada nuestra forma de pensar en la materia.

El señor diputado Montiel ha pretendido llevar a la confusión, haciéndole pensar a este sector a su manera. Por suerte, este sector piensa mejor, y lo hace muy bien.

La comisión, bajo el rótulo de decretos relacionados con la Secretaría de Trabajo y Previsión, nos remite, con cierta lógica dentro de esta forma irregular de legislar, una cantidad de decretos que hacen la esencia de la legislación obrera del país, pero que no hacen en su totalidad a la esencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Con lo que quiero decir, que este debate se hace en la forma que lo hacemos, porque el copioso orden del día se inicia con el decreto de creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Si así hubiese acontecido, muchos decretos contenidos en este voluminoso despacho ya estarían votados. Pero cuando hacemos el debate sobre la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, *no es exacto que nos coloquemos en la situación que ha pretendido el señor diputado Montiel.*

Sr. Montiel. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Balbin. — Sí, señor diputado.

Sr. Montiel. — He anotado que el señor diputado Frondizi ha dicho que el gobierno, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, ha utilizado a los obreros como fuerza de choque a cambio de una legislación del trabajo. Seguramente, el señor diputado Balbin no ha oído bien las manifestaciones de su colega.

Sr. Balbin. — He oído perfectamente bien; y si quisiera volcarlo a este debate —no lo he de hacer en beneficio de la legislación que debemos dar urgentemente—, en el terreno en que lo ha colocado el señor diputado Montiel, yo diría que puede ser que se ponga en seriedad la Secretaría de Trabajo y Previsión para lo futuro, pero no puede negarse que hasta el 24 de febrero ha hecho política y no legislación obrera. Es ésa una verdad a la que no penetro, porque estoy al servicio de una buena legislación. Yo soy hombre que mira para adelante; y, por sobre los errores de cualquiera, me supero, en la medida de mi esfuerzo, para mejorar, en la medida de mi capacidad, las leyes futuras de la Nación.

Todo se puede hacer dentro de la Constitución. No se debe, en nombre de ninguna conquista, hacer la crítica de la Constitución nacional. Ha servido para todo el progreso alcanzado por el país, y va a servir para el mejor progreso de la República. Deben sancionarse las leyes que se adecúen prolijamente a ella, y ésta que tratamos no se adecúa proli-

jamente. La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión puede hacerse sin riesgo dentro del orden nacional; puede crearse dicha secretaría, con estas y otras facultades, para la Capital y los territorios nacionales; pero cuando, con su organización y sus atribuciones, va a las provincias, choca contra una legislación que debe ser igual en el sentido de superación y de mejoramiento, pero que debe respetarse porque es facultad privativa del Estado provincial.

Muchos señores diputados, con toda razón, cuando fundamentan su teoría, en el afán celoso de mostrarse dentro de lo que es una interpretación constitucional, van a los antecedentes que tiene el país. Por lo general, yo no recorro a ellos, porque creo que todos nosotros escribimos un pedazo de historia; todos tenemos el derecho de decir nuestra palabra y hacer nuestro precedente para merecer el honor de una consideración futura.

Sr. Montiel. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Balbin. — Sí, señor diputado.

Sr. Montiel. — Se me ocurre en este momento una reflexión. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública lleva las escuelas a todas las provincias y las paga y las maneja desde aquí. Creemos que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión y las delegaciones regionales que se van a instalar en las respectivas provincias no se va a interferir la legislación. Los hombres que irán allá recibirán de la Nación una remuneración suficiente como para no verse en la necesidad de ser coimeros, como sucedería con los sueldos que pagan las provincias, de 80 ó de 100 pesos. Es un organismo regulador, y no legislativo.

Sr. Balbin. — Admiro el esfuerzo del señor diputado en querer explicar algunas cosas que, a través de sus manifestaciones, advierto que no entiende. Pero me remito a los hombres del sector de la mayoría que conocen la ley y el procedimiento, que saben lo que son las facultades del Estado nacional y las de las provincias, para que nos entendamos dentro del derecho, que es en definitiva el que ha de aplicarse en cada una de las provincias.

Voy a leerle una cita actual. No pertenece a un constitucionalista, ni es de un hombre de mi partido: es de un hombre de la provincia de Buenos Aires, que es legislador y peronista.

Cuando, en agosto 19 de 1946, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se yió abocada a idéntico problema que éste, cual era el de considerar los llamados decretos leyes, para ratificarlos en la medida de su conveniencia o para dejarlos sin ratificación en la medida en que ya hubieran cumplido su destino, se habló de los decretos de la provincia de Buenos Aires dictados en razón del decreto nacional sobre

las cámaras de alquileres y del decreto de creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Y el diputado del oficialismo, presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, que piensa exactamente igual que los señores diputados en cuanto a las preocupaciones que determinan esta clase de discursos, decía: «Respecto de los decretos números 980, de 13 de julio de 1943, creando las cámaras de alquileres de la provincia de Buenos Aires, y 4.288, de 23 de octubre de 1944, que autoriza la transferencia a la Secretaría de Trabajo y Previsión de material y elementos técnicos y administrativos del ex Departamento de Trabajo de la provincia, como asimismo de los créditos asignados en el presupuesto, vuestra Comisión de Negocios Constitucionales y Justicia no puede aconsejar su ratificación.

«En efecto, el primero de ellos, al disponer que en todo el territorio de la provincia se aplicarán las disposiciones del decreto nacional 1.580, el que hace a la cuestión de los alquileres, sin haber hecho reserva de la invasión de jurisdicciones que importa el artículo 39 del citado decreto nacional, consagraria la violación de los límites territoriales de la provincia, allanando sobre ellas su autonomía.»

Y cuando tiene que referirse a éste que motiva nuestra preocupación actual, agrega: «El segundo de estos decretos se dictó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del decreto nacional 15.074, de noviembre de 1943, que crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. En realidad, la mención de dicho artículo no corresponde, pues el mismo se refiere a la transferencia a la Secretaría de Trabajo y Previsión del personal, material etcétera.

«Entiendo —dice más adelante con toda honradez jurídica y sin deponer sus convicciones, de la misma manera como las funda el señor diputado por Buenos Aires— que en la estructuración del decreto nacional 15.074 se viola el régimen federal de gobierno al legislar la Nación dentro de la órbita de las facultades no delegadas por la provincia, y que en el número 4.228, relativo a esta cuestión, se compromete el patrimonio del Estado de Buenos Aires. Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales, celoso guardián de los preceptos que hacen a nuestra organización política institucional, aconseja su no ratificación.»

Es decir que dentro del deseo de bien público se busca afanosamente la norma jurídica que puede aplicarse sin riesgo. Y nosotros, al ratificar estos decretos así, porque sí, creamos una fuente de discusión, una fuente por la cual los jueces, que también son buenos hombres, se van a ver abocados a desconocer un derecho, lo que después va a hacer hablar mal del crédito de nuestra justicia. Este decreto, creación

de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ratificado así porque sí, no servirá más, porque el voto de la Cámara lo transforma en una ley de la Nación y contiene cuestiones y da facultades que no son motivo de ley ni pueden ser otorgadas por esta Cámara.

Sr. Reyes. — ¿Me permite, señor diputado?...

En cuanto a las facultades que pueda tener la Secretaría de Trabajo y Previsión, sin este proyecto de ley ya las tiene, porque en Eerisso el señor secretario de Trabajo y Previsión se presentó ordenando la vuelta al trabajo a los obreros que estaban en este último conflicto, arrogándose el papel de juez y parte, diciendo que ese conflicto era nada más que fruto de unos dirigentes extraviados que hacían política con ese movimiento, e invocando el nombre del señor presidente de la República ordenó que los obreros volvieran al trabajo para romper ese movimiento. Y arrogándose otras facultades posiblemente, dejó la Policía Montada para que sacara a los trabajadores de adentro de las casas y los llevara a trabajar.

Esas son las facultades que, sin este decreto ley, se ha arrogado el señor secretario de Trabajo y Previsión, mintiendo a los trabajadores.

Sr. Balbin. — Dentro de mi teoría no las tiene, se las toma. Pero mientras eso sea una arbitrariedad de un funcionario, queda limitado a la responsabilidad del mismo; y a veces hacen pequeños viajes dentro del Código Penal...

Sr. Reyes. — Cuando los funcionarios tienen responsabilidad...

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego al señor diputado que no interrumpa.

Sr. Balbin. — Pero acá la Cámara, dentro de la teoría que consulta las palabras del señor diputado, está dando una ley; y si advierten los señores diputados una cosa, comprenderán en qué medida es extraordinario el error que vamos a cometer. El artículo 69 de este decreto ley dice cuáles son las reparticiones e instituciones que pasan a depender del organismo de Trabajo y Previsión, y cuando en el artículo 15 penetra en los territorios de provincia afirma que: los organismos provinciales que actualmente tienen asignadas funciones iguales o similares a las de previsión y ahorro que se indican en el artículo 69, pasarán a depender del delegado de Trabajo y Previsión.

Sr. Visra. — Del delegado, no, señor diputado; de la secretaría.

Sr. Balbin. — De la secretaría que se transforma en delegación, señor diputado. No me negará, que votado este decreto ley, de acuerdo con el artículo 12 las secretarías de Trabajo y Previsión de las provincias pasan a depender exclusivamente del señor secretario de Trabajo y Previsión de la Capital Federal.

Así lo dice este decreto que vamos a votar ahora. Con lo que queda dicho que todos los organismos de la provincia de Buenos Aires, Caja de Ahorros, Caja de Jubilaciones, pasarán a depender por vía indirecta de la Secretaría de Trabajo y Previsión y, por tanto, del Poder Ejecutivo Nacional; vulnerará así, violentamente, todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires. No se puede negar, porque eso está en la letra del decreto; no se puede decir que no es así, porque los departamentos, direcciones u oficinas de trabajo existentes en las provincias quedan convertidas en delegaciones regionales de Trabajo y Previsión en virtud de una anomalía jurídica, contra la que por cierta complacencia, por la paz del país —me refiero a la paz de las instituciones—, todavía la gente no ha reaccionado en la medida en que debió hacerlo, esperando que este Congreso diera la ley que pusiera remedio a este estado antijurídico, que pudo existir y servir durante el «facto», pero que no puede servir cuando las instituciones de la República han entrado dentro de sus carriles constitucionales.

No se puede decir que estamos en estado de revolución; nos hallamos en estado de pos-revolución. Para los señores diputados ya tiene su éxito o su destino lo que fué la revolución del 4 de junio de 1943; pero para nosotros, los que nos sentamos en el Congreso, la revolución es un hecho que aconteció, y nosotros estamos legislando dentro de la ley; por el contrario, si estamos dentro de un proceso revolucionario, el Congreso está totalmente de más.

Nosotros queremos avalar todo lo que signifique una conquista social, pero dentro de la ley, dentro del orden y del derecho. En esta materia me suscribo a las ideas como éstas que están con la buena teoría y que no podrán criticar los señores diputados, porque el mismo miembro informante de aquella comisión, seguramente celoso de lo que era una determinación de él en el desconocimiento de lo que significaba la delegación de Trabajo y Previsión, aseguraba más adelante: «No se podrá negar que todo esto ha servido al país; pero son más serias las instituciones de la provincia y será más fuerte el derecho que hagamos en la medida en que adecuemos las conquistas a lo que son normas fundamentales del país.»

Sr. Montiel. — ¿Me permite?

Sr. Balbin. — Nosotros no habríamos dicho en un artículo cosas como ésta: que los comisionados federales en las provincias arbitrarán las medidas pertinentes para que en sus presupuestos de gastos se mantengan los créditos necesarios para atender el funcionamiento de las respectivas delegaciones regionales.

Sr. Montiel. — Yo le pregunto al señor diputado qué sucedería si en estos momentos no sancionamos esta ley.

Sr. Balbin. — Nosotros debemos hacer una buena labor, es decir, una ley que sirva; debemos dictar...

Sr. Montiel. — ¿Cree el señor diputado que el Congreso termina esta noche? El Congreso es permanente.

Sr. Balbin. — ...una ley que cree la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero con la jurisdicción y dentro de las facultades que tiene esta Cámara a su alcance: para la Capital y territorios nacionales.

Sr. Montiel. — Conviene sancionar hoy esta ley.

Sr. Balbin. — Conviene sancionarla, pero bien. No se trata de que, en nombre de una arbitrariedad, nosotros sigamos siendo arbitrarios con toda conciencia. Si esta secretaría ha servido, ¿por qué no dictamos una ley que la afiance? Si este mecanismo es útil al país y a las conquistas de que ustedes tanto hablan ¿por qué no corregimos las disposiciones y damos un instrumento útil? Es un instrumento de anarquía el que va a votar la Cámara esta noche. Y esto no es todo: va a votar otra cosa peor.

Sr. Montiel. — Nosotros no renunciemos a modificarlo.

Sr. Balbin. — Dice el artículo 22 de este decreto que el secretario de Trabajo y Previsión «dictará las disposiciones que considere pertinentes para aclarar los preceptos del presente decreto y del reglamento orgánico». Era justo y razonable que esto se redactara de esta manera cuando se dictaban decretos leyes por un gobierno defacto, pero no es posible que en el articulado de la que va a ser una ley dictada por este Congreso, nosotros le demos a un funcionario la facultad de reglamentar las leyes, facultad que es exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Cómo a un funcionario, que no sabemos quién es; cómo a un funcionario, que es un simple secretario dentro del mecanismo administrativo del gobierno, le vamos a dar esta extraordinaria facultad de reglamentar leyes? Esto pudo ser antes, cuando el gobierno de la revolución gobernaba en nombre de la fuerza; pero yo no creo que este Parlamento esté gobernado en nombre de la fuerza; estamos dentro de la Constitución para hacer bien las leyes, en forma tal, que respeten la Constitución.

Si nosotros damos fuerza de ley a este decreto que crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, y limitándola para la Capital Federal y los territorios nacionales, yo lo acompañaría con mi voto; pero no para que penetre por vía oblicua en los territorios de las provincias, haciendo tabla rasa con las autonomías provinciales, como lo hará desgraciadamente. Nosotros acompañaríamos una legislación de ese tipo; pero no podemos dar nuestro voto a la creación de algo que va a ser una ficción jurídica, que

a a originar una serie de discusiones, que va a ser inaplicable, porque ya no rige el estado de sitio en el país, y porque esto va a dejar de ser un decreto ley para transformarse en una ley dada por el Congreso y que desde ese instante se hace plenamente discutible y queda plenamente afectada de inconstitucionalidad. Antes, pudo la gente aceptar por complacencia a vigencia de estas disposiciones; vivió hasta el 24 de febrero en estado de sitio, donde la fuerza era la razón de ciertas determinaciones; después ha tenido el respeto nacional, de permitir que esta Cámara entre al estudio de todo ese cúmulo de disposiciones defacto; pero mañana mismo, cuando el Congreso lo haya transformado en ley, el pueblo tendrá el derecho de discutir. Y si se ganan los pleitos y se demuestra que estas delegaciones de Trabajo y Previsión han dejado de ser legalmente válidas, nosotros seremos los únicos responsables.

Concibo que un gobierno central tenga serias preocupaciones cuando escapa a su penetración y a su orientación la existencia de gobiernos de provincias que no le son agradables o no comparten su opinión. Pero ¿qué sentido extraordinario tiene este gobierno, que pudiendo hacer todas las cosas bien hace que las hagamos todas mal? ¿Cómo es posible querer mostrar un extraordinario vivir de felicidad, si estamos abocados a este terrible problema que hace discutible nuestra posición, porque estamos al servicio de las buenas normas jurídicas? Si tiene todos los gobiernos, a excepción de uno de ellos, que está semiavasallado; si se tiene todo el poder central; si gobierna al Congreso con su mayoría, ¿por qué este deseo de imponer una legislación decididamente mala, que pondrá al país en estado, no de revolución, sino de convulsión jurídica?

Muchos problemas se tendrán que discutir; y, necesariamente, lo que puede ser un derecho adquirido y que la es la ilusión de mucha gente, se transformará en la pérdida de ese derecho porque no hemos legislado con cautela.

Sr. Reyes. — Cuando se arreglan los conflictos por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión...

Sr. Presidente (Guardo). — No interrumpa el señor diputado.

Sr. Balbin. — Correspondería, dentro de la conformación ideal, la aplicación estricta de un derecho obrero en todo el país, donde todos los hombres tengan idéntica protección y donde los límites no mortifiquen el derecho de unos y de otros. Habría que buscar la coordinación nacional, respetando las autonomías provinciales; que el Estado nacional se preocupe de buscar, dentro de una legislación de leyes convenios, de legislaciones comunes, una norma buena y general en el país; pero no entrando a saco den-

tro de los territorios provinciales para dar, en nombre del Congreso de la Nación, leyes que no servirán para nada.

En la provincia de Buenos Aires, existe la ley 4.548, orgánica del Departamento del Trabajo. ¡Asómbrense los señores diputados! Es la que pone en función el señor delegado de Trabajo y Previsión. Es, dentro de la legislación provincial, una ley buena, con algunos defectos que se pueden corregir; pero buena en definitiva. Tan buena, que la Secretaría de Trabajo y Previsión, se la copió casi toda.

Se le da la facultad del decreto 21.425 —que ahora no veo en este orden del día— y que crea la institución de la instancia administrativa obligatoria para el resarcimiento de accidentes de trabajo en todo el país, que es una legislación procesal que, si no es un calco, es muy parecida a la ley 4.548, de la provincia de Buenos Aires.

Sr. Albricu. — No se aplica.

Sr. Balbin. — Pero forma parte de los decretos leyes y no viene dentro de este orden del día.

Se aplica la ley 4.548, que es una ley bastante buena, para considerar el derecho de todos los hombres que trabajan y pueden ser motivo de asistencia, en el orden de accidentes o de cualquier otra naturaleza; y al crear el director del Departamento del Trabajo, que en definitiva será el delegado de Trabajo y Previsión, se le exige idoneidad, conocimiento de la ley, las mismas condiciones que para ser juez; y ahora resulta que tenemos secretarios de Trabajo y Previsión con categoría de delegado y con jerarquía de secretario, porque la delega el señor secretario en el orden nacional, que no tienen esos títulos, que no pueden, dentro de la provincia, dictar sentencia de tipo administrativo, que puedan dar después el derecho de ejecutar esas sentencias en los tribunales. Creamos todo un conflicto, toda una ineficacia en este andamiaje de construcciones. Lo hacemos todo. Designamos a los funcionarios, les damos facultades; y cuando dictan resoluciones, no sirven, porque en la provincia de Buenos Aires son muchos los que respetan la autonomía y las facultades de la provincia. No es posible, entonces, que nosotros no podamos dictar disposiciones que verdaderamente sirvan de instrumento para hacer una buena justicia social. No se puede reclamar en nombre de la arbitrariedad jurídica de la Nación; no se puede decir que se puede hacer, en nombre de supuestas conquistas, agujeros a la Constitución; porque hoy el señor diputado, con mucha nobleza, pensó que en nombre de estas conquistas se podía superar a la Constitución. ¡Tenga cuidado! Porque, en nombre de la arbitrariedad, la Constitución, en este país, se la suelen pasar a nado ciertos dictadores.

Sr. Montiel. — Me ha hecho decir lo que no pienso.

Sr. Balbin. — Nosotros respetamos la Constitución dentro de la democracia. Ella va a servir siempre, servirá toda la vida, porque no depende de ella, como decía el señor diputado, sino de quienes ejercitan el gobierno en nombre de la Constitución. No debemos olvidar que nosotros estamos aquí por designio de la Constitución. En nombre de ninguna conquista se debiera decir que hay que hacerle agujeros a la Constitución. Por esos agujeros, en nombre del bienestar mal entendido, pueden penetrar todos los sátrapas de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Nosotros queremos afianzar el derecho de todos dentro del orden jurídico. Yo comprendo que algunos hombres, con buena intención, con muy buena voluntad, no puedan suponer que una buena idea o una buena aspiración que tienen reciba frenos y encontronazos por algo que otros hombres le dicen que se llama la Constitución. No es así. La Constitución sirve para todo eso, en la medida que nos dispongamos a cumplirla verdaderamente. Esa institución que ustedes tanto quieren y que puede querer el país en el futuro si hace bien, puede funcionar dentro del mecanismo constitucional, a poco que la adecuemos dentro de ella. Pueden existir organismos de Trabajo y Previsión, no delegaciones del gobierno nacional o del señor secretario en el orden nacional, sino organismos representativos del trabajo en las provincias, porque tenemos constituciones provinciales y leyes provinciales. Yo desafío al gobierno de la Nación, y le puedo demostrar, que la legislación procesal en materia obrera de la provincia de Buenos Aires es mejor que la que rige en la Capital Federal, no obstante la existencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y la conquista no es de nosotros: es de la provincia.

Jamás hemos hecho balance nosotros de lo que hicimos bien o mal, porque esperamos el balance final, donde rendiremos todo lo que hemos hecho. Nosotros aquí estamos haciendo algo en la medida de nuestro esfuerzo. Lamento que se puedan cansar los señores diputados de oír estas cosas cuando existe tanta labor en esta Cámara; sin embargo, es bueno que perdamos un poco el tiempo en decirnos esto, para que nuestra obra sea verdaderamente útil.

Mucho de lo que está acá en este libro y debemos votar, ya no sirve por anticuado. Lo demás puede servir adecuándolo al régimen institucional del país, en el que ya no estamos en estado revolucionario, aceptando con decoro todos los decretos que puedan transformarse en leyes que sean para bien del país.

Cuando hacemos estas afirmaciones, no es que estemos en contra del despacho en su inte-

gridad, sino que estamos con los decretos leyes que hacen el bien general, que hacen al derecho de los hombres, a su jubilación, a las pensiones, al aguinaldo; pero formalizamos esa discusión dentro del terreno de la legislación pura en cuanto al organismo, no en cuanto a los derechos que puedan otorgarse. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rojas (N.). — Entro complacido a este debate, y lo haré en la forma más objetiva posible, renunciando a una problemática elocuente para tener éxito oratorio. Hablaré llanamente sobre temas que son de mi preocupación desde hace tiempo, y sin ánimo de recordar cosas personales, diré que toda mi actuación parlamentaria, ahora y en el año 1942, siendo diputado, está vinculada a las cuestiones del trabajo.

Me preocupa el problema obrero como argentino, como hombre de estudio y, en primer término, como legislador. Las cuestiones del trabajo y este cúmulo de decretos que estamos considerando, los he estudiado con detenimiento, muchos de ellos dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo, y otros por la necesidad de resolver ahora esta cuestión.

Antes de abordar concretamente el asunto, debo decir que no he de replicar con pasión polémica las consideraciones de los dos diputados de la mayoría —que no quiero llamar peronistas—, quienes han hablado con una vehemencia de aringas políticas, planteando un aspecto que no queríamos que se traiga cuando se trata de cuestiones de legislación del trabajo. Pero puesto que ellos lo han hecho, yo siento el deber de aclarar algunas cosas.

Los señores diputados, como casi todos los oficialistas —incluyo en ellos al primer magistrado—, hablan siempre como si cada uno fuera algo así como el Cristóbal Colón de las cuestiones obreras en el mundo y en el país. Nada se ha hecho en el mundo ni en la Argentina antes de esta decantada revolución. Es el estribillo que hoy hemos oído.

He de insistir muy brevemente en algo que ya los colegas de mi sector han aclarado, respecto de la acción en favor de la clase trabajadora realizada desde el gobierno, en este cuerpo y en el Senado de la Nación, por los gobernantes y los legisladores de la Unión Cívica Radical.

Es negar la evidencia, es negar la historia, que todos nosotros hemos vivido como actores o espectadores, pretender que los problemas del proletariado no se renovaron en su estudio y en sus soluciones, sobre todo a partir del advenimiento de los gobiernos radicales. Hipólito Yrigoyen y el partido que lo respaldaba, no hacían política demagógica. No usaban el halago a la masa obrera, a cambio del voto y a cambio de

las libertades públicas. Se hizo justicia social con un alto espíritu de unidad nacional, sin encender odios, odios, señores diputados, que están encendiéndose diariamente desde las esferas oficiales, y que pueden llevar al país a días de tragedia.

Sr. Montiel. — De la justicia social de Santa Cruz estará hablando el señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — Con datos estadísticos he de demostrar que estos problemas de la justicia social y de la explotación obrera, no son exclusivamente argentinos. Es ignorar lo que pasa y ha pasado en el mundo, decir que sólo en este país es agudo tal problema.

Sr. Argaña. — Nadie lo ha dicho.

Sr. Rojas (N.). — Es un problema que afecta a toda la vida económica y la organización social de la humanidad. La Argentina tiene su capítulo correspondiente.

Lo que me interesa aclarar —y han de permitirme los señores diputados que lea cifras—, es que en este asunto se hace una mistificación.

Aquí tengo una publicación oficial de la Dirección de Estadística Social. Se titula «Condiciones de vida de la familia obrera».

Cuando uno oye al presidente de la República y a los señores diputados oficialistas, habría que creer que recién ahora hay aumentos de salarios y mejoras de la clase obrera.

Sr. de la Torre. — Es exacto.

Sr. Rojas (N.). — Sé que en estos últimos años eso ha tomado un ritmo precipitado. Pero es negar el pasado decir que todo eso ocurre recién desde que un grupo de militares tomaron el gobierno, derrocando al que habían servido hasta la víspera.

Sr. de la Torre. — Esa es la aberración de la política argentina...

Sr. Rojas (N.). — En esta publicación...

Rogaría que no se me interrumpiera. No pienso contestar interrupciones. Concederé las que amablemente se me pidan.

En esta publicación figuran los números índices del costo de la vida y los salarios, desde 1914 hasta 1945.

Los índices de salario van subiendo desde 1914 —en que el índice es 51— salvo un período durante el gobierno del general Justo, hasta ahora, sin que se note ninguna modificación en la curva. El índice de 51 en 1914 pasa a 100 en 1929, a 104 en 1942, y a 143 el año pasado.

Yo sé que los señores diputados se encandilan con los cuadros de curvas de ascensos de los salarios. Ya he de hablar de las diferencias que hay entre el salario nominal, ficticio, y el salario real, en relación con el costo de la vida.

Lo que interesa en este cuadro, además de revelar el aumento creciente de los salarios, es lo que nos da la otra columna. Este cuadro oficial desmiente al Poder Ejecutivo y a los señores diputados. Hay que comparar esos aumentos con

la curva del costo de la vida. Durante los doce años a que corresponden la primera presidencia de Yrigoyen y la de Alvear, el índice de los salarios sube de 50 a 100. El índice del costo de la vida en 1917, a pocos meses de iniciado el gobierno de Yrigoyen, es de 103; en 1929 pasa a ser de 100. Es decir, que la política de los gobiernos radicales fué de aumentos de los salarios durante esos doce años y, paralelamente, de disminución del costo de la vida, porque se encaró la solución integral de estos problemas con visión de verdadero estadista.

En cambio, ¿qué es lo que pasa en estos últimos años? El índice del costo de la vida, que en 1942 es de 103, en 1945 llega a 122; vale decir, que el costo de la vida aumenta en una proporción enorme, contrariamente a lo que sucedía durante los gobiernos radicales.

Quiere decir, señor presidente, que en esto hay una simulación. Cuando se leen con propósitos de estudio las propias publicaciones oficiales, uno encuentra los elementos para desinflar este globo de la Secretaría de Trabajo en lo referente a la política de salarios.

Sr. Orozco. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Rojas (N.). — Sí, señor.

Sr. Orozco. — El señor diputado ha venido munido de datos muy interesantes. Tengo para mí, quizás equivocadamente, que los datos que nos ha dado respecto a que ha bajado el costo de la vida, se refieren a la época de las vacas gordas. Sería interesante que analizara el aumento del costo de la vida, no solamente en nuestro país, sino también en los demás países, porque se trata de un fenómeno que no se ha producido aisladamente aquí, sino también en el resto del mundo.

Sr. Rojas (N.). — Lo de la época de las vacas gordas es solamente aplicable al gobierno actual, porque toda la política económica la hace en su exclusivo beneficio; está servida por industriales que se han enriquecido vertiginosamente y que son los dictadores económicos de esta época.

Sr. Orozco. — ¿Y respecto de la otra pregunta, referente al costo de la vida en otros países, señor diputado?

Sr. Rojas (N.). — Si el señor diputado por la Capital tiene paciencia, y ya que, como él dice, vengo munido, contestaré su pregunta dentro de un rato. Déjeme desarrollar el tema de mi exposición y las estadísticas lo van a convencer de lo que estoy diciendo.

Tenemos que abordar este fárrago de decretos. Yo no he estado en las esferas oficiales ni antes ni después de la revolución de junio, pero se sabía que había una fiebre de decretos leyes, y que los jefes de reparticiones, los ministros, decían con frecuencia a sus amigos más o menos capacitados: denos ideas, tráigannos pro-

yectos; y los decretos se hacían como a máquina, en serie. El orgullo del gobierno fincaba en que la cifra de los decretos subiera varios miles por año. Así nos encontramos con este bosque de decretos, por el que he andado con linterna. Hay contradicciones monstruosas. No hay tiempo, ni la mayoría quiere hacerlo, para que analicemos en una disección decretos que confrontándolos con otros de este mismo grupo o con decretos de otros que vendrán después, presentan entre ellos la contradicción más absoluta.

Muchos son fruto evidente de la improvisación —en eso está la causa de la contradicción— de gente poco técnica, porque eran casi todos aficionados, militares o civiles, que legislaban con una desenvoltura que uno habría deseado que la practicaran si al mismo tiempo tuvieran genio o intuición. Se equivocaban casi siempre y estos decretos, algunos de los cuales voy a analizar a medida que los vayamos tratando, así lo demuestran.

La legislación, señores diputados, es una técnica. Así como hay una técnica quirúrgica que hay que respetar, porque cuando se la viola se pone en peligro al hombre a quien se está operando, en materia de legislación social hay técnicas que deben respetarse, porque, de lo contrario, en lugar de mejorar lo que se quiere corregir, se lo empeora, planteando situaciones que son semilleros de pleitos y de disputas.

Se ha hablado también, por lo cual no he de insistir mucho, sobre la inconstitucionalidad no sólo del decreto de creación de la Secretaría, sino de muchos otros decretos. Hay verdaderas monstruosidades jurídicas, algo que solamente se explica en un gobierno defacto que no tenía ninguna preocupación de orden legal, puesto que para eso era un gobierno revolucionario y bastaba con que dijera «yo quiero» para hacerlo. Pero no es posible que diputados, con la responsabilidad de legislar, conviertan en leyes esas herejías jurídicas.

Entre ciertos aspectos constitucionales, se ha hablado del avance sobre las provincias. Hay múltiples avances sobre las provincias. En la Comisión de Legislación del Trabajo, cuando hemos estudiado el decreto 33.302, uno de los puntos que nos ha preocupado ha sido las autonomías provinciales. Nuestro despacho, firmado por unanimidad, según consta en el orden del día 116, ha llegado a una solución que no disimulo en calificar de inteligente, para salvar el conflicto evidente que plantea el decreto 33.302 respecto de la autonomía de las provincias.

Mis compañeros han hablado a fondo de ese asunto. Alguna vez hemos de abordar también, en general, el problema de nuestro federalismo. Los males económicos, políticos y culturales de la Argentina, no se han creado sólo por este gobierno, que los ha exagerado, sino que vienen

desde atrás y la culpa no ha sido siempre de los gobiernos centrales que avanzaban sobre las provincias sino de los gobernadores que claudicaban y de los senadores y diputados de provincia que en el Congreso no defendían los derechos locales, que son una de las maneras de restablecer el equilibrio de la Argentina.

El drama de la Argentina tiene como uno de sus capítulos más importantes el unicato, la centralización, la abolición de la vida de las provincias. La política argentina, que todos estos decretos leyes acentúan y la política que sigue el actual presidente de la República exagera, ha ido ahogando la autonomía, la personalidad, la vida de las provincias y es evidente que en la Argentina desaparecerán esos dramas económicos y políticos cuando se restablezca el equilibrio, dando a las provincias mayor autonomía y respetándose el régimen de la Constitución.

Yo invito a los señores diputados de las provincias, a que mediten sobre estos males, que no son de orden político partidario, sino que hacen a la esencia misma de la nacionalidad y me regocijo que el señor diputado Pastor haya esta tarde defendido esa tesis, porque en el año 1942, cuando yo exponía en este recinto las mismas ideas, me dijo que tenía un «federalismo trasnochado». (Risas.)

Sr. Pastor. — ¿Me permite una breve aclaración?

Sr. Rojas (N.). — Después de lo que he dicho, es mi deber.

Sr. Pastor. — Yo le dije al señor diputado que tenía un federalismo trasnochado, porque se oponía a que fuera una escuela industrial a San Luis para que no se hiriera el federalismo de San Luis.

Sr. Vischi. — Que vaya ahora la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Sr. Rojas (N.). — Es necesario aclarar que nosotros estamos de acuerdo con la orientación y con los propósitos de justicia social de casi todos estos decretos. Nosotros hemos propiciado antes, ahora y lo propiciaremos siempre, dentro de las normas legales. Pero en este conjunto de decretos nos encontramos con que se nos pide, por ejemplo, la aprobación de uno de ellos, del que los diputados de la mayoría han hecho el elogio, del decreto 21.877, que crea penalidades para los que resisten a la Secretaría de Trabajo. Yo comprendo que en el momento de la dictadura y cuando esta institución se creó, hubiera habido necesidad de esas medidas un poco intimidatorias respecto de los capitalistas; pero ahora ¿qué propósito tiene que esto se convierta en ley si esa secretaría ya está en marcha y todos los patronos la acatan en cuanto a las diligencias fundamentales? Olvida este decreto, por lo pronto, que el artículo 239 del Código Penal prevé una de las formas de delito contra la administración pública, en la cual estarían comprendidas

es as mismas previsiones. En cambio, acá se nos proyecta un régimen especial solamente para una repartición de la Nación, con privilegios extraordinarios como este de aplicar penas de multa desde 20 a 100.000 pesos y arresto hasta un año. Se olvida, como digo, que esto está legislado en forma general, sin que se puedan hacer leyes de excepción para una institución del Estado.

Además, asómbrense los señores diputados y piensen un momento sobre lo que van a votar, ante lo que dice el artículo 2º de este decreto: «si se tratara de funcionarios —alude a los que resistan a la secretaría— nacionales o provinciales, podrá imponérseles las penas que el Poder Ejecutivo respectivo estime convenientes, según la gravedad del caso». ¿Qué manera de legislar es ésta, en que se da al Poder Ejecutivo el derecho de aplicar las penas que él crea conveniente? ¿En qué cabeza de hombre civilizado ha podido caer una medida semejante? Y esto es lo que los señores diputados pretenden que nosotros votemos.

Nosotros tenemos conciencia jurídica, conciencia constitucional y conciencia de legisladores. No podemos votar enormidades semejantes.

Este decreto tiene algo más: un artículo 5º que considero innecesario leer; y un artículo 7º, que propone una solución que traerá conflictos de jurisdicciones, al decir que «las facultades establecidas en el presente decreto serán aplicadas en la Capital Federal y territorios nacionales por el procedimiento estatuido en la ley 11.570, con la modificación que el presente decreto introduce en el artículo 4º de la citada ley. En las provincias el procedimiento será el de las leyes o reglamentaciones locales atinentes al juicio de faltas». Es decir que el Poder Legislativo va a dictar una ley que impone normas de procedimientos sujetas al régimen de faltas para las provincias, lo que es otro avance sobre las autonomías provinciales. Además, se plantea un conflicto de jurisdicción porque por la ley 11.570 se establece que el juez que corresponde a esa jurisdicción es el juez en lo correccional; y creamos por otro decreto los tribunales de trabajo para todas las cuestiones o conflictos de trabajo. Habrá con esto un problema de competencia a resolver respecto a los jueces que deben entender en esta materia.

En esta lista de proyectos hay otro decreto que dispone que pase a la Secretaría de Trabajo y Previsión el Patronato de Menores. ¿Qué tiene que ver la ley 10.903 con la Secretaría de Trabajo y Previsión? Esta secretaría quiere absorberlo todo.

La ley del Patronato de Menores era una de las mejores leyes de protección: había dado sus frutos; había un grupo de hombres, de instituciones y de poderes públicos dedicados a aplicar todos sus beneficios. Yo afirmo que desde que ese régimen del Patronato de Menores de-

pende de la Secretaría de Trabajo y Previsión ha caído verticalmente como capacidad y como eficacia: ha penetrado la política, se ha nombrado de jefe a un comisario como si fuera una función policial la que corresponde a la protección de menores abandonados; se ha introducido en casi todas las oficinas y reparticiones a recomendadas —insisto recomendadas— casi anal-fabetas, que han ido allí a llenar su tiempo y el presupuesto, desplazando a personas que estaban dedicadas especialmente desde hacía muchos años a esa obra magnífica de la aplicación de la ley 10.903.

Señor presidente: como hablo en nombre del bloque, tendré más tiempo para exponer.

En cuanto a las asociaciones profesionales, es evidente que por la orientación que se les da quedarán supeditadas a la autoridad oficial. Es lo que ya está pasando.

Respecto al decreto 33.302, voy a ocuparme en seguida con más detenimiento.

En cuanto a la asistencia social para ferroviarios —los señores ferroviarios que están en esta Cámara saben muy bien que es verdad lo que voy a decir— se ha consagrado un despojo, el de los bienes que pertenecían a las dos asociaciones sindicales de los ferroviarios y uno de los más importantes fué el Hospital Ferroviario, substraído a la dirección de las sociedades sindicales para convertirlo en un organismo dependiente de la autoridad oficial. En algún momento plantearé en la Cámara la situación del Hospital Ferroviario. Lo que yo quiero decir ahora es que este decreto convierte a esas dos asociaciones sindicales en la situación jurídica de los desmentados, de los incapaces de hecho, porque hay un artículo que dice que todos los bienes de esas dos instituciones serán propiedad patrimonial de ellas, pero serán dirigidos y administrados por esta institución oficial.

Las coloca, pues, en situación de incapacidad civil; tienen la propiedad, que es teórica, puesto que todas las resoluciones de dirección y administración pasan al Estado. Eso se llama despojo.

Sr. Díaz. — Son los mismos ferroviarios que lo han querido así.

Sr. Rojas (N.). — Las instituciones gremiales de los ferroviarios han hecho en sus congresos las reclamaciones. Y ruego al señor diputado que no me quite tiempo.

Las luchas obreras han tenido en la historia tres etapas. La etapa de las reivindicaciones individuales o de grupo; luchas a veces sangrientas. Una segunda etapa es la lucha sindical: cuando los asalariados se agrupan en sociedad para defenderse recíprocamente. En esta segunda etapa lo que ha dado el triunfo a las reivindicaciones obreras ha sido la libertad sindical, la unión sindical para luchar sin estar supeditada al gobierno del país respectivo. Todas las veces que la lucha sindical se ha oficializado por

medio de decretos como éste —lo que ha pasado en Italia, especialmente—, han perdido vigor, han perdido fuerza, porque la lucha sindical necesita libertad, autonomía, independencia.

La tercera etapa es la etapa legal, a la cual van llegando todos los países evolucionados en las cuestiones sociales. Este conjunto de leyes tiende a eso. El decreto 33.302 es uno de los más expresivos, sobre todo por la forma que la Comisión de Legislación del Trabajo lo ha despachado en el orden del día 116, porque va a la solución primordial para los trabajadores, que es el salario.

En materia de salarios —he dicho hace rato—, hay el salario ficticio o nominal y el real. Los gobiernos que quieren seducir al pueblo trabajador lo han encandilado siempre con el aumento de los salarios sin pensar si eso no era más que un salario nominal. Los salarios, para tener valor de justicia social, tienen que estar en relación con los costos de la vida y con las otras exigencias vitales. De este modo ese salario se convertirá en salario real.

No he de hablar del problema de la inflación ni de esa carrera social, que es un fenómeno conocido, la carrera del costo de la vida y los salarios. La experiencia mundial demuestra que en esa carrera gana siempre el costo de la vida. Ante el aumento ficticio de los salarios los capitalistas responden con un aumento de precio.

El gobierno de la Nación con toda su fuerza no ha podido evitar ese fenómeno social del aumento del costo de la vida, o no ha querido hacerlo, porque teniendo la fuerza en sus manos, contando con una ley que buena o mala podía utilizar, no ha ido a la raíz del mal y ha preferido esa pantalla chinesca para enganar a la población con salarios más altos.

No es un fenómeno de nuestro país exclusivamente, y con ello respondo a la pregunta que formulaba un señor diputado. Tengo sobre mi banca una interesante obra del profesor Dobb, de Cambridge, profesor de economía, sobre salarios. Trae esa obra una estadística muy concluyente, la que estudia por países los índices de niveles relativos de salarios reales. Tomando el número cien como referencia del salario en Inglaterra, encontramos que en Alemania hay un número índice de 73 y en Italia de 39; en cambio Estados Unidos tiene como salario real el número de 190, Dinamarca 113 y Suecia 109. Omito otros países. Esto tiene no sólo la importancia de la información económica, sino también política. Es evidente que países como Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca y Suecia, países eminentemente democráticos, han realizado la mejora de los salarios dentro de la libertad en condiciones superiores a estos otros dos países...

Sr. Arias. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. Rojas (N.). — Le pido no me interrumpa, señor diputado.

Sr. Arias. — ¿Quiere informar a los señores diputados qué número índice tiene la India?

Sr. Rojas (N.). — Esos dos países de régimen totalitario también inventaron la política de los salarios para engañar a los trabajadores. En nuestro país, puede afirmarse que actualmente nos encontramos en la misma situación de vida de acuerdo a los datos que he leído...

Sr. Orozco. — La pregunta que le ha sido formulada no la ha respondido, señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — No es necesario el dato de ningún cuadro estadístico para saber que la vida, en estos últimos años, ha encarecido en forma dramática para la clase trabajadora, a pesar del aumento de salarios. Basta preguntar en cada casa lo que se gasta. Los señores diputados obreros deben saberlo, a pesar de la elevada dieta que perciben ahora, porque han de tener por lo menos la referencia de su ex compañeros.

Sr. de la Torre. — Actuales compañeros.

Sr. Orozco. — Antes había dieta y coima.

Sr. Presidente (Guardo). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Rojas (N.). — Quiero agregar ahora, brevemente por la premura de tiempo, que en materia de salarios a que se refieren muchos de estos decretos leyes, y en especial al 33.302, hay diversos procedimientos que la legislación conoce. Así, está el sistema de la junta de salarios para cada establecimiento o para cada gremio, separadamente; el legal, por el cual la ley fija matemáticamente el salario, y está el sistema de la comisión o del instituto permanente, que, de acuerdo con la técnica, con el estudio del problema social, y especialmente en relación con el costo de la vida, regula el monto de los salarios. Este tercer procedimiento, que es el mejor y el que propicia la Comisión de Legislación del Trabajo, es el del decreto 33.302.

En este asunto hay mucho que decir, y si nos permiten hablar en detalle sobre esta ley de salario mínimo, ampliaremos los puntos de vista.

En un libro que acabo de publicar, *El hambre*, he estudiado los aspectos sociales del problema del hambre y de la miseria en relación con los salarios.

En él he expuesto lo que ya, con menos detalle, tengo concretado en un proyecto de salario mínimo, que ha sido uno de los elementos de juicio que tuvo en cuenta la comisión respectiva. En este libro he expuesto, con una expresión bien significativa, un aspecto al que en general no se aludía y que llamo el fundamento biológico del salario mínimo. Se habla de justicia social, de justicia obrera, de legis-

lación; yo he ido a la raíz biológica de este problema.

He buscado en las estadísticas —que no voy a leer, pero que reproduzco en este libro— cómo el aspecto de la miseria ha influido en el desarrollo físico e intelectual de la población en todos los países del mundo, porque éste no es un problema exclusivamente argentino.

He tomado datos de un autor inglés, Boyd Orr, que ha publicado un libro en que demuestra la influencia en el desarrollo de los niños en relación directa con el monto de los salarios. He tomado los datos de mortalidad en Alemania, en Estados Unidos; los de una interesantísima y completa encuesta —una de las más completas—, realizada por el ministerio respectivo en Chile y publicada en 1936, respecto al salario, al desarrollo físico y a la inteligencia de los menores.

He tomado datos relativos a la Argentina, especialmente de un profesor ya fallecido, Dezeo, sobre la población escolar, en tres categorías: en relación con la situación económica, la talla y el peso. He comparado, también, estadísticas de las colonias de vacaciones, de algunos clubes deportivos y de escuelas de la Capital, para demostrar cómo el salario influye sobre el desarrollo físico de los niños. Incluso he tomado datos de un dispensario de lactantes sobre la mortalidad y su relación matemática con el monto de los salarios.

He tomado, asimismo, los datos del Instituto de la Nutrición, que dirigía el profesor Escudero, quien, con el doctor Rothman, publicó en 1938 y 1939 estadísticas llenas de interés y de aplicación posible para los legisladores, respecto al estado de salud, a la alimentación y a las entradas de la población obrera de la Capital.

No voy a leer todas estas estadísticas, pero es que con ellas damos los fundamentos médicos, diré, de este aspecto de la legislación obrera, que no sólo se refiere a salarios.

Ahora hemos de abordar el problema del decreto 33.302 y el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, que lleva el número 116. Con el señor diputado Argaña no estamos de acuerdo: la minoría de la Comisión apoya el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo. Hace algunos días, aludimos a este punto con motivo de la moción del señor diputado Díaz, por Santa Fe.

No puedo considerar todo el problema, pero invito a los señores diputados, y en especial a los que se dicen representantes directos de la clase trabajadora...

Sr. Orozco. — Llámenos agitadores profesionales.

Sr. Rojas (N.). — Aquí todos somos representantes del pueblo. A nosotros también nos han votado obreros.

Sr. Argaña. — Estamos acostumbrados a que el distinguido profesor nos trate, sistemáticamente, en forma despectiva.

Sr. Rojas (N.). — El señor diputado me ha oído ya una vez rebatirle eso mismo, que yo diría que es una ingenuidad, si no creyera que es una picardía, porque el señor diputado Argaña, que parece que se empeñara con sus nervios a recordarme mi especialidad...

Sr. Argaña. — No tengo interés en probar su experiencia profesional.

Sr. Rojas (N.). — Lo podré ver fuera de la Cámara. (Risas.)

El señor diputado por la Capital suele hacer ese mismo argumento que ya no convence ni a sus mismos correligionarios. Esta misma modesta exposición que estoy haciendo le prueba —si es sincero— con qué seriedad abordo estos problemas de legislación en beneficio de la clase obrera.

A mí me duele que se use como arma política un recurso tan gastado. Decir que no miramos sino desde arriba a la representación obrera, es sencillamente una calumnia.

Yo siento, como todos los componentes de mi sector, simpatía afectiva y patriótica, que no política, por la labor de los diputados que han sido obreros, y que han dejado de serlo para convertirse en diputados.

Sr. de la Torre. — Continuamos siendo obreros.

Sr. Rojas (N.). — Continuarán siendo obreros, cuando dejen de ser diputados.

Declaro que a mí y a todos nosotros nos place oír a los diputados obreros. Naturalmente que hacemos algunas diferencias psicológicas, porque hay diputados obreros que no nos tratan mal, que no nos tratan con desprecio. Hay diputados obreros que se sienten enciclopedias, y hay diputados obreros que tratan llanamente las cuestiones de legislación; que no se creen superiores a nosotros.

Todos somos legisladores por igual, y somos todos por igual trabajadores. En este país nos conocemos muy bien. ¡Cómo han de creer eso de diputados radicales que hemos vivido como hombres y como partido en contacto con el pueblo, con ese pueblo que si les ha dado a ustedes una mayoría, quién sabe si no empieza ya a reflexionar!...

Sr. Vischi. — Nos la puede quitar mañana, como se la ha quitado a ustedes.

Sr. Rojas (N.). — Es seguro que la política ha de dar un vuelco, por los excesos del Poder Ejecutivo y de esta mayoría, que le responde sin condiciones.

Sr. Díaz. — Conscientemente. Tenga la seguridad el señor diputado.

Sr. Rojas (N.). — Uno de los errores —lo he señalado al principio de mi exposición— que cometen los diputados de la mayoría, es creer que la historia empieza con ellos y que estará

siempre con ellos. Son éstos los factores psicológicos y políticos que han de perder a esa mayoría y al gobierno al cual sirve.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego a los señores diputados que no interrumpan.

Sr. Rojas (N.). — Quiero terminar, señor presidente.

El decreto 33.302 entró a la Comisión de Legislación del Trabajo en virtud de un proyecto del señor diputado Argaña. La comisión de Legislación del Trabajo tenía a estudio el asunto sobre la base de todos los antecedentes parlamentarios y del proyecto que el diputado que habla presentó al comienzo de este año, que, en lo fundamental, reproduce el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo del año 1942, a la que pertenecía. El decreto 33.302 se ha inspirado, en lo fundamental, en ese despacho del año 1942, y el propio señor ministro de Hacienda, que ha sido uno de los autores, lo ha declarado y reconocido así en la comisión. Sobre este asunto hay tanta legislación, existen tantos antecedentes parlamentarios, que es una ingenuidad pretender que alguien, hombre o institución, sea el único padre de la criatura.

En el despacho que hemos hecho en la Comisión de Legislación del Trabajo, hemos aceptado el decreto 33.302 sin corregir una sola de las ventajas o de los beneficios que ese decreto concede, salvo uno, que ya analizaremos en el momento oportuno y que es en beneficio de un solo gremio. En todo lo demás, el decreto queda como estaba. En cambio, hemos aumentado sus beneficios.

Hemos corregido su texto, hemos suprimido una enumeración que figura al comienzo y que es peligrosa.

Sr. Orozco. — Entonces, no se hacen como a máquina.

Sr. Rojas (N.). — Hemos establecido el salario vital y mínimo para las empresas de servicios públicos, es decir, para las empresas ferroviarias, de electricidad, transporte, telefónicas, y también para muchas empresas concesionarias de las provincias.

Hago notar a los señores diputados que nosotros queremos que la Cámara acepte y cumpla este decreto. El decreto 33.302 excluía a la CADE, como a todas las otras instituciones y sociedades.

Sr. Orozco. — No, señor diputado; está equivocado.

Sr. Rojas (N.). — Se ha hecho por un arreglo, no por el decreto. En el despacho proponemos, además, que se beneficien con esa ley los empleados del Estado, a quienes el presidente de la República dirigía hace pocos días la palabra en tono de salvador, pero de los

cuales se olvida, puesto que el decreto no protege ni a los empleados ni a los jornaleros del Estado. Los señores diputados obreros saben que el Estado realiza, respecto de sus jornaleros, explotaciones, tal vez, más inicuas que las empresas particulares. No lo pueden desmentir. ¿Cómo es posible que se resistan a conceder este beneficio que el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo propone? Proponemos, además, que se beneficien también del sueldo anual complementario los trabajadores de empresas privadas o mixtas de concesión de servicios públicos y, además, establecemos la escala de sueldo anual complementario en relación con el sueldo, hasta 800 pesos, para los empleados del Estado. ¿Por qué los empleados del Estado no han de recibir los beneficios que el Estado ha impuesto se otorgue a los trabajadores de empresas privadas?

El señor ministro de Hacienda concurrió a la Comisión de Legislación del Trabajo y, requerida su opinión, formuló algunas objeciones. Deliberamos, y el señor ministro aceptó el texto que la Comisión de Legislación del Trabajo ha propuesto en su despacho contenido en el orden del día 116 y que la mayoría de la Comisión de Decretos Leyes rechaza por medio de su dictamen y de la exposición que ha hecho el señor diputado por la Capital.

Hacemos, también, una serie de pequeñas modificaciones de ordenamiento y de técnica legislativa para mejorar ese decreto. La minoría del sector radical en la comisión propone que la Cámara apruebe el decreto 33.302 con las modificaciones introducidas por la Comisión de Legislación del Trabajo, que en nada afectan a la esencia del decreto, que lo mejoran extendiendo sus beneficios y que, por medio de un artículo transitorio, le da vigor hasta el momento de la promulgación de la nueva ley. Con eso se contempla el interés que exteriorizaba el señor diputado Argaña, respecto a los posibles pleitos que pueden presentarse porque hay patronos que no han cumplido.

Es posible que algún otro miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo, del sector de la mayoría —entiendo que su presidente, el señor diputado Curchod—, va a defender ese despacho en nombre de la comisión. Yo lo he hecho en nombre del sector radical. Queremos que el decreto 33.302 sea mejorado y convertido en ley de acuerdo a las normas que hemos enunciado, entre las cuales está también la antes mencionada de conciliación, de la necesidad de control central con la autonomía de las provincias en materia de comisiones y de salarios.

Señor presidente: el país está en una hora decisiva, hora larga que no es la del reloj sino la de la historia. Hay síntomas que nos inquietan porque advertimos el peligro cada vez más definido de una absorción centralizada en un poder o, lo que es peor, en un funcionario. Los

empleados públicos tienen un decreto que con mucho ruido y propaganda se dictó, que fijaba la estabilidad de los mismos, pero asistimos al drama de la persecución, de las exoneraciones, de las cesantías de funcionarios por el solo pecado de haber instado la vuelta a las normas insitucionales.

Sr. Presidente (Guardo). — Ha vencido el término de que dispone el señor diputado para su exposición.

Sr. Rojas (N.). — Dos minutos más y termino.

Asistimos a las cesantías en la universidad, que hemos de tratar uno de estos días nuevamente. Yo les afirmo a los señores diputados que uno de los asuntos que está teniendo más repercusión en América, es este atropello a las universidades y la cesantía de sus profesores más expectables, porque cada uno de esos profesores es hombre cuya obra científica es respetada en América. Yo recibo le confidencia de muchos profesores extranjeros que vienen a Buenos Aires y que se van amargados de ver lo que está sucediendo en el país con la universidad, incluso —sépanlo— delegados que vienen en misión oficial. Recibo también cartas de colegas de América, en que expresan la angustia de que la universidad argentina esté siendo avasallada en esta nueva forma de la iniquidad política.

Asistimos a la amenaza velada o directa a la prensa, asistimos a la censura en el teatro, asistimos a la censura en la radio, que es otra de las vergüenzas que el país soporta, porque hay actores que no pueden trabajar simplemente por reacciones de hostilidad de una persona vinculada al presidente de la República.

Sr. Presidente (Guardo). — Señor diputado: Está fuera de la cuestión, y ha vencido el término reglamentario.

Sr. Rojas (N.). — Termino, señor presidente.

Aquí se quiere organizar la economía dirigida, se quiere organizar la cultura dirigida, se quiere organizar —ya está organizado— el Parlamento dirigido. Nosotros estamos aquí para cumplir con nuestro deber porque, repito, esta es una hora de la historia, no de la política.

Sr. de la Torre. — Es hora de liquidación.

Sr. Rojas (N.). — No es la política la que nos preocupa...

Sr. de la Torre. — Eso es: la liquidación.

Sr. Rojas (N.). — ...nos preocupa la historia argentina que pretenden deformar los hombres que antes de estar en el gobierno eran reconocidamente totalitarios. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Orozco. — Conste que no me contestó la pregunta.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Albrieu. — Señor presidente: Es realmente difícil iniciar un informe sobre legislación del trabajo, después que el señor diputado Rojas nos ha dejado este ambiente pesado y tétrico, como si la sombra de Boris Karloff hubiera pasado por aquí, infundiéndonos un pavor mayúsculo. (*Risas.*) Pero se me antoja que esta plática admonitoria de don Nerio, es algo así como el canto del cisne de una casta universitaria que ya se va. (*Risas.*)

Sr. Rojas (N.). — ¿Me permite, señor diputado?

Una de las cosas que apenas más en estos momentos en el país, no es tanto el abuso de la fuerza, sino la insensibilidad de los hombres que por solidaridad política toman a broma lo que es tan serio. El señor diputado, que generalmente es digno del aplauso y de la estimación que le dispensamos, acaba de decir una cosa penosa: que yo hablo como un universitario que está por terminar en su cátedra. Sí, señor presidente; y lo he dicho en público el otro día; estoy dispuesto a irme de la universidad porque me daría vergüenza trabajar en ese ambiente de cuartel. Yo le digo al señor diputado, que es universitario, que no debe hablar en ese tono sobre cosas tan serias. (*Aplausos.*)

Sr. Albrieu. — Hemos escuchado el segundo episodio de la serie.

Ya dije otra vez algo sobre los profesores que se fueron en el año 1918. Una vez los echaron ellos, porque los otros dejaron de ser actuales; y hoy les toca a ellos, que dejaron de ser actuales con sus ideas...

Sr. Rojas (N.). — Ya discutiremos eso, cuando se trate la ley universitaria...

Sr. Albrieu. — En cualquier momento.

Sr. Rojas (N.). — ...y le demostraré que el señor diputado está totalmente equivocado.

Lo del año 1918 fué diferente; no se separó en masa.

Sr. Albrieu. — Voy a admitir interrupciones, pero no en forma de discursos.

Sr. Rojas (N.). — No lo voy a interrumpir más, aunque me provoque el señor diputado.

Sr. Albrieu. — Queremos encontrar un ritmo constitucional en los decretos emanados del gobierno de facto. Creo necesario incorporar al orden jurídico de nuestro país ese otro orden jurídico extraconstitucional creado por los gobiernos de facto y lo creo, más que por razones jurídicas, por el precedente marcado en nuestro país en el año 1932.

El gobierno de facto debe la razón de su existencia a un acto voluntario extralegal y extraconstitucional de usurpación. La fuente del gobierno como poder público escapa a los límites del orden preconstituido, escapa al articulado de nuestra Constitución. El poder público, con su forma ostensible que es el go-

bierno, representa al Estado organizado y se pronuncia con la norma que exige acatamiento cuando tiene la potestad para hacerla cumplir que, en los gobiernos constitucionales, se llama la ley. El gobierno extraconstitucional carece de la potestad de dictar leyes de acuerdo con la Constitución, por el hecho mismo que no es constitucional. El gobierno del 4 de junio de 1943 dictó un decreto haciéndose cargo del gobierno. Es la primera norma extraconstitucional. Le vamos a llamar —porque algo hay que llamarle— ley a esa norma. El gobierno de facto cuenta con los medios necesarios para mantener el orden y su propia potestad. Como no puede dejar al Estado sin organización y sin orden jurídico que actualice las necesidades de la voluntad general, dicta los decretos leyes. La Corte Suprema de Justicia reconoce al gobierno de facto; no efectúa el reconocimiento como poder constitucional, puesto que ya era meramente un tribunal de justicia, porque si fuera poder político de la Constitución debiera haberse hecho cargo del gobierno de la Nación en substitución del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que habían sido abrogados, hechos desaparecer, por el gobierno revolucionario.

El orden jurídico creado por la revolución tiene existencia tangible —real, por sí mismo—, y no necesita —y carece de ella— de la potestad de un gobierno constitucional para su existencia. Desconocer la existencia de ese orden jurídico era como desconocer la existencia del gobierno de facto. Y el gobierno de facto ha existido de tal manera que no pueden ir a buscar colisiones ni armonías con la Constitución en algo que no es constitucional.

Sr. Zara. — Por mucho menos han enjuiciado a la Corte.

Sr. Albrieu. — Esas disposiciones dadas por el gobierno defacto, que tienen existencia por sí mismas, y que han entrado en la sangre y en la carne de nuestra organización jurídica, porque existen y tienen realidad por sí mismas, sólo necesitan para su existencia del beneplácito, la aquiescencia del pueblo. Nosotros no podemos entrar, entonces, a reconocer o desconocer la constitucionalidad de esos decretos leyes. Me refiero a esto, porque se han hecho objeciones de carácter constitucional a estos decretos leyes.

En cuanto a las delegaciones regionales, este decreto es absolutamente inconstitucional en el artículo respectivo, y toca a este Parlamento reformarlo para lo sucesivo en la parte pertinente. Estoy en eso de acuerdo en lo sustentado por algunos señores diputados de la oposición; pero no puedo estar nunca de acuerdo cuando llegamos al capítulo especial de cargos sobre la autonomía de las provincias, porque ésta se ha estado desconociendo y violando por todos los gobiernos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) Por los go-

biernos que representaba el señor diputado Pastor...

Sr. Pastor. — Yo no representaba a ningún gobierno.

Sr. Albrieu. — ... que han intervenido en las provincias y arrasado su autonomía cuantas veces se les ha dado en gana, y por los gobiernos radicales, que han formado el unicato más tremendo en el país y también han arrasado las autonomías provinciales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*) Y sólo la salvó de la hecatombe jurídica la personalidad ética de un solo hombre: Hipólito Yrigoyen.

Sr. Zara. — Está renunciando a su pasado.

Sr. Pastor. — Hay un pequeño error...

Sr. Benítez. — Cualquiera sea el pasado, el hecho es incuestionable.

Sr. Pastor. — Yo no he representado a ningún gobierno. He representado al pueblo de mi provincia.

Sr. Albrieu. — Al gobierno que hizo fraude; y así vino. (*Risas.*)

El federalismo, como ha dicho muy bien el señor diputado Frondizi, siempre se ha sacado a relucir cuando se trata de mejorar a la clase trabajadora; pero no se han acordado nunca del federalismo cuando a las provincias se le han sacado sus recursos por medio del impuesto a los réditos, de la unificación de impuestos internos, etcétera.

Sr. Zara. — Hemos protestado. Hemos defendido la autonomía de las provincias, sin claudicaciones.

Sr. Albrieu. — ¿De dónde, de qué disposición constitucional puede decirse con certeza que han salido las pocas leyes sociales que existen en el orden nacional? Recordemos que el gobierno central tiene sólo aquellas potestades delegadas expresamente por las provincias y en ninguna parte, de ninguna frase, salvo de la del «bienestar general» de que habla el Preámbulo, pudo haberse sacado que se podía hacer en el orden nacional las leyes sociales, como también las referentes a sanidad vegetal y ganadera y otras leyes del mismo carácter. Sin embargo se han dictado y se han incorporado algunas al Código Civil. Pero lo que ha dicho el señor diputado Pastor de que pertenecen al Código Civil, es un concepto arcaico. Debe haber un solo Estado argentino para el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Esa es la única razón. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) No porque lo permita la Constitución. En ninguna parte ella lo permite. Nuestro Código Civil, con disposiciones anteriores al derecho de trabajo, habla de la locación de servicios, y en uno de sus artículos se expresa que las autoridades municipales fijarán los salarios de los dependientes y domésticos.

¿Por qué, entonces, se grita contra el gobierno de la Nación o contra el Congreso, que está

tratando leyes sociales? ¿Por qué se critica ahora de que vamos a dictar leyes sociales para las provincias...

Sr. Pastor. — ¿Me permite una aclaración?

El señor diputado me ha hecho decir una cosa que yo no he expuesto. Yo he dicho que acepto que la ley se dicte con carácter nacional; que lo que no acepto es que las autoridades de aplicación sean nacionales.

Sr. Albrieu. — Nos habló del Código Civil y nos habló de las leyes provinciales. Se nos habló también de que el gobierno central habría exigido a los trabajadores, para lograr algunas conquistas, la renuncia de derechos y libertades y de que esos gremios van abiertamente hacia el corporativismo.

Sr. Frondizi. — Los gremios no, señor diputado; se pretende llevar al país al corporativismo, que es peor.

Sr. Albrieu. — Creo sinceramente que es hacer poco honor, tener poco respeto a la clase trabajadora del país que ha acompañado a este movimiento el 24 de febrero, que ha dado validez a todos los actos anteriores, y lo ha hecho porque luchó por su independencia. Desde ahí parte la importancia de la clase obrera, desconocida por el culteranismo de la Capital, luego seguido por el culteranismo de las universidades; esa clase cuya raigambre está en la historia misma de la patria, sostengo que jamás podrá ser tildada de nazifascista. No debemos olvidar que la historia de esas provincias que quieren defender los señores diputados ha sido hecha por caudillos que hoy ya no tienen nombre. Entre los que realmente defendieron las autoridades de las autonomías provinciales fueron el Chacho y Quiroga, y al primero se lo decapitó en nombre de la Constitución. No podemos olvidar que la historia de esas provincias fué hecha por manos de uñas negras y regada con lágrimas de rancho. Esa es la verdad, y nuestra clase trabajadora, heredera de esa simiente, no podrá ser nunca acusada, dentro ni fuera del Parlamento argentino, sin que proteste airadamente, de nazifascista. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. López Serrot. — Nazifascista por parte de los conductores.

Sr. Vischi. — También a los radicales los llamaban mazorqueros.

Sr. López Serrot. — Sería algún infeliz el que ha dicho eso de los radicales.

Sr. Albrieu. — Los conductores sociales son como esas cumbres donde llega el sol, primero que al valle. La verdad llega primero a los conductores que a la masa. De modo que si se pretende agravar al conductor, se agravia a la masa que lo sigue. Para mí eso es inadmisibles y protesto.

Se ha dicho que la Secretaría de Trabajo y Previsión está sembrando odios, odios ostensi-

bles porque están en las altas esferas de la gente de la élite social y en los grandes círculos de industriales y comerciantes. Pero antes, cuando se sembraban odios mediante bajos salarios y sufrimientos de toda clase, e injusticias de toda forma, entonces no era ostensible, porque a la capa inferior de la sociedad no la querían ver ni sentir. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Se dijo: «Que hay que legislar para todo el país y no para el sector oficialista.» Sin tantos cálculos, sin tanto estudio y sin tantas estadísticas, estos decretos leyes han beneficiado a toda la clase trabajadora del país y la seguirán beneficiando. En prueba de ello tengo en mi poder una nota firmada por dirigentes de gremios de Córdoba, que no son casualmente de los que nos acompañaron en la pasada campaña electoral, en la cual solicitan la sanción de estos decretos leyes. Pido que esta comunicación sea insertada en el Diario de Sesiones.

Se ha hablado de gremios dirigidos. Sí, señor presidente; ha habido dos clases de gremios dirigidos; unos —si queremos reconocerlo— estaban dirigidos por hombres peronistas, y otros por la dirección máxima de la Unión Democrática. Unos estaban bien dirigidos, y otros mal. Y digo así, porque unos ganaron la elección y otros la perdieron.

Sr. Frondizi. — Me imagino que los gremios no le van a agradecer eso.

Sr. Albrieu. — Me lo agradezcan o no, señalo hechos.

Se ha dicho que parece que nosotros hubiéramos venido a descubrir la legislación social. Es inexacto. Lo que hemos hecho es dar forma rápida, es actualizar principios que no se concretaban en leyes no obstante que eran reclamadas desde muchos años atrás.

No hemos descubierto nada, como nada descubrió el partido radical, ni el partido conservador, ni el socialismo, ni el laborismo inglés, ni el comunismo. En nuestro país ya había leyes sociales en 1780, cuando por una ordenanza real se estableció la jornada de ocho horas.

No hemos descubierto nada nosotros, ni ningún otro partido. Pero así como la Unión Cívica Radical polarizó la voluntad de los gremios en un momento determinado, también es verdad que hoy por efecto de representar las necesidades y soluciones de la hora y cumpliendo la realidad actual, el peronismo polariza este movimiento netamente argentino. Eso es lo que les duele, pero nosotros no tenemos la culpa de haber visto más allá.

Se ha dicho que constitucionalmente no puede existir la Secretaría de Trabajo como ministerio. La Constitución únicamente establece un número de ministros, y dispone como funciones esenciales de los ministros la de refrendar los actos del Poder Ejecutivo y la de representarlo

en el Parlamento. ¿Pero hay algo que se oponga a que el Poder Ejecutivo cree un organismo, con el nombre que sea, siempre que se cumplan las exigencias de la Constitución? Quisiera ver esa disposición.

Sr. Ravignani. — Dentro de cada ministerio.

Sr. Albrieu. — En ninguna parte se establece que las dependencias deben estar bajo las órdenes de los ministros del Poder Ejecutivo. Pueden estar bajo la dependencia directa del presidente, siempre que se encomiende a alguno de los ministros refrendar los actos o los decretos que correspondan a esa secretaría, y que la representación legislativa del Poder Ejecutivo en el Congreso sea ejercida por uno de los ocho ministros que señala la Constitución.

Sr. López Serrot. — Que tengan categoría de ministros.

Sr. Albrieu. — Es lo de menos.

Los sectores políticos siempre se acuerdan de la Constitución y de las autonomías cuando están en la oposición (*risas*), y se olvidan de ellas cuando están en el gobierno.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Albrieu. — El representante del sector de la Unión Cívica Radical, habló en tono tremendo del decreto 21.877 que fija multas para quienes no concurren a suministrar datos. Impugnó este decreto por ser de carácter totalitario o poco menos. Le debo advertir que en Córdoba, durante el gobierno del doctor Sabatini, se dictó la ley 3.804 que también establece multas a las personas o patronos que se nieguen a suministrar datos requeridos por el Departamento de Trabajo, o los suministren con falsedad; y la compulsa de las personas que deben responder por alguna reclamación, y hasta establece que pueden ser clausuradas casas de comercio cuando sean notoriamente infractoras de las leyes sociales.

Sr. Rojas (N.). — ¿Y el artículo 2º de ese decreto?

Sr. Albrieu. — Las penas que establece para los funcionarios, no son sino las que el gobierno puede aplicar: suspensión, cesantías...

Sr. Rojas (N.). — Esas no son penas. Lo sabe el señor diputado, que es abogado. El decreto dice: las penas que el Poder Ejecutivo estime más convenientes.

Sr. Albrieu. — Se refiere a las penas que puede imponer el Poder Ejecutivo a sus subordinados. Entender que puede imponer pena de reclusión o prisión, es inaceptable. Aun con el criterio jurídico más raro, nadie puede interpretarlo así.

Sr. Rojas (N.). — Con este gobierno, sí.

Sr. Albrieu. — En cuanto a las delegaciones regionales, sin la potestad jurisdiccional de aplicación de las leyes del trabajo —vale decir sin

que tengan el poder de policía, que de acuerdo con nuestro régimen constitucional, corresponde a las provincias— pueden existir con fines de estudio.

Sr. Ravignani. — ¡Ah!

Sr. Albrieu. — Pueden existir con muchas finalidades.

Sr. Ravignani. — El diputado Reyes dijo que era un estudio especial lo que pasó en Berisso.

Sr. Albrieu. — El diputado Reyes es una cabeza de puente de la oposición en nuestro sector.

Esas funciones de estudio no creo que en ninguna forma lesionen la Constitución nacional.

Sr. Frondizi. — ¿Así que las delegaciones tienen solamente funciones de estudio?

Sr. Ravignani. — Ahora se explica. Como las comisiones son de estudio, exoneran profesores.

Sr. Albrieu. — Si sigue hablando el señor diputado Ravignani, me voy a explicar yo también por qué exoneran profesores.

Por una imprevisión de la comisión no se ha incluido en el texto del orden del día que tenemos en las bancas, un artículo 6º propuesto por la mayoría de la comisión, que dice lo siguiente: «Ratifican todas las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo modificando la estructura de la Secretaría de Trabajo y Previsión y se le faculta para dictar un reglamento que organice y delimite sus funciones de acuerdo a las disposiciones constitucionales sobre autonomías provinciales hasta tanto se sancione la ley orgánica respectiva.» Con lo cual creo que no habrá ya ninguna...

Sr. Frondizi. — Deseo que quede constancia de que ese artículo no fué propuesto en la comisión.

Sr. Albrieu. — Muchas de las reformas que ha propuesto en el recinto el señor diputado Frondizi no han sido propuestas en la comisión; digo muchas, por no decir la totalidad.

No creo, pues, señor presidente, que exista ya ningún inconveniente de orden constitucional, ni que con este decreto se lesionen las autonomías provinciales.

Sr. Pastor. — En vez de decir eso con tanto énfasis, explíquenos por qué figura todavía en este despacho un artículo que reglamenta el funcionamiento de las intervenciones federales en las provincias.

Sr. Albrieu. — Es muy largo, señor diputado.

Sr. Pastor. — Se han olvidado de sacarlo, como si todavía las provincias siguieran intervinidas.

Sr. Albrieu. — ¿Y cuando durante el gobierno de ustedes nos deselegían un gobernador y nos ponían otro?

—El señor diputado Zara pronuncia unas palabras que no se alcanzan a percibir.

Sr. Albrieu. — No lo vamos a hacer de ninguna manera. La prueba está en que queremos corregir lo que está mal.

Sr. Pastor. — ¡Menos mal!

Sr. Albrieu. — En representación de mi bloque pido, pues, a la Honorable Cámara, sancione el despacho que figura en el orden del día. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Guardo). — Si hay asentimiento, se hará en el Diario de Sesiones la inserción de la publicación pedida por el señor diputado.

—Asentimiento (1).

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Lasciar. — Estamos considerando una cantidad de leyes que, indiscutiblemente, han de transformar la fisonomía social del país al depositar en custodia de los trabajadores una cantidad de instrumentos legales que han de permitirles un mejor desenvolvimiento en su lucha frente al capital.

Las nuevas doctrinas del mundo, el ritmo agigantado de la técnica, la aplicación del mecanismo en los medios de producción, han traído, sin duda alguna, una explotación más inicua de la que sufrieron en otras épocas los trabajadores. Todo ello motiva, aun en momentos en que se aprecia y se reciben del propio mecanismo algunos adelantos, que surge en el sentimiento de los trabajadores una mayor rebelión, porque nunca como hoy, debido a su capacitación cultural, han podido apreciar la desigualdad del sistema económico en que vivimos.

Las conclusiones a que arribó la ciencia sobre la fatiga, obligan a sostener el principio de que dictar leyes que reduzcan las jornadas largas y extenuadoras es un deber de humanidad, es una sabia concepción política y económica, porque permiten en el desenvolvimiento de las funciones de los trabajadores, un mejor aprovechamiento de su labor, sin perjuicio del organismo.

Es evidente que no se trae nada nuevo en la vida social de la Nación. No se ha logrado ningún descubrimiento con los leyes que estamos considerando. León XIII, en su encíclica *Rerum novarum*, dice que «en defensa de los bienes corporales y eternos, lo primero que hay que hacer es librar a los obreros de la crueldad de los hombres codiciosos, que a fin de aumentar sus propias ganancias abusan sin moderación de las personas como si no fueran tales, haciendo que se afecte el alma y sucumba el cuerpo a la fatiga». Y Felipe II, el 20 de diciembre de 1593, dice: «Todos los obreros trabajarán ocho horas al día, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde.»

(1) Véase la inserción en el apéndice de esta sesión.

Como se ve, señor presidente, no es una innovación ni un descubrimiento que surjan en nuestro país leyes obreras que amparen al trabajador y que le permitan un mejor desenvolvimiento en sus ocupaciones. Dos siglos antes de la revolución de 1789, que fué la cuna del movimiento reivindicatorio de los trabajadores, a través de principios puestos en práctica, la injusta distribución entre el capital y el trabajo, existían antecedentes avanzados en la materia. Y por boca del gran industrial Ricardo Owen, en 1817, se reclamaba la jornada de ocho horas, que se creía que era una idea utópica y que originó la limitación sancionada en 1856.

Es indispensable que tengamos en cuenta que la presentación de estas leyes, que han de transformar la fisonomía social de nuestro país, no es una innovación ni es un descubrimiento. Es indiscutible también, que no bastará elaborar leyes si no existe un sindicalismo libre que las defienda, un sindicalismo sin tutela, cual es el sindicalismo argentino, que las defienda y las haga respetar.

Es indispensable también tener presente el concepto de lucha del gremialismo argentino, que no actúa en la acción directa porque entiende que ella es perturbadora y tiene consecuencias funestas la mayoría de las veces. Si hemos aceptado el temperamento del arbitraje, es indispensable que aceptemos también que un órgano estatal sea el órgano regulador que controle el fiel cumplimiento de las leyes y dé, en los diferendos entre capital y trabajo, las soluciones que requiere el desenvolvimiento progresista del país.

No es que exista un criterio anticapitalista, porque entendemos cuán grande ha sido el beneficio que ha dado al país la vieja oligarquía argentina que concibió el germen emancipador que creó nuestra nacionalidad. Sabemos perfectamente en nuestro país cuáles son la esencia, el pensamiento y las ideas de la clase trabajadora y que ella empuñó las tacuaras y las lanzas dirigida por la vieja oligarquía argentina que ansiaba la libertad de esta tierra. Tenemos y sostenemos en esta materia el concepto reiteradamente expresado por el excelentísimo señor presidente de la Nación, cuando ha dicho en innumerables ocasiones: que en estas benditas tierras de la patria, no haya ricos inmensamente ricos, ni pueblos inmensamente pobres.

Se ha afirmado que los hombres que nos honramos en sentarnos en este Parlamento que venimos de la militancia gremial —voy a recalcar militancia que no significa ser dirigentes— nos consideramos intocables en las críticas. Es verdad que los hombres que hemos estado en las rudas tareas del trabajo, no podemos hacer extensas incursiones en el campo de la doctrina ni el derecho constitucional, pero también es exacto que no damos ni pedimos tolerancia para los excesos. En esta síntesis apre-

tada de nuestros argumentos y de nuestras ideas, las exponemos con toda claridad, con un profundo sentimiento argentino y un gran sabor a patria en todas nuestras reflexiones.

Todas esas ventajas que nos ha dado indiscutiblemente el progreso y a las que hace un instante se ha referido un señor diputado, las hemos apreciado debidamente. Hemos apreciado las ventajas que nos ha dado el progreso: los teléfonos, la luz eléctrica, los ferrocarriles, las grandes industrias, que con sus inventos nos hacen la vida un poco más llevadera al aprovechar los adelantos de la ciencia. Pero hemos de tener presente que todas esas ventajas son la obra fecunda y abnegada de los trabajadores que, silenciosamente, en las fábricas y en los talleres componen el mecanismo de ese progreso de que todos disfrutamos.

Sostienen que la Secretaría no conforma las reglas jurídicas que defienden las autonomías provinciales. Yo no he de meterme en un asunto que desconozco, pero sí he de señalar un aspecto interesante de este problema. Entiendo que es indispensable la uniformidad de las leyes obreras en todo el país, uniformidad que no existía hasta hace muy poco tiempo, en que apareció el decreto 33.302. Hasta entonces los trabajadores argentinos de la avenida General Paz para adentro de Buenos Aires disfrutaban en las ramas de la industria las ventajas de la ley 11.729 que les concedía indemnización contra despidos o cesantías y los trabajadores que también eran argentinos, pero que vivían en la avenida General Paz para afuera, no se encontraban amparados por esa ley. Es indispensable entonces que la Secretaría de Trabajo y Previsión uniforme el sentido y la aplicación de las leyes en todo el país, con respecto a todos los trabajadores argentinos.

Deseo que estas leyes obreras largamente acariciadas por los trabajadores argentinos surjan como una realidad de este movimiento, en el cual hemos depositado todas vuestras mayores esperanzas e ilusiones. Yo creo ver en estos instantes a mis camaradas, esperando ansiosamente, fervorosamente, que estas leyes se sancionen para lograr un amparo frente al avance de la clase capitalista, que jamás calma su voracidad, a costa del dolor y del sufrimiento de los trabajadores. Yo creo ver a los trabajadores argentinos esperando ansiosamente la aplicación de estas leyes. Por eso he de pedir en estos instantes que, deponiendo las posiciones particulares o políticas que podamos tener, con un profundo sentimiento argentino, con una grandeza de sentimientos que nunca ha estado ausente de la levadura espiritual que nos ha hecho como tales, votemos estas leyes porque son leyes que han de crear la grandeza de nuestra patria.

Muchos trabajadores han vivido en la miseria hasta hace poco tiempo y una buena cantidad

de ellos aun viven en esa condición. Mejorando los salarios y las condiciones de trato, fijando un aseguramiento en su labor, defendiendo la permanencia de ellos en el trabajo, hemos hecho obra de patria y hemos elevado la especie humana argentina que en la mayor remuneración ha de encontrar la mejor alimentación para que sus cuerpos sean sanos y viriles. Ahí reside la grandeza de nuestra Nación; ahí reside la grandeza de la patria. Que las fuentes de producción, que los talleres y fábricas vibren con entusiasmo ante el repiqueteo que harán sus obreros contentos y alegres porque el desenvolvimiento en la vida permite hacerla con más tranquilidad y más facilidad. Por eso les pido a los señores diputados que elevemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros anhelos generosos de superación argentina y votemos estas leyes que ansiosamente espera la clase trabajadora del país.

Nada más. (Aplausos.)

Sr. Sarmiento. — Hago moción de cerrar el debate, para que entremos a votar el despacho, en atención a lo avanzado de la hora.

Sr. Presidente (Guardo). — No hay más oradores anotados.

Se llamará para votar.

—Después de unos instantes:

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes.

—Resulta afirmativa de 77 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración en particular.

Sr. Argaña. — Pido la palabra.

Con respecto a la votación en sí, es criterio de la mayoría de la comisión que al votarse en particular el artículo 19 se vote ratificando con fuerza de ley todos los decretos contenidos en el proyecto, hasta la página 1907.

Considero necesario hacer, además, una salvedad, por la disparidad de disposiciones que en materia de salarios establecen algunos decretos relativos a diversas industrias y también en lo que puede afectar al futuro, o como una norma de carácter permanente, para que quede perfectamente estableciendo que los beneficios otorgados con anterioridad en materia de salarios en leyes, decretos o convenios de partes, en cuanto sean superiores a disposiciones ulteriores en industrias similares o actividades afines, no serán afectados ni modificados.

He presentado la redacción de ese agregado y espero que la Honorable Cámara ha de aceptarlo, en salvaguarda de los mayores derechos que se puedan haber acordado por esas leyes, decretos o convenios.

En cuanto a la forma de votación del orden del día 175, hago concretamente la indicación de que al votar el artículo 19 votemos los ciento veintitrés decretos contenidos en la página 1907, para luego entrar a considerar cada uno de los artículos que proponen modificaciones al mismo decreto.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a dar lectura del artículo 19.

Sr. Ravignani. — Vamos a objetar el procedimiento.

Sr. Frondizi. — Que se lea el artículo, pero pido la palabra para antes de la votación.

Sr. Benítez. — El artículo 19 contiene el texto de todos los decretos; podría suprimirse su lectura.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — Después de las exposiciones que han realizado los diputados de este sector, sería casi innecesario decir a la Cámara que nos vamos a oponer al procedimiento indicado por el señor diputado Argaña.

Deseamos que la sanción de estos decretos del poder de facto esté revestida de la seriedad jurídica que debe tener una ley del Congreso argentino. Si con una sola votación, la Cámara va a aprobar más de ciento veinte decretos, evidentemente la mayoría se va a limitar a dar un voto de confianza al poder de facto. Nosotros no podemos acampañarla en ningún voto de confianza de esa índole. En cambio, si la mayoría parlamentaria está dispuesta a estudiar los distintos decretos que contiene este despacho, vamos a proponer las modificaciones que sean necesarias para salvar deficiencias de orden jurídico, como también las de orden económico y social. Si la mayoría, imponiendo su número, adopta el criterio sostenido por el señor miembro informante de la mayoría de la comisión, nosotros declinamos toda responsabilidad en cuanto a los errores que contienen estos decretos. Queremos que quede perfectamente establecido que no se contemplan reformas que son imprescindibles y que han solicitado muchos de los trabajadores interesados, en virtud de que el voto de la mayoría no permite que así se haga.

El señor diputado Argaña admite la consideración en particular de los artículos 2º al 5º del despacho de la comisión, pero ellos se refieren sólo a algunos de los decretos que están a consideración de la Cámara. Evidentemente, no se van a poder contemplar situaciones de hecho mal resueltas ni tampoco se podrá aclarar cuestiones como las que han sido planteadas en el debate en general.

Que quede, pues, establecido, que si la mayoría acompaña con su voto el criterio del señor diputado, esos errores no serán imputables a los diputados de este sector.

Sr. Presidente (Guardo). — Corresponde resolver en primer término si se votará en la forma propuesta por el señor diputado por la Capital...

Sr. Curchod. — Pido la palabra.

Voy a proponer que el artículo 19 se vote por partes. Primero, hasta la página 1885, y desde allí en substitución del decreto 33.302, se incluya el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, a que se refiere el orden del día 116.

Al proponerlo en esta forma no es que yo esté con el pensamiento de la minoría. Estoy con la mayoría, que se pronunció por unanimidad en dicha comisión, elaborando el mencionado proyecto en base al presentado por los señores diputados Argaña, Pontieri y otros señores diputados del sector de la mayoría, y en base igualmente al proyecto de salario mínimo presentado por el señor diputado Nerio Rojas.

Está de más que me refiera en particular al despacho contenido en el orden del día 116, que ha sido perfectamente analizado por uno de los miembros de la comisión, el señor diputado Rojas, y también porque el orden del día 116 se encuentra ya en la carpeta de los señores diputados, donde está claramente establecido que el instituto fundamental a que se refiere el decreto 33.302, vale decir, la creación de la Comisión Nacional de Salarios, la forma de su funcionamiento y las demás disposiciones esenciales que fija dicho decreto, han sido respetadas en ese despacho del orden del día 116. Para ilustración de los señores diputados, la Comisión de Legislación del Trabajo ha hecho publicar un cuadro comparativo, que se encuentra sobre las bancas de los señores diputados, entre el decreto 33.302 y el orden del día 116. Una simple lectura de ese cuadro comparativo llevará al ánimo de los señores diputados la convicción de que se trata de la misma cosa, pero habiéndose desglosado la parte reglamentaria, que es impropio que se incluya en una ley de fondo.

Por otra parte, el decreto 33.302 ha sido mejorado, ha sido ampliado, se han dado normas de carácter general evitándose las enumeraciones que generalmente traen como consecuencia que algunos gremios o actividades queden sin estar amparados por el decreto. Los beneficios se extienden a los trabajadores del Estado, y sobre todo, se da una mejor estructura a la institución fundamental que se establece en el decreto, que es la Comisión Nacional de Salarios.

Quiero hacer presente a los señores diputados que el decreto 33.302 no ha sido puesto en práctica en esa parte fundamental y que si esperamos la sanción del orden del día 116 para tratar de mejorar las disposiciones de aquél, vamos a retardar que se incorpore a la legis-

lación positiva un instituto de la importancia que ya destacaron otros legisladores.

Otro aspecto que quiero señalar es el relativo a la estabilidad. En el despacho contenido en el orden del día 116 se ha introducido una mejora capital. Tanto en el Código de Comercio, en cuanto al despido, como en el decreto 33.302, los patronos están autorizados para suspender a los empleados y obreros. De acuerdo con nuestro despacho, se pueden disponer las suspensiones, pero los patronos están obligados a pagar el 50 % de los sueldos o salarios con derecho a repetición si la causa es imputable al empleado. El propósito es, pues, que ningún trabajador pueda, por obra del patrono —que muchas veces ejerce esa facultad en forma abusiva— dejar de llevar a su casa lo necesario para su alimentación y la de su familia.

Por los fundamentos expuestos, me permito proponer que se vote en la forma que dejo establecida.

Sr. Zara. — El señor miembro informante de la mayoría, ha dicho que durante este período se han producido sanciones que modifican las disposiciones de los decretos y que, a su vez, quedan modificadas ahora con la aprobación de estos decretos. Entiendo, aunque no muy claramente, que ese punto habría sido motivo de una iniciativa que está depositada en Secretaría.

Sr. Presidente (Guardo). — Así es.

Sr. Zarr. — Entonces, quiero conocerla antes de que se vote.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Vendría como artículo 7º: «Los beneficios establecidos en los precedentes decretos, no se aplicarán cuando por decretos, leyes o convenios de partes de fecha anterior, se hubieren establecido beneficios superiores a aquéllos.»

Sr. Benítez. — Pido la palabra.

En nombre del bloque de la mayoría manifiesto que vamos a votar afirmativamente la proposición del señor diputado Argaña.

Entendemos, en primer término, que la minoría no ha presentado en su despacho ninguna modificación en particular de los decretos leyes que estamos tratando, de modo que no tenemos disidencia a considerar. En segundo término, consideramos que si entramos a analizar en detalle cada una de las disposiciones de los ciento veintitantos decretos, fácilmente insumiríamos trescientas sesiones, es decir, que tardaríamos dos o tres años para tratar los decretos leyes relativos al trabajo, únicamente.

Por otra parte, podemos invitar a los señores diputados de la oposición para que durante el receso tratemos de sistematizar todas las disposiciones sobre trabajo y buscar las soluciones que se reclamen.

Por estas razones, creemos que la única solución posible por práctica —lo práctico es lo posible— para dar una sanción definitiva, es aprobar el procedimiento que señala el diputado Argaña. Por eso, la mayoría lo apoya.

Sr. Pastor. — Pido la palabra.

Comprendo el argumento que hace el señor diputado Benítez, que es de hecho. Estamos frente a una situación difícil, sobre todo con eficacia...

Sr. Benítez. — Sobre todo cuando se es minoría y no se tiene la responsabilidad.

Sr. Pastor. — ... puede ocurrir que sea necesario suprimir alguna disposición.

Sr. Benítez. — En el despacho de la minoría no figura ninguna supresión a hacer...

Sr. Ravignani. — Un diputado puede proponerlo en el recinto.

Sr. Frondizi. — Nosotros adoptamos el procedimiento de trabajo que nos parece bien.

Sr. Pastor. — Las modificaciones o supresiones las puede proponer cualquier diputado; no es necesario que haya despacho en disidencia.

Puede ocurrir que haya opinión uniforme sobre una supresión. ¿Cómo es posible que se hable, como en el caso de las intervenciones?...

Sr. Benítez. — Hay que legalizar los actos cumplidos bajo el imperio de esas normas. Es necesaria la sanción, aun cuando no tenga aplicación en la hora presente.

Sr. Pastor. — Pero es que se trata de una disposición de carácter permanente.

No es una disposición que se aplique en el momento en que actuaron esas intervenciones.

Sr. Benítez. — Será mientras haya intervención.

Sr. Pastor. — ¿Y los artículos que el señor diputado Albrieu dijo que habría que suprimir?

Sr. Albrieu. — Va una modificación al final del artículo 6º.

Sr. Pastor. — Creo que la mejor forma será sancionar al final un artículo que diga que quedan suprimidas tales disposiciones de tal decreto, y tales otras de tal otro. Debemos hacer una sanción de carácter orgánico.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ferrer. — Solicitaría que se desglosara de este conjunto de decretos leyes, el que se refiere al decreto ley 22.212; régimen de trabajo para profesionales que prestan servicios permanentes en hospitales.

Este decreto tiene fallas fundamentales.

Es una aspiración colectiva del gremio médico mejorar de acuerdo con los deseos de las sociedades gremiales correspondientes.

El señor presidente de la Cámara, afín a esta actividad, convendrá en que la proposición que hago es correcta: desglosar el estatuto médico con el propósito de mejorarlo, y complacer al

gremio médico, que ansía un estatuto permanente y superado con respecto al decreto ley.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Evidentemente, después del sentido dado a los discursos de los señores diputados de la minoría, y dada la forma anormal en que venimos trabajando, abrigo muy pocas esperanzas de que podamos tener éxito en esta oportunidad. Sólo hoy, señor presidente, hemos tenido oportunidad de conocer el despacho de la comisión especial que apresuradamente hemos ido hojeando para encontrarnos cada vez con sorpresas mayores, que hubiesen sido suficientes para llamarnos a la cordura y hacer que, tal como lo han propuesto algunos de los diputados del sector de la minoría, podamos darle al país las leyes que necesita para evitar los inconvenientes posteriores que su aplicación acarreará.

Entre esas deficiencias que se advierten al pasar ligeramente las hojas de este voluminoso despacho, está la que se refiere a la ratificación del decreto 17.923 del año 1944, de reglamentación de la ley 12.821, referente al otorgamiento y prórroga de pensiones graciables. Todo en este decreto, desde sus considerandos, hace suponer, mejor dicho, da a entender, que él ha sido dictado con un propósito de reglamentación, mientras la Cámara de Diputados no se encontraba en funciones. Así dice, por ejemplo, en uno de sus considerandos el Poder Ejecutivo defacto, «que está dentro de sus atribuciones arbitrar los medios legales a falta de Congreso para poder cumplir los fines del Estado, entre los cuales se encuentra el deber de asistimiento en la medida de lo urgente y necesario limitándolo en el tiempo a la futura apreciación del próximo Poder Legislativo, como así también contemplar los beneficios vigentes», etcétera. De ser ratificado este decreto por la Honorable Cámara, se crearía un conflicto del que difícilmente podríamos salir con suerte. Según el mismo, el Poder Ejecutivo pasaría a ser revestido de la facultad de otorgar pensiones, que está expresamente determinada en el artículo 67 de la Constitución como inherente al Congreso de la Nación.

Sr. Benítez. — Está equivocado el señor diputado. En la misma forma, el Poder Ejecutivo defacto no podría haber realizado los actos de gobierno que corresponden al Poder Legislativo; pero lo ha hecho precisamente porque era gobierno defacto y no había Poder Legislativo. Nuestra ratificación de hoy no tendrá efecto para lo sucesivo. Es necesario regularizar con nuestra conformidad los pagos efectuados durante todo el tiempo del gobierno defacto incluidos en ese decreto.

Esto, que es tan sencillo, no sé cómo no se comprende.

Sr. Zanoni. — Está equivocado el señor diputado, seguramente porque no ha tenido tiempo de leer hasta el final el decreto 17.923, que en su artículo 34 dice: «Declárase en suspenso la ley 12.821» — cosa que va a ratificar ahora también el Congreso — «y toda otra disposición que se oponga al presente decreto ley».

Sr. Benítez. — Durante el tiempo del gobierno defacto ha estado en suspenso la ley. Lo que queremos es dar fuerza legislativa a la resolución del gobierno defacto.

Es nuestro criterio, equivocado o no.

Sr. Zará. — ¿Qué quedará después en vigencia?

Sr. Benítez. — Después, las nuevas pensiones las dará el Congreso. Por eso no se pagan.

Sr. Zará. — Es otra cosa. Esta es la ley permanente.

Sr. Benítez. — Ha estado suspendida durante ese periodo. Tenemos que ponerla en vigencia nuevamente.

Sr. Zanoni. — Si ahora al ratificar el decreto sigue en suspenso...

Sr. Benítez. — Los decretos quedarían tal como estaban hasta el día que nosotros derogamos esa disposición.

Sr. Zanoni. — Declaro francamente, señor presidente, que no entiendo.

Sr. Benítez. — Pediría que se vote la moción del señor diputado Argaña.

Sr. Zanoni. — Propondría que se desglosara del despacho que consideramos este decreto ley.

Sr. Benítez. — Habría que sacar todo.

Sr. Díaz. — Habría que sacar todo.

Sr. Benítez. — La mayoría de la comisión reitera su criterio de que de acuerdo con su despacho, deben votarse en bloque todos los decretos leyes incluidos en el artículo 19.

Pido que se vote en ese sentido la proposición del señor diputado Argaña acerca de la forma de votar.

Sr. Zanoni. — Formulo moción en el sentido de que se retire de este cuerpo el decreto 17.923, para considerarlo después.

Sr. Zará. — Pido la palabra.

El señor diputado Benítez, que generalmente encara con un criterio claro los diferentes asuntos que consideramos, en este momento está en una evidente confusión. Es la misma confusión que se ha producido en las oficinas de Trabajo y Previsión cuando los beneficiarios de la ley 12.821, o del decreto del Poder Ejecutivo que la derogó, se presentan a reclamar sus beneficios.

La ley 12.821 fué derogada por un decreto ley del Poder Ejecutivo que figura en este cuerpo que se está por sancionar en bloque. Si se sancionara tal como está ese decreto se aprobarían una cantidad de incongruencias, como la delegación inconstitucional de facultades legislativas, la disposición del artículo 10, que establece que todo proyecto o solicitud que verse sobre pensiones graciables o favores

pecuniarios deberá ser previamente informado por el señor auditor de guerra y marina, etcétera. En una repartición dependiente del Ministerio del Interior se van a recabar informes del auditor de guerra y marina.

No es exacto que las pensiones graciabiles van a seguir siendo acordadas separadamente por el Congreso en la forma que se hacía antes de la ley general, que originaba injusticias y corruptelas que esa ley trató de eliminar y que en alguna logró. Esta es una ley permanente que, en situaciones iguales, acuerda a los herederos pensiones graciabiles.

Sr. Argaña. — Esa disposición es para los casos en que el peticionante sea descendiente de militares, lo cual hace necesario consultar al auditor de guerra y marina.

Sr. Zara. — No, señor diputado; ésa no es la razón. Lo que pasó es que en el Congreso de la Nación se instaló una comisión con encargo especial de estudiar las pensiones graciabiles, la que se puso bajo la dirección del auditor de guerra y marina. Por ello, todos los asuntos de esa comisión especializada requerían dictamen del nombrado funcionario. Pero en la ley no debe incluirse una disposición de esa naturaleza.

Creo que es atinada la proposición de la minoría en el sentido de que se trate separadamente cada uno de los decretos. Para la mayor parte de ellos hay conformidad de los diferentes sectores de la Cámara. Se hará el debate únicamente a los efectos que el Congreso no dé una sanción que no pueda defenderse en el terreno lógico y jurídico. A eso tienden las proposiciones de los miembros de mi sector.

Sr. Benítez. — La proposición es puramente formal.

Sr. Presidente (Guardo). — ¿Acepta el señor diputado Argaña las indicaciones de los señores diputados por Buenos Aires y por Santiago del Estero, en el sentido de efectuar el desglose de los decretos indicados?

Sr. Argaña. — La comisión no acepta.

Quiero hacer una aclaración a propósito de las indicaciones relacionadas con los decretos 22.212/45 y 17.923/44. Al seno de la comisión llegaron en los últimos días —cuando ya aquélla estaba ordenando el despacho y apresurando los trabajos en la imprenta para presentarlo a los señores diputados con la mayor antelación posible—, observaciones de distinta naturaleza provenientes de algunas instituciones muy meritorias, pero que de haberlas entrado a considerar en detalle hubiera significado demorar quién sabe cuánto tiempo la ratificación de estos decretos.

De tal manera, que a reserva de todos los estudios que las comisiones especializadas a las que por una resolución ulterior de la Cámara pasarán todos los antecedentes, respecto a reformas sugeridas a estos decretos, con el objeto

de perfeccionarlos cuando ello sea posible, la comisión entiende indispensable, por la inquietud y la preocupación de grandes sectores de trabajadores del país, que estos decretos sean ratificados rápidamente, sobre todo los que han sido más discutidos en los últimos tiempos. Yo diría que es hasta un error político, aun para los diputados del sector opositor, demorar aunque sea un solo día la ratificación de estos decretos, porque los trabajadores desean que se conviertan de una buena vez en ley de la Nación, a fin de que no sea discutida su validez constitucional, porque hay derechos en potencia que todavía no han sido otorgados plenamente, porque de parte de algunos empleados se discute la validez de estos decretos y no han faltado abogados que se han prestado a patrocinar juicios, aunque al final los perderán, pero que de todas maneras demoran el goce de los beneficios y derechos que conceden estos decretos leyes. Los diputados de la mayoría estamos preocupados por la sanción rápida de estos decretos, no por un capricho de carácter político, no por imponer a la minoría una votación forzada por el número, sino porque reflejamos tal vez más directamente las inquietudes de los trabajadores del interior y de la Capital y recibimos el requerimiento de la gente que está reclamando imperiosamente esa sanción.

Por eso, consideramos que sería un procedimiento peligroso demorar dicha sanción, sin ninguna ventaja, porque absolutamente nada impide que una vez ratificados los decretos se consideren los estudios necesarios para introducir las reformas que se reputen convenientes.

Por eso, la comisión no acepta que se desglosen tales o cuales decretos, o que se entre a considerarlos en particular, porque ello nos insumiría un tiempo de que no disponemos. Por eso es que no aceptamos el procedimiento que han sugerido los señores diputados. No desconocemos que en el fondo tienen algún justificativo, pero por motivos de orden práctico y por la expectativa ambiente en la masa trabajadora estimamos que la Cámara debe terminar hoy con la votación de esos decretos.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Curchod. — Si la comisión especial hubiera despachado los decretos leyes en la forma sancionada por el Senado de la Nación, yo no hubiera interferido para pedir esta votación especial, referente al decreto 33.302. Suscribo el concepto del señor diputado de que la opinión pública, y especialmente los obreros y empleados están pendientes de su sanción. Más aún: los empleados del Estado, que también tienen derecho a recibir los beneficios del sueldo anual complementario, y que conocen el despacho inserto en el orden del día 116 que les otorga ese derecho, están también esperan-

zados en la sanción de esta Cámara. Pero, como digo, si se hubieran sancionado los decretos leyes en la forma venida del Senado, yo no hubiera hecho cuestión a fin de que se convirtieran en ley inmediatamente, pero como van a tener que volver al Senado, con motivo de las modificaciones introducidas, si han de volver por una que vuelvan por todas las que sean necesarias. Por ello, pido que se ponga a votación el despacho hasta el decreto 33.302.

Sr. Presidente (Guardo). — Se votará primero la proposición del señor diputado por la Capital, miembro de la comisión; si es rechazada, se considerará la que propone el señor diputado por Córdoba.

Sr. Alvarez (N.). — Pido la palabra.

Yo era uno de los diputados que creían que los decretos se iban a discutir por partes. A la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes han llegado algunas objeciones remitidas por entidades gremiales y que se refieren al 33.302. Sin que yo quiera interferir en la decisión que va a tomar esta Cámara, quiero dejar aclarado mi punto de vista para que sirva como precedente cuando las organizaciones se presentes nuevamente a reclamar sobre un aspecto de este decreto.

Cuando se dictó el decreto 31.665 que instituye el régimen de previsión para el personal de comercio y actividades afines y civiles, entraron a formar parte de ese personal algunos gremios que evidentemente no representa gremialmente la federación que representa al personal de empleados de comercio, es decir, que se incluyó al personal de automotores, al personal de molineros y de otras actividades, que cuenta con organismos que los representan.

El artículo 77 del decreto 33.302 determina que los empleados y obreros beneficiados con el aumento establecido en el artículo 62, están obligados a contribuir por esta única vez en la obra gremial, social y cultural con el importe del aumento correspondiente al segundo mes, de acuerdo a la forma que a continuación se detalla. Y agrega: los empleadores deberán retener el importe del aumento del sueldo o salario a su personal comprendido en las previsiones del inciso 1º del artículo 62 del presente decreto. Y al final dice: el importe de estos aumentos pasará a reforzar los fondos de la Confederación General de Empleados de Comercio.

Por otra parte, la comisión aconseja que se incluya también dentro del decreto 33.302 al personal ferroviario, y dice: de acuerdo a lo que establecen los artículos 45, 62, 63, 64, 65 y 77. De acuerdo al artículo 77, a mi entender, el medio mes de sueldo corresponde a la Confederación de Empleados de Comercio.

Sr. Curchod. — En otro orden del día se contempla este asunto...

Sr. Alvarez (N.). — Estoy discutiendo este orden del día.

Han llegado a la comisión las observaciones de varias organizaciones. No quiero hacer un cargo a la comisión, pero lo cierto es que no las ha tenido en cuenta; pero si esto se convierte en ley se va a crear dentro de las organizaciones obreras un mar de fondo, que no se justifica, si no se modifica la distribución. Yo había previsto que estos fondos fueran a las organizaciones sindicales respectivas para ser distribuidos en forma equitativa y proporcional como corresponde.

No podemos pasar por alto esto, considerando la amistad que tengo con la Federación de Empleados de Comercio y particularmente con el señor diputado Argaña. Yo no podría silenciar esto porque creo que evidentemente en cuanto a esos fondos la ley da a una organización, un monopolio de derecho que creo no corresponde. Entiendo que en el momento en que esto se vaya a distribuir se llamará a las organizaciones que tengan personal afiliado al decreto 31.665.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Curchod. — Coincidiendo con el pensamiento del señor diputado Alvarez, la comisión oyó también la voz de los distintos gremios, y especialmente la de la Confederación General del Trabajo, representada en ese momento, y por una coincidencia feliz, por el señor diputado Pontieri. Así, en el despacho se establece, en el artículo 58: «Los empleadores y obreros beneficiarios de los aumentos de emergencia establecidos en el decreto del Poder Ejecutivo 33.302 y que no hubieren cumplimentado el artículo 77 del mismo, conforme a lo especificado en dicho artículo, contribuirán a reforzar por una sola vez, los fondos de sus respectivas entidades gremiales, con el importe del aumento correspondiente a un mes calendario.»

Con esto dejo aclaradas las objeciones que formula el señor diputado.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Argaña. — A propósito de las observaciones del señor diputado por la Capital, no voy a hacer una disquisición de carácter teórico para determinar el derecho que asiste a las organizaciones sindicales en conjunto, en relación a la aplicación del artículo 77 del decreto 33.302; pero digo a la Honorable Cámara que en las manifestaciones del señor diputado Alvarez hay un error de concepto fundamental, un error garrafal.

La posición jurídica de un empleado o de un trabajador no la determina ni la determinó nunca la organización a la cual está afiliado, sino la función que desempeña. Los empleados de comercio lo son porque desempeñan funciones de tales, así el que barre la más grande casa

comercial, el conductor que lleva en el camión las mercaderías, el vendedor en el mostrador, el personal de oficina. Lo son en las empresas de transporte, que no se rigen por leyes especiales o que tengan un régimen de jubilación particular, porque lo único que expenden son boletos. Todos ellos son empleados de comercio. La gama de empleados de comercio, en la acepción genérica, tiene muchas formas, y al estudiar las cláusulas del decreto 33.302, se consideró razonable que la organización que había dedicado sus afares a la estructuración de ese decreto, que había llegado a finiquitar los estudios para aplicarlo, hacía dos grandes divisiones entre los trabajadores beneficiarios del mismo: los que estaban bajo el régimen del decreto 31.665 y los otros pertenecientes a otras actividades, ya sea como afiliados a la caja, u obreros de industrias particulares, a los que rige la disposición del apartado 2º del artículo 77, y depositen los empleadores, esos fondos, a nombre de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Esas son las razones, explicadas con las menos palabras posibles. Si se entrara a discutir en particular este decreto, habría que dar muchas razones para proponer lisa y llanamente la derogación de los artículos 77 y 78. No lo voy a hacer porque no deseo abrir una brecha para una discusión en particular y asumir la responsabilidad ante los trabajadores de que por una imprudencia o un prurito de perfeccionamiento se demorara esta sanción que tanto les preocupa.

Sr. Fernández (H. S.). — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Guardo). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Considero que estamos en un círculo vicioso al seguir considerando en particular los distintos y múltiples aspectos que pueden tener todos y cada uno de los decretos que están a consideración. Creo que el debate ha sido suficientemente amplio y que se han dado las razones por las cuales la comisión aconseja el temperamento a seguir.

En consecuencia, para evitar que continuemos en esta discusión casi en particular, y que podría repetirse en numerosísimos casos, hago indicación de que se cierre el debate y se vote la moción formulada por el señor diputado Argaña, indicando el procedimiento que debe seguirse.

Sr. Frondizi. — La minoría de la comisión no está de acuerdo.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

—Se vota y resulta afirmativa de 60 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la proposición hecha por el señor diputado por la Capital, en el sentido de que al votarse el artículo

lo 1º queden comprendidos en la votación todos los decretos transcritos hasta la página 1907 del despacho. El señor diputado no ha aceptado el desglose propuesto por los señores diputados por Santiago del Estero y por Buenos Aires.

Sr. Frondizi. — La minoría de la comisión acepta las proposiciones de los señores diputados Zanoni y Ferrer.

—Se vota y resulta afirmativa de 57 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 1º del despacho, que comprende los decretos transcritos hasta la página 1907 inclusive.

Sr. Ravignani. — Pido la palabra. Deseo aclarar...

Sr. Presidente (Guardo). — Se está votando.

—Se vota el artículo 1º y resulta afirmativa de 61 votos; votan 88 señores diputados.

Sr. Ravignani. — Quiero dejar perfectamente establecido el voto de nuestro sector por la negativa, respecto a los artículos 1º, 5º, 12, 13, 14 y concordantes del decreto 15.074/43.

Sr. Presidente (Guardo). — Quedará constancia.

En consideración el artículo 2º del despacho, que figura en la página 1908 del orden del día 175.

—Se vota y resulta afirmativa de 69 votos; votan 90 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración el artículo 3º.

Sr. Visca. — Pido la palabra.

Deseo dejar constancia de la complacencia con que he visto la inclusión en este artículo del proyecto de ley que he presentado juntamente con el diputado Sarmiento, por el que se establece la abolición de la propina como remuneración en todo el territorio de la República.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 3º.

—Se vota y resulta afirmativa de 71 votos; votan 89 señores diputados.

—En consideración el artículo 4º.

Sr. Curchod. — Pido la palabra.

Me parece muy justo que se haya extendido al gremio de ferroviarios los beneficios del sueldo anual complementario y los aumentos de sueldos. Ello no obstante, voy a pedir que al final del artículo 4º se agregue el artículo 34 del orden del día 116, que dice así:

«Todo empleado u obrero que trabaja al servicio del Estado o de sus reparticiones autár-

quicas, percibirá, una vez que se incluya en la ley de presupuesto la partida correspondiente, el sueldo anual complementario de acuerdo con la siguiente escala:

«Hasta \$ 300 el	100 %
de \$ 301 a „ 400 „	80 „
„ „ 401 „ „ 500 „	60 „
„ „ 501 „ „ 600 „	50 „
„ „ 601 „ „ 700 „	40 „
„ „ 701 „ „ 800 „	30 „

«Los empleados cuyos sueldos fueren superiores a 800 pesos quedan excluidos del sueldo anual complementario.»

Entiendo que para los empleados del Estado existen las mismas razones que para los de empresas particulares, en cuanto al sueldo complementario. Esa mejora se incluyó en el decreto 33.302, en atención al aumento del costo de la vida; por eso entendió la comisión que debían estar comprendidos también los obreros y empleados del Estado en ese beneficio, cuando los sueldos no fueran superiores a 800 pesos. A ese efecto, el señor ministro de Hacienda concurrió a la comisión a su requerimiento y, luego de oponer algunos reparos, se llegó a la conclusión de que sería posible establecer la escala decreciente a que me he referido.

Se solicitaron informes al Poder Ejecutivo sobre el monto que demandará este sueldo anual complementario, habiéndose establecido que será alrededor de 54.000.000 de pesos.

Con estas palabras, dejó fundado el pedido de inclusión del artículo a que me refiero.

Sr. Alvarez (N.). — Pido la palabra.

Desco solicitar que a continuación del artículo 4º se agregue una disposición similar a la del artículo 77, con la diferencia que, en lugar de decir «Confederación General de Empleados de Comercio de la República Argentina», dijera «organizaciones sindicales que acrediten su existencia con anterioridad a la sanción de la presente ley».

Sr. Frondizi. — Pido la palabra.

La minoría de la comisión ve complacida que el alcance del decreto 33.302 se extienda también al personal ferroviario, pero no puede dejar de señalar que la corrección de las exclusiones del decreto no es completa.

En realidad, pese a la disposición del artículo 4º, quedan fuera del régimen general del decreto 33.302 trabajadores de distintos gremios. Me bastaría recordar a los domésticos, y a los empleados y obreros del Estado.

Como participamos de los puntos de vista expuestos por los señores diputados Rojas y Curchod, la minoría de la comisión sostiene que en el artículo 4º debe declararse que a partir de la fecha de promulgación de esta ley se

adopta el orden del día 116, que resuelve en forma científica todos estos problemas y, sobre todas las cosas, que lo extiende a todas las personas, sin distinción de sexo, que trabajen por cuenta ajena.

Si la mayoría de la Cámara resolviera votar el artículo 4º tal cual viene a nuestra consideración —es decir, que no aprobara el orden del día 116—, apoyaríamos la indicación del señor diputado Curchod: que se incluya el artículo 34 de ese orden del día en cuanto a sueldo anual complementario para los empleados y obreros que trabajan al servicio del Estado o en las reparticiones autárquicas.

Con eso no hacemos sino ratificar el criterio adoptado por nuestro bloque a través de un proyecto que en una de las primeras sesiones presentó el señor diputado Martínez Guerrero.

En resumen, deseamos que quede clara y categóricamente establecido que sostenemos la extensión de estos beneficios a todos los trabajadores particulares y del Estado.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Díaz. — Mi opinión sería coincidente con la del señor diputado Frondizi; pero para incluir a todos los empleados públicos en estos beneficios —desde luego muy laudable el propósito—, habría que votar las fuentes de recursos al Poder Ejecutivo.

Sr. Frondizi. — Se podría recurrir a una parte de los recursos que se van a tener para el plan quinquenal...

Sr. Díaz. — ¿Y anulamos el plan quinquenal?

Sr. del Carril. — ... y el aumento a los militares.

Sr. Frondizi. — Es claro.

Sr. Díaz. — Eso es lo que quieren ustedes.

Sr. Zara. — ¿Y a las empresas privadas no les buscan los recursos?

Sr. Díaz. — Acepto la inclusión de los ferroviarios, cuya erogación es insignificante.

Sr. Zara. — ¿A cuánto alcanza?

Sr. Díaz. — Ya le diré.

Propongo a la comisión la supresión del artículo 77 que está incluido en este artículo, y que diga así: «A partir de la fecha de la promulgación de esta ley, el personal incluido en la ley 10.650, de toda la República, estará comprendido en las disposiciones que establecen los artículos 45, 62, 63, 64, 65 y 78 del decreto 33.302.»

Sr. Rojas (N.). — Pido la palabra.

Voy a reforzar los argumentos dados, para que la Cámara apruebe el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo sobre el decreto 33.302, en lugar de la proposición de la mayoría de la comisión.

Sr. Benítez. — Ese decreto ya quedó ratificado.

Sr. Rojas (N.). — Parece que el señor diputado Benítez se siente todavía ministro. Debería dejarnos hablar.

Sr. Benítez. — Advertía que el decreto había sido ratificado.

Sr. Ravignani. — Puede quedar ratificado hasta hoy, y seguir en vigencia el orden del día 116. Ese es nuestro criterio.

Sr. Rojas (N.). — Estoy buscando la forma de ponernos de acuerdo.

El asunto que tiene para resolver la Cámara es muy distinto de las modificaciones que se proponen respecto de otros decretos leyes. Hago notar a la Cámara que si hay algún asunto en el cual no improvisaría al adoptar el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, es precisamente éste. El sector de la mayoría es muy celoso del pase a comisión de todos los asuntos, y se da el caso de que éste es el único de todos los decretos leyes sobre el cual hay un despacho de la comisión especial de esta Cámara; y es curioso que sea la mayoría la que venga a desautorizar a sus propios correligionarios de la Comisión de Legislación del Trabajo, que de acuerdo con el sector radical han producido el dictamen por unanimidad.

Insisto en que es ésta una desautorización a toda la comisión que ha estudiado este asunto para mejorar el decreto 33.302. Todos los otros problemas quedan resueltos, tanto el de los ferroviarios como el que ha planteado el señor diputado Alvarez, adoptando el texto aconsejado por la comisión, o sea el del orden del día 116, porque hemos estudiado y resuelto del mejor modo posible todas las cuestiones que planteaba el decreto.

Por eso, apoyo la moción. Luego concretaremos si se ha de hacer en la forma propuesta por el señor diputado Curchod o en la propuesta por el señor diputado Frondizi en nombre de la minoría de la comisión especial.

Sr. Benítez. — La mayoría de la comisión mantiene su despacho y no acepta ninguna de las modificaciones que se proponen al artículo 4º, como única manera de mantener la unidad de criterio con que ha formulado el despacho total.

Pido, en consecuencia, que se vote el despacho tal cual está redactado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el despacho de la mayoría de la comisión.

Sr. Frondizi. — Deseo pedir a la Presidencia una aclaración.

Si la votación resultara afirmativa, naturalmente quedaría rechazado el punto de vista sostenido por la minoría de la comisión; pero entiendo que, aun votado afirmativamente el artículo 4º, habría que someter a votación el agregado propuesto por el señor diputado Curchod. ¿Es así?

Sr. Presidente (Guardo). — Sí, señor diputado.

Sr. Benítez. — La comisión no acepta ninguna de las modificaciones.

Sr. Presidente (Guardo). — Pero hay que votar el agregado.

Sr. Ravignani. — La votación no es rechazo.

Sr. Presidente (Guardo). — Se votará primero el despacho de la comisión, y luego el agregado.

Sr. Sammartino. — Quiero significar brevemente que, si se vota tan sólo el despacho de la comisión, van a quedar excluidos de los beneficios de este decreto los trabajadores del servicio doméstico, además de los trabajadores del Estado.

Me refiero concretamente a los trabajadores del servicio doméstico, por lealtad a los principios de un proyecto que presenté al iniciar el período de sesiones ordinarias.

Quiero recordar que ese importante gremio carece de los beneficios de la legislación obrera. Las leyes de accidentes de trabajo, de maternidad, de trabajo nocturno, etcétera, no comprenden a los trabajadores del servicio doméstico.

La Honorable Cámara no puede cometer la injusticia de dejarlos excluidos de los beneficios del decreto 33.302.

Se habla con frecuencia de justicia social, pero la justicia social no llega a esos trabajadores humildes que están al margen de la legislación obrera del país.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el artículo 4º del despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa de 65 votos; votan 87 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Córdoba.

Sr. Benítez. — La comisión no acepta.

Sr. Frondizi. — La minoría de la comisión acepta.

Sr. Rojas (N.). — Pido que se vote nominalmente. Que quede constancia de que en votación anterior se ha excluido de los beneficios del decreto a todos los trabajadores del Estado, a los de las empresas de servicios públicos y al servicio doméstico.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyada la indicación de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por Córdoba, que no ha sido aceptado por la mayoría de la comisión, y que es aceptado por la minoría.

—Al producirse la votación nominal:

Sr. Visca. — Se está votando en error. Pido que se rectifique la votación.

Sr. Zara. — ¿Cómo va a haber rectificación de la votación nominal!

Sr. Visca. — Es que hay diputados que están votando en la creencia de que ésta es una rectificación de la votación anterior. Habiendo error, corresponde la rectificación.

Sr. Zara. — El que haya votado equivocadamente, que lo diga.

Sr. Presidente (Guardo). — Ruego a los señores diputados que hayan votado equivocadamente, que rectifiquen su voto.

Sr. Ravignani. — No puede haber rectificación de una votación nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — Si hay algún diputado que se ha equivocado, puede rectificar individualmente su voto.

Sr. Díaz. — Ya ha ocurrido esta situación otras veces, y se ha votado nuevamente.

Sr. Ravignani. — No, señor presidente; ahí está la votación en el tablero...

Sr. Presidente (Guardo). — Cualquier diputado puede pedir la rectificación de la votación.

Sr. Zara. — ¿Cómo va a pedir que se rectifique el resultado individualizado en el tablero!

Sr. Decker. — Podemos pedir la rectificación, y los señores diputados no nos pueden negar ese derecho.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a hacer nuevamente la votación. Sírvanse marcar su voto los señores diputados.

Sr. Zara. — La Cámara debe resolver si procede la rectificación de una votación nominal. No es posible que las cosas se presenten de esta manera.

Sr. Presidente (Guardo). — Hay precedente, señor diputado.

Sr. Vischi. — Y si no lo hubiera, lo podemos sentar ahora.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a rectificar nominalmente la votación del agregado propuesto por el señor diputado por Córdoba.

Sr. Orozco. — ¿En qué consiste el agregado?

Sr. Frondizi. — Los que votan contra el agregado, votan contra los empleados y obreros del Estado.

Sr. Visca. — ¡No es exacto!

Sr. Benítez. — El señor diputado Orozco ha pedido que se explique en qué consiste el agregado.

Sr. Presidente (Guardo). — A fin de aclarar la votación, se va a dar lectura por Secretaría nuevamente del agregado y se va a votar nominalmente.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — Como apartado 2º del artículo 4º:

«Todo empleado u obrero que trabaja al servicio del Estado o de sus reparticiones autárquicas, percibirá, una vez que se incluya en la ley de presupuesto la partida correspondiente,

el sueldo anual complementario de acuerdo con la siguiente escala:

«Hasta \$ 300 el	100 %
de \$ 301 a „ 400 „	80 „
„ „ 401 „ „ 500 „	60 „
„ „ 501 „ „ 600 „	50 „
„ „ 601 „ „ 700 „	40 „
„ „ 701 „ „ 800 „	30 „

«Los empleados cuyos sueldos fueren superiores a ochocientos pesos, quedan excluidos del sueldo anual complementario.»

Sr. Visca. — Deseo hacer una pregunta a la Presidencia. ¿Están determinados los fondos con que se van a pagar esos sueldos?

Sr. Santander. — ¿Y con qué fondos van a pagar los millones que están votando todos los días?

Sr. Presidente (Guardo). — En conocimiento del agregado, se va a proceder a practicar una nueva rectificación nominal.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Prosecretario (Sánchez Terrero). — Sobre un quórum de 84 señores diputados, han votado 51 por la afirmativa y 33 por la negativa.

—Votan por la afirmativa, los señores diputados: Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Vocos, Aráoz, Ayala López Torres, Balbin, Bonazzola, Calcagno, Cámara, Camus, Cleve, Curchod, del Carril, del Mazo, Dri, Ferrer, Frondizi, Galvagni, García Quiroga, Lasciar, Lencinas, López Serrot, Mac Kay, Malecek, Martínez Guerrero, Montes de Oca, Montiel, Orozco, Pasquini, Pastor, Pérez de la Torre, Pirani, Pomar, Ravignani, Reynés, Rodríguez de la Torre, Rojas (A.), Rojas (N.), Rouggier, Rubino, Rumbo, Sammartino, Santander, Sarraute, Urdapilleta, Valdez, Vanasco, Velloso Colombres, Zanoni, Zara, Zinny.

—Votan por la negativa, los señores diputados: Albrieu, Alvarez Percyra, Argaña, Arias, Ayerbe, Barreiro, Benítez, Boulosa, Cámpora, Casas Noblega, Corvalán, Decker, Degreef, de la Torre, Díaz, Dufau, Fernández (H. S.), Garay, Graña Etcheverry, Letamendi, Mariategui, Martínez Luque, Mendiando, Moreno, Osinalde, Perea, Rodríguez (N. M.), San Millán, Sarmiento, Vergara, Villafañe, Visca, Vischi.

Sr. Sammartino. — Pido la palabra.

Para proponer un nuevo agregado que consistiría en lo siguiente: «Decláranse comprendidos en los beneficios del decreto 33.302 a los trabajadores del servicio doméstico.»

Sr. Presidente (Guardo). — ¿La comisión acepta?

Sr. Benítez. — Ya ha dicho la comisión que no acepta ningún agregado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital.

Sr. Sammartino. — Pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Guardo). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital por el que se extienden los beneficios del decreto 33.302 al personal de servicio doméstico. La mayoría de la comisión no ha aceptado ningún agregado.

—Se practica la votación nominal.

Sr. Prosecretario (Sánchez Terrero). — Sobre un quórum de 81 señores diputados han votado 63 por la afirmativa y 18 por la negativa.

—Votan por la afirmativa los señores diputados: Alvarez (J. D.), Alvarez (N.), Alvarez Vocos, Aráoz, Arias, Ayala López Torres, Balbin, Bonazzola, Calcagno, Cámara, Candioti, Curchod, de la Torre, del Carril, del Mazo, Díaz, Fajre, Ferrer, Frondizi, Galvagni, Garay, García Quiroga, Lasciar, Lencinas, Letamendi, López Serrot, Mac Kay, Malecek, Mariategui, Martínez Guerrero, Martínez Luque, Mendiola, Montes de Oca, Montiel, Moreno, Orozco, Osinalde, Pasquini, Pastor, Pérez de la Torre, Pirani, Pomar, Ravignani, Reynés, Rodríguez de la Torre, Rodríguez (N. M.), Rojas (A.), Rojas (N.), Rouggier, Rubino, Rumbo, Sammartino, San Millán, Santander, Sarraute, Uranga, Urdapilleta, Valdez, Vanasco, Velloso Colombres, Vischi, Zanoni, Zinny.

—Votan por la negativa, los señores diputados: Albrieu, Alvarez Pereyra, Argaña, Barreiro, Benítez, Boullosa, Cámpora, Casas Noblega, Corvalán, Decker, Degreef, Dufau, Fernández (H. S.), Perca, Sarmiento, Vergara, Villafañe, Visca.

—Se lee el artículo 5º.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración el artículo 5º.

Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa de 68 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En nombre de la comisión, el señor diputado Albrieu ha propuesto como artículo 6º el siguiente: «Ratificanse todas las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, modificando la estructura de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y se le faculta para dictar un reglamento que organice y delimite sus funciones de acuerdo con las disposiciones constitucionales sobre autonomías provinciales, hasta tanto se sancione la ley orgánica respectiva.»

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Pastor. — Señor presidente: yo entiendo que el artículo propuesto por el señor diputado Albrieu tiene por objeto solucionar la situación creada por este proyecto con respecto a las autonomías provinciales, y para que quede más concretamente establecido, pido al señor diputado que acepte la substitución de la última parte del artículo proyectado por la siguiente: «Suprimense del decreto número 15.074/43 los artículos 12, 13 y 15. Queda sin efecto el decreto ley 24.095/45.»

Los artículos 12, 13, 14 y 15 del decreto de la Secretaría de Trabajo y Previsión son precisamente los que se refieren al establecimiento de delegaciones en cada una de las provincias, lesionando con ello su autonomía.

De manera que está dentro del espíritu del proyecto del señor diputado, pero en una forma más concreta.

En cuanto a la supresión del decreto 24.095, de 1945, tengo en mi banca una presentación hecha a esta Cámara por la Federación Argentina de Vendedores de Diarios y Revistas, integrada por gremios de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan, Salta, Corrientes y la gobernación del Chaco, en la que se demuestra que ese decreto es contrario a los intereses del gremio y altamente perjudicial para él.

Si los llamados a recibir los beneficios se presentan dando las razones por las cuales lo consideran perjudicial e inconveniente, creo que lo lógico es tomar en cuenta esta presentación, a fin de que este decreto no se convierta en ley, y de que la situación sea objeto de una legislación ulterior. Pido, por lo tanto a los señores diputados que acepten este temperamento.

Sr. Albrieu. — Con respecto a la modificación que solicita el señor diputado Pastor, creo que con el artículo propuesto se soluciona toda cuestión de orden constitucional, desde el momento que la organización que dará el Poder Ejecutivo respetará las autonomías provinciales. Algunas legislaturas de provincia han autorizado e investido de poderes a las delegaciones regionales sobre materia de trabajo. Por otra parte, la Secretaría de Trabajo siempre podría tener delegaciones que no chocaran ni

provocaran colisión con los poderes de las provincias, como serían las que se refieren, por ejemplo, a la atención y seguridad de los trabajadores, a la asistencia social, al amparo del goce de los derechos del nivel de vida, orientación y formación profesional, fomento de viviendas económicas, protección de la infancia y maternidad, cuestiones de inmigración, investigación y estudios estadísticos y sobre todos los hechos atinentes a materia social y de trabajo, etcétera. Siempre se podrían mantener, cuando no se inmiscuyan con los poderes propios de las provincias.

Sr. Pastor. — Con esa interpretación se puede aceptar.

Sr. Albrieu. — Es la interpretación que se va a dar al organizar la Secretaría de Trabajo.

Sr. Pastor. — La Confederación Argentina de Vendedores de Diarios y Revistas pide que por ahora no se dicte el estatuto, porque no les conviene. La Confederación Argentina de Vendedores de Diarios y Revistas, que congrega al gremio en casi todas las provincias, se ha presentado esta tarde a la Cámara pidiendo que se suprima la sanción de ese estatuto, tal cual está estructurado en el decreto ley 24.095/45.

Sr. Albrieu. — Como es propósito de los sectores de esta Cámara llegar a una sistematización de un nuevo código de trabajo, creo que vamos a tener en ese entonces, y dentro de la mayor justicia posible, la oportunidad de reformar toda la legislación social, actualizándola y poniéndola de acuerdo con los cánones respectivos y especialmente con el tecnicismo jurídico. No quisiéramos dejar desprotegidos a esos trabajadores.

Sr. López Serrot. — Ante la manifestación del

señor diputado Albrieu, de que es propósito de todos los sectores de esta Cámara llegar a concretar un código de trabajo, quiero recordar que en la primera sesión de esta Cámara tuve la satisfacción de presentar un proyecto de resolución tendiente a obtener la concreción de un proyecto de código de trabajo; hasta la fecha, precisamente por decisión de los colegas del señor diputado Albrieu, no se ha podido lograr que entre a esta Cámara el despacho pertinente que nos permitiera sancionar a la brevedad posible ese código, lo que nos habría evitado muchas de estas discusiones.

Sr. Albrieu. — Previamente debíamos abocarnos al estudio de los decretos leyes que fueron dictados sobre ese importante aspecto.

Sr. Díaz. — Que se vote.

Sr. Pastor. — Pediría que, por lo menos, se incorpore al Diario de Sesiones la solicitud de la Confederación Argentina de Vendedores de Diarios y Revistas.

Sr. Presidente (Guardo). — Esa solicitud no ha entrado aún a la Cámara, señor diputado.

Sr. Pastor. — Muy bien; haré la indicación en la sesión de mañana.

—Mientras se llama para formar quórum.

Sr. Albrieu. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Guardo). — En estos momentos se informa a la Presidencia que no hay número en la casa.

Queda levantada la sesión.

—Es la hora 2 del día 21 de noviembre.